Leandro Losada (comp.)
Política y vida pública
Argentina (1930-1943)
Leandro Losada (comp.)
Política y vida pública
IM
IMAGO MUNDI

Política y vida pública

Leandro Losada
(compilador)

Política y vida pública

Argentina (1930-1943)

ediciones
IMAGO
MUNDI

COLECCIÓN BITÁCORA ARGENTINA
Dirigida por Alejandro Falco

Leandro Losada (compilador).
Política y vida pública. Argentina (1930-1943). 1a ed. Buenos Aires: 2017.
152 p.; 15x22 cm.
ISBN 978-950-793-251-9
1. Política. I. Losada, Leandro, comp.
CDD 320.82
Fecha de catalogación: 20/07/2016
© Leandro Losada 2017,
© 2017, Ediciones Imago Mundi
Ilustración de tapa: foto campaña presidencial 1937, AGN.
Hecho el depósito que marca la ley 11.723
Impreso en Argentina, tirada de esta edición: 500 ejemplares

Este libro se terminó de imprimir en el mes de octubre de 2017 en Gráfica San Martín, Pueyrredón 2130, San Martín, provincia de Buenos Aires, República Argentina. Ninguna parte de esta publicación, incluido el diseño de cubierta, puede ser reproducida, almacenada o transmitida de manera alguna ni por ningún medio, ya sea eléctrico, químico, mecánico, óptico, de grabación o de fotocopia, sin permiso previo por escrito del editor.

Índice general

Presentación IX

1 Una década de transformaciones en el radicalismo. **Sebastián R. Giménez** 1

1.1. Disputas partidarias, disputas historiográficas (pág. 1). **1.2.** Una crisis y una oportunidad (pág. 7). **1.3.** La integración en la república del fraude (pág. 11). **1.4.** Conclusiones (pág. 16).

2 Un frente nacional en tiempo de crisis: la Concordancia y el ocaso de la política de los viejos acuerdos. **Ignacio A. López** 19

2.1. Introducción (pág. 19). **2.2.** Emergencia y consolidación (1931-1935) (pág. 22). **2.3.** Supervivencia y equilibrio (1935-1940) (pág. 26). **2.4.** Reconfiguración y colapso (1940-1943) (pág. 29).

3 Catolicismo y política en una república imaginada. **José Zanca** . . 35

3.1. El poder y la gloria (pág. 36). **3.2.** De la unidad al conflicto (pág. 41). **3.3.** Reflexiones finales (pág. 47).

4 La derecha nacionalista. Decepciones políticas e influjos culturales. **Olga Echeverría** 51

4.1. La constitución de un actor político: la derecha nacionalista en el escenario político argentino (pág. 51). **4.2.** La construcción del golpe de Estado y las contribuciones de la derecha de proyección nacionalista (pág. 53). **4.3.** El golpe del 6 de septiembre de 1930 y la «década infame» (pág. 56). **4.4.** El pensamiento como acción (pág. 61).

5 Comunismo y cultura política comunista: el momento antifascista. **Ricardo Pasolini** 67

5.1. Introducción (pág. 67). **5.2.** Organización celular, clasismo, antifascismo (pág. 70). **5.3.** La persistencia del frente único (pág. 74). **5.4.** Hacia el frente popular antifascista (pág. 76). **5.5.** La AIAPE, defensa de la cultura o las relaciones entre comunismo y nación (pág. 80). **5.6.** Algunas consideraciones finales (pág. 83).

6 El Partido Socialista en los años treinta. **Ricardo Martínez Mazzola** . 85

6.1. El lugar del PS en el sistema político de comienzos de siglo. Breve recapitulación (pág. 86). **6.2.** El PS ante la dictadura de Uriburu (pág. 88). **6.3.** La búsqueda de una alternativa revolucionaria y el surgimiento del Partido Socialista Obrero (pág. 91). **6.4.** La cuestión gremial. Viejos problemas, nuevos dilemas (pág. 94). **6.5.** ¿Reformismo radical, revolución constructiva? La apuesta de los «planistas» (pág. 97). **6.6.** Una salida trunca. Socialismo, antifascismo y frente popular (pág. 99).

7 Rivalidades persistentes, reconfiguraciones frustradas. La negociación Alvear-Pinedo y la política argentina a inicios de la década de 1940. **Leandro Losada** 103

7.1. Los prolegómenos. Oficialismo y oposición durante la presidencia de Ortiz (pág. 104). **7.2.** La negociación Alvear-Pinedo (pág. 107). **7.3.** Conclusiones (pág. 115).

Los autores 121

Referencias bibliográficas. 123

Presentación

Leandro Losada

.....

El período comprendido entre las dos crisis políticas e institucionales de 1930 y 1943 ha concitado la atención de historiadores, politólogos, sociólogos y ensayistas. Incluso no es desatinado afirmar que es un momento de la historia argentina que dejó su impronta en la memoria colectiva. Así lo ejemplifica la expresión «década infame», inicialmente formulada por un publicista nacionalista en la década de 1940 y, tiempo después, reutilizada para fechar allí el inicio de la tortuosa historia de la democracia en la Argentina del siglo XX (tal como puede constatarse en el documental *La República Perdida* [Miguel Pérez 1983]).

Semejantes rótulos no gozan ya de consenso entre los historiadores. La historiografía ha operado una renovación en dos planos. Por un lado, se han revisado los tópicos más usuales (además del recién referido, otros como el de «restauración oligárquica»). En segundo lugar, se han abierto interrogantes y agendas de investigación. En esta tarea, la historia política, en especial desde mediados de la década de 1990, ha jugado un papel central. Pues reposicionó la relevancia de estudiar la política de la época frente a exploraciones que, cumpliendo un rol fundamental en la revisión interpretativa, se habían guiado sobre todo por problemas de historia social o económica. Y, por otro lado, porque produjo un desplazamiento, y con ello, una renovación, al no colocar la atención en las fuerzas armadas o el sindicalismo, los actores de la vida pública que más frecuentemente habían interpelado a los investigadores (cfr. De Privitellio y López 2015).

El presente volumen se inscribe en este panorama historiográfico. Ofrece una serie de artículos con miradas panorámicas sobre la Unión Cívica Radical (UCR), la Concordancia, los católicos, los nacionalistas, los comunistas y los socialistas, entre 1930 y 1943. Cada trabajo brinda, además, una ponderación de la producción historiográfica sobre el objeto que le concierne. Y reconstruye, según el caso, las apuestas y acciones públicas, en la política electoral, en la opinión y en la prensa, incluso en la cultura; las

líneas y divisiones internas; las opiniones sobre el país y el mundo. El libro se cierra con un texto dedicado a un episodio puntual, las negociaciones entre Marcelo T. de Alvear, entonces presidente de la UCR, y Federico Pinedo, ministro de Economía, en el verano de 1940-1941, que analiza ese suceso como un punto de mira desde el que trazar una visión general de la política del período.

Dos son las razones que motivaron la preparación de esta compilación. Por un lado, la advertencia de que, a pesar de la importancia que la historia política ha tenido en la renovación interpretativa de los años 1930-1943, es posible notar que esta se ha visto algo desplazada por otro tipo de agendas. Algunas, no necesariamente escindidas de preocupaciones vinculadas al sistema político, pero por cierto apartándose de él como objeto de investigación, como las volcadas a la participación ciudadana en la esfera pública. Otras, más inscriptas en problemas de historia cultural o intelectual: las industrias culturales (de la prensa a la radio y el cine), los cenáculos y sociabilidades intelectuales, y en este horizonte, las configuraciones delineadas por el antifascismo, se cuentan entre las más notorias. La segunda razón que alentó este libro ha sido que, quizás a raíz de lo anterior, existen estudios omnicomprensivos (ejemplar al respecto Halperin Donghi 2004), pero es difícil hallar textos abocados a la reconstrucción de la trayectoria específica y singular de los principales actores y corrientes de la vida pública argentina entre 1930 y 1943. En consecuencia, la intención ha sido volver a, y a la vez enriquecer, la historia política.[1]

Según ya se ha dicho, el lector encontrará en cada trabajo un estado de la cuestión de sus respectivos objetos de interés, lo cual hace innecesario desarrollar aquí una contextualización historiográfica detallada. En cambio, y para cerrar esta presentación, sí es posible pensar algunos ejes que vertebran o vinculan a los textos entre sí.

En primer lugar, un punto a destacar es que la crisis política e institucional, e incluso la crisis del (o mejor dicho, la persistente dificultad de constituir un) sistema de partidos, razón por cierto aludida con reiteración por los contemporáneos para diagnosticar su decepción o desconcierto ante los rumbos tomados por el país desde la sanción de la ley Sáenz Peña en 1912, no debería conducir automáticamente a afirmar una crisis de la vida política partidaria, al menos fronteras adentro de cada fuerza, y en el sentido de una atenuación o apocamiento de su intensidad. Con relación al oficialismo, cierto es que la Concordancia no fue un «partido»

1.– Vale precisar que no se incluye un trabajo sobre el Partido Demócrata Progresista. Al respecto cabe decir que, a diferencia de los otros espacios y tendencias, la proyección nacional del PDP en los años treinta coexistió con su carácter de nucleamiento fundamentalmente santafesino, y, en segundo lugar, que hay trabajos disponibles para reconstruir el itinerario de esta agrupación en el largo plazo. Cfr. Malamud (2000) y Mauro (2013).

sino una coalición flexible, de múltiples combinaciones en los espacios provinciales, y cuyo equilibrio interno tenía como resorte decisivo de última instancia a fuertes liderazgos personales (entre los que sobresalió, desde ya, el de Agustín Justo). Aun así, cada uno de sus componentes (socialistas independientes, demócrata nacionales – en sí mismos una conjunción de nucleamientos locales, por ello con ascendencia del que procedía del distrito más grande, el conservadurismo bonaerense – y radicales antipersonalistas), con distinta intensidad y grado de éxito, procuró darse una estructura formal que supusiera un cambio cualitativo respecto a un funcionamiento exclusivamente basado en relaciones personales, fuera para moderar las disputas facciosas internas, fuera para contener la gravitación de las figuras «arbitrales» de la coalición (baste como ejemplo la difícil relación que unió a Justo con los conservadores bonaerenses), fuera para robustecer su posición en el conglomerado mayor del que formaban parte.

Respecto de la oposición, el escenario abierto a partir del golpe de Estado de 1930 sin dudas fue en sí mismo un desafío e incluso un obstáculo para el despliegue de la actividad proselitista y partidaria de la UCR, el Partido Socialista (PS) o el Partido Comunista (PC). El Estado de sitio, primero, la abstención radical o el fraude electoral, después, indudablemente implicaron una distorsión de la vida pública. Pero, de todos modos, los trabajos aquí reunidos, si analizan y demuestran los problemas que semejantes coordenadas trajeron consigo, también revelan, además del impacto diferencial de ese contexto sobre cada fuerza (por ejemplo, los beneficios obtenidos por el socialismo en su representación parlamentaria gracias a la abstención del radicalismo), la voluntad, y la capacidad, que mostraron durante gran parte del período las cúpulas dirigentes para hacer frente a impugnaciones internas y condicionamientos externos, incluso a fracturas y desprendimientos, y entre cuyas respuestas se contó el hecho de desplegar actividades incluso por afuera de la estructura partidaria propiamente dicha, para volcarlas a través de sociabilidades o diferentes tipos de organizaciones (que vuelven reduccionista identificar al socialismo o al comunismo, por ejemplo, sólo o exclusivamente con sus respectivos partidos).

El desgaste y las desafecciones que los círculos directivos partidarios sufrieron ya a inicios de la década de 1940 (y que, en parte, subyacen a la crisis que explicitaría el golpe de Estado de 1943) fue el resultado de una historia más sinuosa de lo que a menudo se ha pensado, que no debería ocultar la aptitud o la versatilidad que esos mismos sectores tuvieron para hacer frente a dificultades (el veto a la fórmula presidencial y la abstención en 1931, así como las tendencias revolucionarias, en la UCR; el hostigamiento gubernamental sobre las izquierdas), y no olvidar que decisiones retrospectivamente criticadas, gozaron de un considerable aval en su momento (tal el caso del retorno a la competencia electoral en el radicalismo).

En espejo a esto, por lo demás, la desmovilización de la ciudadanía o la apatía política, fenómeno por cierto aludido (cfr. Halperin Donghi 2004) se recorta como un problema a ser historiado. Las insistentes invocaciones a la conciencia cívica o a la regeneración política, que sugerirían su ausencia o atenuada presencia, confrontan con la evidencia, por ejemplo, de iniciativas desplegadas por el catolicismo (pero también por el comunismo), que constituyeron, y que por lo tanto posiblemente respondieron a una demanda preexistente de, «escuelas de ciudadanía» en amplios sectores de la población, entre ellos, las mujeres (si bien las nociones maternalistas mantuvieron su vigencia como forma de proyectar el papel público femenino –esfuerzos a los que tampoco fueron ajenos los exponentes más radicales del nacionalismo–). A ello hay que sumar, desde ya, los emprendimientos del socialismo y del comunismo para tejer y densificar sus vínculos con el movimiento obrero (y, por cierto, con otras franjas de la sociedad, especialmente las capas medias urbanas) a través del partido, del sindicalismo o de la prensa y ámbitos de sociabilidad.

Todo esto autoriza a volver sobre un punto clásico de la historiografía del período, para precisarlo en sus términos: el que remite a la separación entre sociedad y política, en tanto que extrañamiento de esta respecto de aquella, circunstancia sin la cual ciertamente es difícil pensar la crisis de 1943. Las evidencias presentadas por los estudios aquí compilados indican, entonces, que debería concebirse como el resultado de la imposibilidad o de las dificultades de incorporar las demandas, o incluso de ofrecer un lugar a los mismos sectores sociales madurados al compás de las transformaciones económicas y sociales de la década, antes que el fruto exclusivo de una ceguera o de un cierre voluntarios frente a esas demandas deparadas por el incontenible despliegue de una sociedad de masas.

En segundo lugar, un fenómeno que puede pensarse como transversal a partir de los artículos de este volumen es la creciente tendencia a situar los problemas argentinos en el contexto internacional. El comunismo, el nazifascismo, la Guerra Civil Española, la Segunda Guerra Mundial, no operaron como un simple «telón de fondo»; su gravitación o sus reverberaciones en el contexto local inspiraron diagnósticos e intervenciones (políticas e intelectuales) en las izquierdas y en el nacionalismo; en católicos, conservadores y radicales. La «crisis de civilización»; el imperialismo; el fascismo; el peligro revolucionario y la infiltración comunista (no sólo temida y denunciada entre nacionalistas, conservadores o radicales, sino también en el socialismo) fueron grillas y rótulos crecientemente movilizados, así como también adquirió espesor la circulación entre Europa y Argentina de referentes y protagonistas de distintos espacios políticos, que incidieron en los cursos de acción y en los debates suscitados en su interior (como lo ejemplifica la trayectoria de Aníbal Ponce en el comunismo o el impacto de la visita de Jacques Maritain entre los católicos).

De todos modos, y en tercer lugar, las investigaciones aquí volcadas a la vez sugieren la inadecuación de pensar lo local como simple transposición del escenario internacional, y no sólo por la obvia razón de que es improbable que un fenómeno social o político se replique de manera exacta en situaciones por definición distintas. Las mediaciones entre las tendencias mundiales y las locales obedecieron, por un lado, a que algunos aspectos que cobraron visibilidad en los años treinta a nivel mundial se manifestaron con anterioridad en la Argentina (tal el caso de la consigna antifascista en el comunismo, presente desde los años veinte, si bien en clave «clasista» y en buena medida como corolario de la preponderancia italiana en la clase obrera local en ese entonces).

Por otra parte, la ponderación de la situación local en el escenario mundial, posiblemente más importante en aquellos espacios o corrientes que por su misma naturaleza tenían una vocación o una proyección internacional (el socialismo, el comunismo, el catolicismo) no eliminó una interpretación de los sucesos argentinos en una clave específicamente vernácula. Los «males argentinos» como consecuencia de la dominación de una oligarquía omnipotente desde los mismos orígenes de la nación (por cierto aludida a derecha e izquierda del espectro político ideológico, cfr. Losada 2015) o la confianza en la excepcionalidad argentina por su carácter de país nuevo, que por ello no podía reproducir los disturbios y las «tormentas» del viejo mundo (Halperin Donghi 2003), son dos expresiones singulares de un prisma similar, que incidieron en interpretaciones y miradas de la historia nacional, o en formulaciones intelectuales, pero asimismo en decisiones políticas, en tanto cimentaron semblanzas del escenario sobre el que debía desplegarse la acción.

Algo similar puede decirse con relación a las maneras de interpretar la experiencia yrigoyenista. Incluso entre quienes no apoyaron explícitamente su derrocamiento (como el socialismo) prevaleció la consideración de que había sido una distorsión de la «República Verdadera» que exponía la vigencia de viejos vicios argentinos, el personalismo, la demagogia, el autoritarismo plebiscitado por las masas. Su destitución, en consecuencia, tendió a concebirse como la expulsión del poder de un mal gobierno para salvar la Constitución (y no como un golpe de Estado contra un gobierno constitucional). Fue esta lectura preponderante la que subyació a quienes, de un lado, vieron la caída de Yrigoyen como la oportunidad para la regeneración cívica y política del país (o del propio partido, como ocurrió en el mismo radicalismo); a quienes, desde el ángulo opuesto, pretendían retrotraer el estado de situación a coordenadas similares a las prevalecientes hasta 1912; o a aquellos que, ubicados en las franjas más radicalizadas, plantearon que debían buscarse alternativas novedosas ante el intrínseco desenlace de anarquía o tiranía al que conducía la democracia en la Argentina.

Las denuncias de personalismos, fraudes y oligarquías fueron los tópicos prevalecientes en oficialismo y oposición al momento de acusar al adversario, a los que se les sumaron los nuevos peligros avanzando los años (el fascismo, la amenaza comunista, la penetración imperialista) sin disolver de todos modos la insistencia en los primeros. Después de todo, la UCR y la Concordancia, sea por ser los actores electoralmente protagónicos, sea por constituir aquellos espacios políticos con una historia especialmente rica en divisiones internas (o con pasados revolucionarios), o con una estructura de por sí laxa, como ocurría en el oficialismo, insistieron en hacer de una conducción despersonalizada y de definiciones programáticas, capitales propios y carencias ajenas, que los mostraban como emblemas de «civilización política», y a los contrincantes, como resabios de la política criolla. Valga recordar al respecto, como puede leerse en los artículos de este volumen, la persistente identidad que la UCR trazó de sí misma como condensación de la democracia argentina (que la convertía en el antídoto idóneo contra el posible desembarco de los totalitarismos europeos pero asimismo como la única fuerza política con credenciales para confrontar la «restauración conservadora»), o las alusiones al presidente Roberto Ortiz como un nuevo Roque Sáenz Peña, que indican la intención de legitimar su acción de gobierno con referencias propias de la historia nacional, pero que a su vez, por lo demás, también podían operar como una fundamentación retrospectiva de las gestiones anteriores que habían suspendido el camino a la «República Verdadera», entre ellas las de Agustín Justo (por más que Ortiz simultáneamente se presentara como su clausura), en tanto suponía que recién hacia 1938 el país estaba en condiciones de recuperar la senda perdida.

Las rivalidades derivadas de la escena política local parecen haber sido decisivas, finalmente, cuando el escenario internacional, ya a inicios de la década de 1940, daba elementos consistentes para alentar una reconfiguración de alianzas y adversarios, como lo expone el fracaso de las negociaciones entre Alvear y Pinedo. La suerte esquiva que tuvieron las iniciativas de constituir un frente popular desde mediados de la década de 1930 (así como de un frente nacional en el oficialismo), si por un lado indica la adopción de esquemas provistos por la política internacional (que, incluso, amagaron con darle a la política nacional una configuración menos centrífuga), expresa asimismo que los contrapuntos internos, tanto en el oficialismo como en la oposición, ideológicos y de diagnóstico del escenario mundial y del local, pero también más propiamente derivados de la competencia y el recelo que habían entramado su historia mutua (piénsese en las traumáticas relaciones entre la UCR y el PS), supusieron vallas en última instancia infranqueables. El antifascismo, en ese sentido, una consigna por cierto atravesada de matices y cautelas, e incluso movilizada para definir posiciones en las pujas internas a las fuerzas que en distintos momentos la enarbolaron (socialistas,

comunistas, incluso radicales), tuvieron más éxito y anclaje en el campo intelectual que en el propiamente político hasta 1943.

Por último, el arraigo de una visión que hacía de aspectos autóctonos elementos gravitantes para pensar los dilemáticos rumbos de la política argentina, tiene otro indicio ya no en los diagnósticos que se trazaron de ella, sino en la misma manera de concebir el escenario abierto en 1930. La consideración de que las raíces vernáculas jugaban un papel clave alentó que a menudo ese escenario se situara en un período más amplio, que se retrotraía, cuanto menos, a 1928, cuando no a 1912, o incluso a los mismos orígenes de la nación. Para los contemporáneos, 1930 no necesariamente había sido un punto de inflexión, el inicio de una secuencia histórica, o política, nueva o radicalmente separada de sus momentos precedentes.

En consecuencia, ¿era la democracia frente al autoritarismo, en el marco de una crisis mundial del liberalismo, el conflicto axial que recorría a la política argentina a inicios de 1940? O, en cambio, ¿era la persistente dificultad de arraigar la «República Verdadera», cuyo carácter de «destino manifiesto» era posible sostener, a pesar de los resabios criollos y del aciago contexto internacional, por la excepcionalidad de nuestro país – o, en sentido contrario, una meta que, por elusiva, ya no podía considerarse de ese modo y debía abandonarse de una vez y para siempre – ? Posiblemente en la oscilación frente a estos interrogantes se encuentre una clave de fondo para elaborar una interpretación global del período y de la crisis con la que culminó. Y sobre ello, volver a situar los años 1930-1943 ya no sólo en un plano de análisis que contemple los préstamos, influencias o condicionamientos entre el contexto internacional y el nacional. Sino también reposicionar la reflexión sobre el período como aquel en el que probablemente haya que buscar el momento en que confluyeron el eclipse de las coordenadas políticas decimonónicas y la delineación de aquellas que definirían el siglo XX político argentino.

Para avanzar en esa dirección, quizás sea momento de incorporar a la agenda de investigación el estudio de las ideas y de los lenguajes políticos, y a partir de allí elucidar las maneras en que la Argentina política de estos años se pensó a sí misma; contemplando, sí, la «transformación y crisis del liberalismo» (Nállim 2014), pero sobre todo recuperando un señalamiento hecho por la historiografía abocada al siglo XIX (Myers 1995; Botana 1997; Roldán 2010). Aquel que indica que la reflexión acerca del problema de la república y el problema de la democracia, de su eventual síntesis virtuosa o de su posible divergencia, no debió esperar a las «tormentas del mundo» para cobrar espesor, en tanto encuentra antecedentes relevantes, y de prolongada proyección, en los contrapuntos que atravesaron a la tradición liberal y a la tradición republicana desde el momento mismo de pensar la constitución de la Argentina como nación.

Capítulo 1

Una década de transformaciones en el radicalismo

Sebastián R. Giménez

.....

1.1 Disputas partidarias, disputas historiográficas

Resulta difícil sobrestimar las transformaciones que experimentó la Unión Cívica Radical luego de producido el golpe de Estado de septiembre de 1930. El desplazamiento de la UCR del poder implicó que dejara de tener acceso a recursos de patronazgo clave para mantener activa su maquinaria política. Mucho se ha insistido en esta dimensión de la situación partidaria posterior a 1930. E indudablemente, el hecho de que el radicalismo perdiera el control de los recursos materiales de los que desde 1916 se valía para dar sustento a su enorme máquina política constituyó un importante cimbronazo para el partido: con ellos, desaparecía uno de los principales factores de unión de esa gigantesca trama de fracciones que constituían la UCR, dejando planteada la posibilidad –que sin embargo se haría efectiva sólo apenas en parte, como mostraremos enseguida– de una profunda fragmentación del movimiento.

El apartamiento del Estado no fue sin embargo el único cambio que sobrevino en el radicalismo. No debemos olvidar que el golpe de Estado llevado a cabo por José F. Uriburu y el estrecho círculo de militares nacionalistas que le eran afines desplazó de la presidencia a un Hipólito Yrigoyen acusado por amplias franjas de la sociedad de falsear los preceptos constitucionales y de errar en las respuestas para hacer frente a una crisis económica sin precedentes. Estos cuestionamientos a Yrigoyen no provinieron sólo de sus perennes rivales. En el propio oficialismo eran muchos los que compartían ese diagnóstico. Quien había sido el máximo líder radical por más de tres décadas, y quien había llevado a cabo la ciclópea tarea de convertir a una pequeña agrupación porteña y bonaerense en una auténtica organización

de masas de alcance nacional, veía así, en las postrimerías de su segundo mandato, seriamente cuestionado su lugar preponderante al frente del partido.

Sin dudas, es esto lo que explica que, inmediatamente después de septiembre de 1930, hubiese un amplio consenso al interior de la UCR sobre la necesidad de apurar el proceso de recambio de la dirigencia, el cual se llevó a cabo con inusual celeridad, y permitió que en el trascurso del año posterior al golpe de Estado tuviera lugar un significativo proceso de institucionalización partidaria. Bajo la nueva jefatura de Marcelo T. de Alvear, en efecto, los organismos internos de la UCR fueron revitalizados y empezaron a funcionar como el escenario privilegiado de toma de decisiones. La deliberación pública sobre los asuntos atinentes al partido, y la participación en ella de un amplio número de dirigentes, constituyeron toda una novedad para un radicalismo que en las décadas anteriores había delegado en el liderazgo carismático de Yrigoyen la decisión sobre los principales rumbos a seguir.

Los cambios experimentados por el radicalismo no terminaron tampoco allí. Otro importante dato fue que, en la adversidad, la UCR dio muestras de una insospechada capacidad para cerrar con eficacia la brecha abierta en el decenio anterior. La disputa entre personalistas y antipersonalistas, que en lo esencial reflejaba la aquiescencia o el rechazo hacia Yrigoyen, había surgido casi en el mismo momento en que este se hizo cargo de la conducción del movimiento en el entresiglos, y en los años veinte había calado ya tan profundo que cristalizó en una división partidaria. Desde 1924, por lo tanto, existían formalmente, a nivel nacional, dos partidos radicales. La apuesta de profundizar esta división estuvo presente en algunos de los sectores que participaron de la ejecución del golpe de Estado, quienes esperaban que, aislado y deslegitimado, el personalismo dejara de ser un actor relevante del escenario político argentino. Pero, lejos de avanzar en tal dirección, el partido caído en septiembre se dispuso en el llano a dejar atrás la disputa interna, y logró reunir a la mayoría de sus seguidores y dirigentes en una fuerza común. Distintos factores contribuyeron a ello: en primer lugar, el desplazamiento de Yrigoyen y su virtual retiro de la política eclipsaron el motivo que otorgaba razón de ser al conflicto. En segundo lugar, la designación como sucesor al frente del partido de una figura como la de Alvear, quien se había apoyado en el antipersonalismo para llevar a cabo su gestión de gobierno pero que pese a ello nunca se había decidido a romper lanzas contra el personalismo, ofrecía la alternativa de una salida cohesionada al brete en que el gobierno intentaba colocar a la UCR. Y finalmente, también la dictadura hizo su involuntaria contribución a la causa: el revanchismo que guió su accionar la llevó a descargar sobre el radicalismo una feroz represión que no siempre distinguió a una fracción partidaria de la otra. En conjunto, estos factores contrarrestaron el potencial efecto centrífugo que implicaba la pérdida de recursos del Estado para la

unidad de la fuerza política fundada por Alem. La gravitante presencia de esta constituyó por lo tanto una persistente realidad con la cual los gobiernos posrevolucionarios debieron lidiar.

Desde luego que esto no significó el fin de las disensiones en la UCR: el antipersonalismo, aunque raleado en sus filas, siguió existiendo en los años treinta, y constituyó de hecho un importantísimo actor en la coalición de fuerzas que sostuvo a Agustín Justo en la presidencia (Piñeiro 2014; López en este volumen). Al interior del radicalismo conducido por Alvear, por su parte, además de los viejos resquemores entre partidarios y opositores a Yrigoyen, surgieron nuevas discusiones acerca de la estrategia adecuada para hacer frente a la alianza conservadora-antipersonalista en el gobierno: las alternativas de la concurrencia, la abstención y la revolución fueron planteadas por diferentes sectores partidarios. Pero estas alternativas no cristalizaron en posiciones claramente irreductibles. El grueso de la dirigencia radical se involucró en el proceso de reorganización impulsado por Alvear, y acató mayoritariamente – al menos en un primer momento – el abstencionismo en que este decidió recluir al partido. La alternativa armada, a su turno, fue principalmente motorizada por oficiales del ejército opositores a la conducción de Justo en las fuerzas armadas (Giménez 2014, págs. 91-160, 2015). Fueron ellos los que llevaron a cabo los distintos hechos de armas que se sucedieron en el primer lustro de la década del treinta. Dichas revueltas se planificaron a espaldas de la organización partidaria formal de la UCR, y sin el consentimiento de sus máximas autoridades, las cuales, además de descreer profundamente de las chances de éxito de esas intentonas, no vieron con buenos ojos la asociación entre radicalismo y violencia que estas podían conllevar de cara a la opinión pública. El hecho de que la mera abstención no alcanzase para desafiar al nuevo régimen, sin embargo, hizo que los contactos entre la dirigencia intermedia radical y los grupos armados no fueran infrecuentes.

Pero sería un error considerar que los dirigentes radicales que establecieron esos vínculos apostaron todas sus cartas al proyecto revolucionario. Parece en cambio más acertado suponer que, en un contexto político complejo y opaco como lo era el de principios de los años treinta, en el que no podía discernirse cuándo la UCR reingresaría en el terreno de las urnas, resultaba válida la opción de amenazar con acudir a la fuerza para revertir la situación de marginación en que había quedado relegado el radicalismo, pero resguardando al mismo tiempo la estructura política que había permitido al partido mantener sus vínculos con las masas. No hay que olvidar, en efecto, que esos dirigentes se habían erigido en tales en el marco del funcionamiento pleno de los mecanismos electorales, a los cuales permanecían unidos por miles de visibles e invisibles hilos. Descartar esa estructura para jugarse de lleno en una riesgosa e improbable tentativa armada aparejaba costos demasiado elevados que muy pocos

estaban dispuestos a correr. Adicionalmente, existían serias dudas respecto a los fines últimos que perseguían los uniformados: ¿hasta qué punto se podía confiar en que, si llegaba a alcanzarse el lejano objetivo de desplazar a las autoridades que asumieron el poder después de septiembre de 1930, aquéllos se avendrían a convocar a unas elecciones en las que de antemano sabían que no jugarían ningún rol relevante?

Todo ello explica la actitud reticente y ambigua de los dirigentes partidarios hacia la alternativa armada, que tantos malestares y resquemores despertara entre los referentes militares rebeldes. Y explica también que las máximas autoridades radicales nunca fueran seriamente jaqueadas por quienes blandieron la opción revolucionaria. Serían, por el contrario, los sectores concurrencistas los que representaron el desafío más serio para aquéllas. Pero cuando la alternativa favorable al regreso al sufragio cobró fuerza en la UCR –lo cual tuvo lugar hacia mediados de 1934, con el vuelco hacia el comicio de fracciones crecientes del partido– era ya muy generalizada en este la idea de que la abstención había llegado a su límite, en tanto el principal objetivo que con ella se había perseguido –socavar la legitimidad del nuevo régimen– lejos estaba de haberse podido lograr. En consecuencia, el retorno a la competencia electoral fue una decisión que, aunque más no fuera porque ninguna perspectiva mejor surgía con claridad, contó en su momento con un amplio grado de consenso al interior del radicalismo.

En definitiva, entonces, si bien la vida interna de la UCR en el lustro posterior al golpe de Estado estuvo atravesada por múltiples tensiones y debates, los posicionamientos que en las diferentes coyunturas tomaron sus máximas autoridades y organismos de conducción reflejaron el parecer mayoritario en sus filas. Sería recién avanzada la década del treinta cuando los descontentos proliferaron y se expresaron bajo la tónica de una denuncia global a una dirigencia corrompida y caduca. Las acusaciones cruzadas, el faccionalismo extremo y la pérdida de legitimidad entre sus adherentes y la ciudadanía en general, fueron, en efecto, las notas salientes del partido en el período del «fraude tardío». Retrospectivamente, la responsabilidad por ese estado de situación se descargaría en los errores políticos y morales de una dirigencia declinante.

Sin embargo, el malestar creciente que atravesó al radicalismo en los últimos años de la *República Imposible* (Halperin Donghi 2004) tenía que ver sobre todo con dos cuestiones para las que muy probablemente ninguno de los actores que formaban parte del espectro de fuerzas del partido podía ofrecer respuestas satisfactorias. La primera de esas cuestiones, y sin dudas la más acuciante de ellas, estaba relacionada con la impotencia que suscitaba en la UCR el hecho de no contar con estrategias eficaces para contrarrestar la posición marginal en que los gobiernos de la Concordancia lograron relegar al radicalismo. El ascendiente mayoritario sobre el electorado que este supo

conservar era un dato que nadie cuestionaba. Conformar una mayoría constituye una ventaja para cualquier fuerza política que participe de elecciones y aspire a ganar en ellas. Pero un respaldo cuantitativo favorable se convierte en un grave problema cuando no puede traducirse en posiciones institucionales acordes a él, o en fuerza política efectiva. Y es precisamente esto lo que le sucedió al radicalismo durante este período: la capacidad para suscitar el más amplio apoyo electoral entre los partidos políticos que competían por el favor ciudadano no se condijo con una paralela influencia determinante en el escenario político de nuestro país. Los gobiernos de la Concordancia, en efecto, supieron neutralizar – a través sobre todo de la aplicación sistemática del fraude – el potencial electoral de la UCR (cfr. López en este volumen). Y la pregunta sobre cómo salir de la posición subordinada a la que el orden posrevolucionario arrojaba al radicalismo nunca pudo ser respondida satisfactoriamente por este. Lo cual no se debió quizá tanto, como demasiado a menudo se aduce, a una incapacidad o impericia de sus cuadros dirigentes, sino a factores de orden estructural muy difíciles de contrarrestar: la Concordancia tenía una firme apoyatura en el ejército, y no era sencillo enfrentarla a través de la fuerza. Por otra parte, la índole del vínculo que el radicalismo había entablado con la ciudadanía encontraba en el terreno electoral su casi exclusiva razón de ser; este específico modo de relacionarse con sus huestes y simpatizantes habilitaba al partido a obtener resonantes triunfos electorales cuando el camino del comicio estaba despejado, pero no le permitía explorar prácticas alternativas de resistencia cuando tenía enfrente suyo a un régimen sustentado primordialmente en el uso de la fuerza (así al menos lo dejó ver el fracaso de la táctica abstencionista y el escaso eco suscitado por la vía revolucionaria). Existía, por último, un dilema previo de muy difícil resolución: si la reivindicación central del radicalismo era la plena vigencia de la soberanía popular, la democracia, la legalidad y las libertades, ¿no resultaba contradictorio luchar por ellas a través de metodologías que constituían una flagrante violación a esos principios? La Concordancia, en definitiva, colocó al radicalismo ante complejas disyuntivas, y lo hizo además enfrentarse a límites constitutivos que hacían a su misma conformación de partido electoral.

La segunda cuestión que suscitaba malestar al interior del partido derivaba de que, aunque se sabía que la sociedad argentina estaba experimentando un profundo cambio en su composición debido a la nueva importancia adquirida por las actividades manufactureras e industriales, se sospechaba que la capacidad del radicalismo para adaptar su estructura a esta nueva realidad era escasa. Entiéndase bien: no decimos que desde la UCR no se prestó atención a la cuestión económica y social. Fueron muchos, en efecto – como mostraremos luego – los dirigentes radicales que tempranamente percibieron las transformaciones que en el país se estaban produciendo al calor del proceso de industrialización. Y fueron también muchos quienes

otorgaron en su discurso una gran importancia a la cuestión social que de este surgía. Incluso hubo quienes abogaron por otorgar prioridad a las demandas de justicia social por sobre las reivindicaciones cívicas y políticas. En estos casos, se apelaba a la clase obrera como un actor de indudable relevancia, y se cuestionaba el «electoralismo» vigente en la UCR, el cual reducía las prácticas partidarias al intercambio de favores en los comités para incrementar el número de votos de tal o cual fracción interna. Pero mientras que es muy dudosa la capacidad que estos dirigentes tuvieron para promover nuevas formas de articulación con los sectores trabajadores a los cuales apelaban, resulta notorio que ellos fueron eficaces en la generalización de una crítica al modo de funcionamiento vigente en el partido. Lo cual contribuyó a profundizar aún más la creencia de que el radicalismo tenía serias dificultades para dar respuesta a las demandas surgidas de una sociedad en transformación, multiplicando por lo tanto el malestar que de allí emanaba.

Estas dos cuestiones harían eclosión con el surgimiento del peronismo después de 1943. La vertiginosa popularidad que logró suscitar el entonces coronel Perón con un discurso que situaba al radicalismo en continuidad con las fuerzas políticas responsables tanto de falsear el ordenamiento institucional como de permanecer indiferentes a la cuestión obrera, hizo que los malestares internos salieran a flor de piel, y cristalizaran, luego de la derrota electoral de febrero de 1946, en una crítica sin matices a la actuación del partido en los años treinta. A partir de allí cobró creciente presencia en la UCR un relato retrospectivo que sólo reivindicó el accionar de unas agrupaciones disidentes minoritarias para mostrarlas como la excepción a una regla que, impuesta por las máximas autoridades radicales y acatada por la mayoría de sus dirigentes intermedios, habría estado marcada por la impronta de la defección, el acomodamiento y la traición. Fueron, en rigor, los mismos militantes de esas disidencias – o explícitos simpatizantes de ellas – quienes erigieron esa visión (cfr. Del Mazo 1959; Luna 1958, 1978; Jauretche 1962; Scenna 1982). Pero el hecho de que sea sencillo percibir a esta narrativa como el producto consecuente de un posicionamiento político no impidió que ella calara muy hondo entre sectores propios y ajenos a la UCR. La razón que explica este éxito reside en que logró trasladar a la historia radical el modelo de las «dos Argentinas» que, puesto en boga por el nacionalismo, se constituyó luego en una suerte de sentido común. Siguiendo dicho modelo, la historiografía partidaria identificó entonces dos tendencias al interior del movimiento radical: una antinacional, pro imperialista, conservadora, antipopular y reacia a democratizar las prácticas internas del partido, representada en los años treinta por Alvear; y otra popular, luchadora, programática y democrática, que tuvo por líder a Yrigoyen, y que, luego de su muerte, continuó vigente en los movimientos «revolucionarios» e «intransigentes» opositores a la conducción de su sucesor.

Aunque es evidente el carácter simplista y maniqueo de este relato histórico, han sido pocos los trabajos que escaparon a él. E incluso algunos estudios producidos desde la academia lo reprodujeron (Bianchi 1968; Calviño 1968; Brauner Rodgers 1990).

Solo recientemente se ha empezado a construir otra perspectiva, más compleja y dinámica, sobre el devenir del radicalismo en los años posteriores al golpe de Estado setembrino. A ello contribuyeron tanto los trabajos que se propusieron echar nueva luz sobre el período en su conjunto (Halperin Donghi 2004; Macor 2001), como aquellos que analizaron específicamente al radicalismo (Persello 2004; Macor y Piazzesi 2005; Tcach 2007; Giménez 2014). Un importantísimo aporte también fue realizado por quienes reconstruyeron la trayectoria de algunas figuras clave de la UCR. Sobresalen, en este sentido, las biografías sobre Marcelo T. de Alvear. Ya en la década del cincuenta, Luna (1958) había elegido centrarse en el sucesor de Yrigoyen para trazar una significativa historia del partido en los años treinta. Tiempo después, Cattaruzza (1997) y Losada (2016a) volvieron a tomar a Alvear como objeto de estudio, y derribaron muchos supuestos sobre la UCR bajo su conducción. El cuadro que se desprende del conjunto de estos trabajos es el de un partido atravesado por múltiples fracciones y tendencias, e imposible por lo tanto de reducir a una división dicotómica. Además, ellos permiten reconstruir el devenir del partido en el contexto específico de la década del treinta: si la historiografía partidaria se había elaborado a partir del malestar generado a fines del período, y procurando, en última instancia, dar cuenta de las razones de una derrota, la nueva historiografía académica situó la trayectoria del radicalismo y de sus dirigentes en el marco político e intelectual en que estos mismos desarrollaron sus acciones. Ello permitió no sólo contextualizar más apropiadamente los procesos que tuvieron lugar al interior del partido, sino que también posibilitó identificar nuevas problemáticas sobre las que anteriormente no se había llamado la atención. En estos aspectos nos concentraremos en las páginas que siguen.

1.2 Una crisis y una oportunidad

Los lineamientos generales sobre los cuales discurrió el radicalismo en el período aquí analizado estuvieron marcados principalmente por el proceso de institucionalización partidaria impulsado por la conducción de Marcelo Alvear. Hay que apuntar un dato que muy a menudo se olvida: los meses posteriores a septiembre de 1930 estuvieron atravesados por un gran optimismo por parte de los simpatizantes y dirigentes radicales. Esto no implica negar que la represión golpeara fuerte a un número significativo de correligionarios. Pero la condición de partido caído y perseguido reavivó un espíritu de camaradería y sacrificio que muchos creían adormecido luego de más de una década de ejercicio del gobierno. El desplazamiento de Yrigoyen,

además, alentó a muchos dirigentes radicales a proponer reformas que, si desde hacía tiempo se creían necesarias, recién ahora, desvanecido el liderazgo del viejo caudillo, podían encontrar cauce. Los sucesivos traspiés del gobierno de facto, y el triunfo en las elecciones del 5 de abril en la provincia de Buenos Aires, no harían sino redoblar las expectativas iniciales. Fue en este contexto que se reforzó la idea de que el desplazamiento del Estado significaba tanto una crisis como una oportunidad para el radicalismo. En este sentido, el nuevo líder de la UCR, Marcelo Alvear, podía afirmar en una carta dirigida a Hortensio Quijano:

> «Estoy convencido que es un momento muy propicio, después de la dura lección recibida, para hacer una reorganización amplia del partido radical, sobre bases nuevas y otros procedimientos; es decir, tener el partido que siempre hemos ambicionado y que no fue posible realizar, primero porque su acción exclusivamente revolucionaria no se lo permitió, y después en la época electoral por incomprensión de Yrigoyen, que sólo quiso y se preocupó de su predominio personal».[1]

¿Cuáles fueron las características de este proceso de reorganización impulsado por la nueva dirigencia radical? La cita deja ver que se buscaba construir un partido distinto al prefigurado por Yrigoyen, en el que no tuvieran gravitación los liderazgos personalistas, y en el que se diluyeran las continuidades con su pasado revolucionario. El radicalismo, en definitiva, debía alejarse de su vocación guerrera y de su tendencia a ver enemigos en los adversarios, para pasar a ser, por fin, un partido de orden común. Se entiende así que la elaboración de un programa y la modificación de la carta orgánica fueran prioridades para esa gestión. Asimismo, se consideró de suma importancia reconstituir los organismos internos del partido. Fue en estos, de hecho, donde se discutieron y aprobaron las reformas programáticas y organizativas mencionadas. Así, en la convención de septiembre de 1931, se modificó por primera vez la carta orgánica, se decidió reemplazar los retratos de Alvear e Yrigoyen que encabezaban los documentos partidarios por un escudo (lo cual pretendió ser un símbolo de «despersonalización»), y se sancionó una plataforma electoral, con la clara intención de dar muestras de que un programa público y razonado, y no el arbitrio de un caudillo, sería la base de las decisiones que, en caso de acceder al gobierno, tomarían los representantes del radicalismo (cfr. Persello 2004, págs. 148-159; Giménez 2016; Losada 2016a).

En definitiva, entonces, el proyecto partidario que impulsó la nueva conducción, y que fue compartido por un amplio número de dirigentes, consistía en transformar a la UCR en un partido moderno, identificado con

1.– Carta de Alvear a Quijano, París, 12/01/1931; reproducida en Botana, Gallo y Fernández 1997, págs. 64-66.

la causa del progreso político y social. Sería bajo el signo de este radicalismo moldeado sobre la base de los más avanzados principios de organización política que se consumaría la plena instauración de la democracia en Argentina.

El gran optimismo de la nueva conducción partidaria –reflejado en esta apuesta de máxima sobre el devenir de la UCR– es revelador de hasta qué punto los protagonistas de la política local no podían entonces siquiera imaginar que lo que allí se estaba gestando era la crisis de los valores democráticos y liberales hasta ayer hegemónicos. Paralelamente, la visión de que la interrupción institucional no podía sino arrojar beneficios tanto para el radicalismo como para la formación política argentina en su conjunto, muestra lo hondo que había calado en las elites dirigentes de nuestro país el imaginario de un progreso histórico indefinido. Es sobre el trasfondo de este imaginario que debe entenderse tanto el duro diagnóstico realizado por las nuevas autoridades radicales sobre el pasado de la UCR, como el ambicioso proyecto de reconversión partidaria que en esa coyuntura buscaron impulsar. Se creía que la nueva etapa conllevaría un perfeccionamiento de las instituciones republicanas. El radicalismo debía apuntalar ese proceso, modificando su perfil de modo tal de poder servir de eficaz soporte a un régimen cabalmente liberal-democrático.

¿Este optimismo fue exclusivo de la dirigencia partidaria? Es decir: la apuesta de introducir modificaciones profundas en la conformación organizativa y programática del radicalismo, ¿se agotaba en las nuevas autoridades, u otros actores se vieron representados por ese espíritu de cambio? Este es un elemento que consideramos significativo, puesto que contribuye a mostrar cuán difícil resulta sostener la idea de un radicalismo «alvearista» opuesto a otro esencialmente «yrigoyenista». La evidencia disponible, en efecto, muestra que muchos de los sectores que luego se referenciarían en la intransigencia y que harían de la crítica al alvearismo su principal bandera, tenían, en la coyuntura posterior al golpe de Estado, una visión de la situación similar a la de la jefatura partidaria. Manuel Ortiz Pereyra, por caso, uno de quienes luego fundarían FORJA, no sólo lanzaba en octubre de 1930 severísimas críticas a Yrigoyen, sino que llegaba incluso a concebir a la revolución de septiembre como una bendición, pues habría librado a los radicales de la influencia perniciosa del viejo caudillo. Así, en el editorial del primer número de su periódico –al que decidió llamar, de modo sugerente, *Renovación*– llamaba a reconocer «que la Revolución, lejos de perjudicarnos, ha venido a purificar nuestro partido [pues] ha destruido la autoridad omnímoda de Yrigoyen y la prepotencia de sus turiferarios».[2] Y si bien es cierto que más tarde Ortiz Pereyra criticaría algunas posiciones de Alvear que entendió como un acercamiento al oficialismo, también lo es que desde

2.– *Renovación*, 15/10/1930.

la muy combativa agrupación que fundó con Julio Barcos (y que se llamó «Concentración de izquierdistas de la Unión Cívica Radical») concibió a la reorganización promovida por el nuevo jefe de la UCR como una gran oportunidad. Por fin había llegado, decía, la hora en que «todos los hombres libres que tiene el país irán a los comités radicales a inscribir sus nombres para una cruzada como nunca, libertadora».[3] Acorde con esta postura, la agrupación decidió aprovechar los espacios que la reorganización brindaba para disputar la conducción del radicalismo en el distrito metropolitano. El activo involucramiento en la interna partidaria no constituyó sin embargo un obstáculo para que algunos de sus miembros sostuvieran una prédica revolucionaria, y participaran, de hecho, en los levantamientos armados que tuvieron lugar en la primera mitad de los años treinta. Todo lo cual nos habla de la fluidez entre los distintos espacios existentes al interior del radicalismo, que una historiografía tendenciosa quiso presentar como compartimientos estancos separados por una nítida línea ideológica.

Los casos de Julio Barcos y Manuel Ortiz Pereyra no constituyen en absoluto una excepción. Resulta llamativo comprobar, en efecto, hasta qué punto, luego de producido el derrocamiento de Yrigoyen, tuvieron lugar en el radicalismo experiencias que, aunque se presentaron como fuertemente «renovadoras», guardaron estrechas afinidades con el proceso de institucionalización entonces en marcha (cfr. Giménez 2013b). Agrupaciones como la «Juventud Radical de Izquierda» o el «Centro Acción La Plata» – en las que participaron algunos que luego serían miembros de primera línea del movimiento intransigente, como Arturo Frondizi y Ataúlfo Pérez Aznar – compartían, en efecto, el diagnóstico de un yrigoyenismo que debía dejarse atrás. Había llegado a su fin – esgrimían esas agrupaciones – la etapa en que la UCR otorgó prioridad a la lucha cívica. Ahora la tarea a realizar consistía en extender la democratización ya alcanzada en el terreno político al ámbito social y económico. Este giro en los objetivos debía a su vez acompañarse de una reformulación discursiva: se postulaba entonces la necesidad de delinear con claridad un programa que, si bien apelaba al conjunto de la ciudadanía, tenía a los sectores trabajadores como interlocutor privilegiado.

Estas diferentes experiencias ponen en evidencia que la coyuntura posterior al golpe de Estado fue vista por muchos correligionarios como una ocasión favorable para arriesgar propuestas que, mientras el partido estuvo en el gobierno y contó con un sólido liderazgo, difícilmente hubiesen podido ser siquiera concebidas. Por otra parte, ellas muestran que aunque pudieran existir matices con la jefatura de Alvear, gran parte de la dirigencia radical – dentro de la cual se encontraron quienes luego serían muy críticos con el sucesor de Yrigoyen – veía en el proceso de reorganización por él impulsado una oportunidad para involucrarse de un modo nuevo en la disputa

3.– *Bandera Radical*, 02/08/1932.

partidaria. Por último, esos ejemplos permiten ver cuán generalizada estaba en la UCR la idea de que un porvenir mejor aguardaba al partido. Incluso la convicción de que debía otorgarse mayor relevancia a la cuestión económica y social se hacía sobre la base de creer que los avances alcanzados en las esferas cívica y política estaban garantizados. Esta certidumbre habilitaba la posibilidad de pensar en innovaciones organizativas, programáticas e incluso ideológicas de vasto alcance en la UCR. Por un tiempo, por lo tanto, la «crisis» de 1930 pudo aparecer, para amplios sectores radicales, bajo el manto de la oportunidad.

1.3 La integración en la república del fraude

Paulatinamente, sin embargo, ese optimismo se iría desdibujando. Contribuyó a ello tanto el devenir de la política local –la cual, lejos de retornar pronto a la normalidad, profundizó a tal punto las irregularidades que estas terminaron por afectar al conjunto de los actores que en ella participaban– como los preocupantes fenómenos que tenían lugar en el viejo mundo, donde las experiencias plebiscitarias antiliberales se propagaron con velocidad. Estas experiencias y aquel devenir erosionaron la fortaleza del imaginario del progreso indefinido. La convicción de que la interrupción institucional fue un paréntesis entre dos etapas ascendentes no tardó en ponerse en duda, y ello repercutió fuertemente en la idea que los radicales se hacían del papel que su partido debía desempeñar en el escenario político local.

En el caso de las máximas autoridades de la UCR, el énfasis se desplazó desde el inicial entusiasmo por un perfeccionamiento continuo del partido, hacia una reivindicación de este como la garantía última de que los extremismos ideológicos no penetraran en el país. Poco se ha llamado la atención sobre la gravitación que el resquebrajamiento del consenso liberal en el mundo occidental tuvo sobre el curso de acción que a partir de mediados de la década del treinta tomó la dirigencia radical. Sin ir más lejos, la decisión de retornar al comicio y de seguir participando en él pese al ineludible fraude que habría de sufrir, debió mucho a la convicción de que, dada la crítica coyuntura por la que atravesaban la Argentina y el mundo, la nueva misión del radicalismo consistía primordialmente en contribuir a frenar el avance de los movimientos «extremistas». Desde luego que cuestiones internas de la UCR, como asegurar la unidad partidaria y poner a salvo los avances registrados en el proceso de reorganización, también incidieron en esa decisión. Pero el escenario internacional jugó asimismo un rol de primer orden de importancia. A fines de la década del treinta, Alvear, al recordar los móviles que lo condujeron a retornar al comicio, mencionó a «los acontecimientos europeos» como los desencadenantes de su resolución.[4] Que

4.– Véase el *Borrador*, n.º 3. «Banquete en Gualeguaychú, Discurso del Dr. Alvear», 10/03/1939; reproducido en Fernández (2012, págs. 168-170).

esta no constituye una mera reconstrucción idealista realizada a posteriori lo prueba el hecho de que ya en abril de 1933, unos meses después de que Hitler asumiera el control del gobierno alemán, Alvear plantearía nuevas metas para el radicalismo, acordes a la realidad del contexto internacional:

> «Si sabemos comprender los complejos problemas de la hora presente (...) nuestro partido será la gran fuerza cívica que no sólo gravitará eficazmente en el progreso político e institucional de la República, sino que también, y esta será su más importante misión, impedirá los ensayos extremistas tanto de la extrema izquierda como de la derecha fascista que llevarían al país seguramente a un período fatal en que estaría dando tumbos entre la anarquía y la dictadura».[5]

La concepción que el jefe de la UCR articuló sobre el radicalismo resultaría desde entonces inescindible de la guerra política e ideológica que conmovía al viejo continente y que amenazaba con extenderse al resto de las regiones del globo. La UCR sería vista a partir de allí como el único partido capaz de erigir una barrera al avance de las ideologías totalitarias: su prédica, que llamaba a respetar la Constitución y a exigir el cabal imperio de las normas liberales y democráticas, y su misma conformación interna, en la cual hallaban cabida en perfecta armonía todos los sectores sociales que componían la sociedad argentina, aseguraban el alistamiento del grueso de la ciudadanía en una organización ajena a cualquier influencia «exótica», conjurando así la amenaza de una eventual lucha de clases o guerra ideológica al interior de las fronteras de la patria.[6] Lejos, por lo tanto, de constituir un peligro para la institucionalidad política, como sus adversarios no se cansaban de repetir, el radicalismo era aquella fuerza política que mejor podía conservar y afianzar el ordenamiento político.

La definición de la UCR como un partido del orden cuya misión consistía en resguardar la paz y la legalidad en el país contribuye a explicar por qué no se intentó llevar la lucha y la confrontación contra los gobiernos conservadores por fuera de los marcos de la institucionalidad vigente desde 1932. Y también brinda elementos para entender la renuencia de sus autoridades a entablar vínculos con otras fuerzas partidarias para ofrecer una resistencia conjunta a la Concordancia en el gobierno: constituía un peligro, en efecto, vincular la UCR a fuerzas que explícitamente se identificaban con alguna de las ideologías partícipes de la guerra que desgarraba al viejo mundo.[7] Lo

5.– Carta de Alvear a José Bianco, Martín García, 25/04/1933; reproducida en Botana, Gallo y Fernández (1997, págs. 271-276).

6.– Esta concepción resultaba en parte contradictoria con el liberalismo reivindicado por Alvear. Sobre dichas tensiones, y más en general sobre la relación de Alvear con los lenguajes políticos de la época, véase Losada (2016b).

7.– Específicamente, el comunismo despertó serias reticencias en el oficialismo partidario. Al respecto: Giménez (2012).

que primó, en consecuencia, fue el convencimiento de que el radicalismo expresaba, por su esencial compenetración con la nación, a la democracia en toda su potencialidad. La lucha por el cabal restablecimiento de esta debía llevarse a cabo sin tensar la cuerda de la legalidad, y sin entrar tampoco en tratativas con el resto de los partidos políticos opositores al fraude. La única alternativa, al fin y al cabo, consistía en persistir en el «camino pacífico del comicio», apostando a que el oficialismo se dispusiera en algún momento a poner fin al fraude electoral.

¿No implicaba esta postura una resignación, un conformismo y una renuncia para el partido que concitaba la mayor adhesión popular en el país? Así lo entendieron crecientes sectores internos que empezarían a erigir una prédica opositora hacia la conducción partidaria. Antes de dar cuenta de ellos, sin embargo, interesa señalar que el cuadro de situación vigente en el país en el período de plena vigencia de la república del fraude era por demás heterogéneo: mientras que en algunas provincias se votaba regularmente, en otras el fraude era la norma, y en otras, finalmente, se sucedían las elecciones normales y las fraguadas. En los distritos en los que tendió a imperar la legalidad, el radicalismo acompañó la decisión de seguir participando en los comicios. Esos distritos fueron, de hecho, los principales impulsores de la alternativa concurrencista, la cual, de no ser adoptada por la dirigencia nacional, seguramente hubiese redundado en un desconocimiento de las órdenes impartidas por esta, provocando así la fractura partidaria. En aquellos distritos en que la UCR pudo competir libremente, entonces, los dirigentes radicales que tenían en su control la máquina partidaria tendieron a avalar la política de Alvear.

Uno de los casos que se apartó de esta norma fue el del sabattinismo (cfr. Tcach 1999, 2007). En Córdoba, los conservadores mantuvieron un firme apego al ideario democrático liberal, negándose a implementar el fraude (Halperin Donghi 2004, págs. 174-178). Esto permitió a la UCR local acceder a la gobernación. Aunque, como sucedió en otros distritos, fue un gesto del conservadorismo el que estuvo en la base del triunfo radical, Amadeo Sabattini no siguió el camino de aquellos líderes de su mismo signo partidario que respaldaron a Alvear en la disputa interna de la UCR. Por el contrario, pronto se convirtió en uno de sus más firmes opositores. Aunque justificaba la alternativa comicial, Sabattini afirmaba que ella no era incompatible con la lucha por el cabal restablecimiento del imperio de la voluntad popular. La fórmula del «sufragio revolucionario» por él pregonada resumía esta vocación: había que seguir compitiendo en elecciones, pero, si existía fraude, el radicalismo debía acudir a todos los medios (incluso, las armas) para «abrir el comicio». El mismo radicalismo cordobés era citado como ejemplo: aunque no recurrió a la violencia, se esgrimía que, de haber resultado necesario, hubiese tomado ese camino. De este modo, se pudo cubrir de un halo contestatario a la misma práctica que en otros casos

aparecía como una legitimación del régimen fraudulento. Sin dudas, la popularidad del sabattinismo derivó, en enorme medida, de su capacidad para presentar lo que era una concesión como una conquista. Logró a partir de ello combinar dos factores clave: el control de enormes recursos de poder –posibilitado por la administración de una de las provincias más importantes del país– y el predicamento beligerante tanto hacia las autoridades del gobierno como hacia las de la UCR. A través de ambos, buscó promover una corriente interna que aglutinara a todos aquellos sectores disconformes con el rumbo tomado por los máximos organismos de conducción radicales.

Pero, aunque Sabattini constituyó una referencia importante para esos sectores, la imagen de un disciplinado encolumnamiento «intransigente» detrás de su figura no resulta apropiada para describir la compleja realidad de la disidencia partidaria. Sin dudas, el hecho de que en la base de su popularidad se encontrara una capacidad para disimular una debilidad de origen, y no el esbozo de una estrategia eficaz para sacar al radicalismo de la posición subordinada en que el orden vigente desde 1932 había logrado relegarlo, explica los límites que aquél tuvo para consolidarse como alternativa a la conducción nacional de la UCR: aunque podía funcionar como referencia movilizadora, en efecto, el sabattinismo no brindaba, ni podía hacerlo, ninguna guía práctica sobre cómo proceder en los casos en que el comicio seguía cerrado. Es por ello que los grupos disidentes radicales, aunque en general expresaron su reconocimiento hacia el líder cordobés, exploraron otros modos de incidir en la política nacional y partidaria.

Tres de esas modalidades se destacaron especialmente: en primer lugar, se encontró la opción de los frentes populares, la cual tuvo un fuerte auge en el período inmediatamente posterior al levantamiento de la abstención, y luego sería esporádicamente recuperada en diferentes coyunturas. Habíamos mencionado que el oficialismo radical tendió a permanecer renuente (al menos hasta principios de los años cuarenta) a la posibilidad de unir el radicalismo al resto de los partidos opositores a la Concordancia. Aunque no descartó de plano las conversaciones con otras fuerzas, la UCR, creían sus autoridades, debía aguardar a que la alianza gobernante abriera el sufragio, lo cual tendría lugar tanto más rápidamente cuanto más temprano se evidenciara que el partido mayoritario no representaba una amenaza para la institucionalidad. Mezclándose con fuerzas de izquierda, por lo tanto, no contribuiría a la solución del problema. Después de conocidos los primeros ensayos de fraude masivo, sin embargo, muchos correligionarios empezaron a dudar si era correcta esa estrategia. Encontraron entonces en la convocatoria realizada por los partidos que ahora se presentaban prioritariamente como «democráticos» un modo de dirigir su protesta tanto hacia las autoridades gubernamentales como (más o menos explícitamente, según los casos) hacia las de la propia UCR. La consigna del frente popular

mostraba una gran capacidad de movilización que se podía contrastar con la parálisis predominante en el partido. Paralelamente, el contacto con las fuerzas de izquierda permitía introducir en el radicalismo el sesgo progresivo y contestatario que muchos actores de la disidencia pensaban que debía tener la UCR (Giménez 2012). Las expectativas que despertó la alternativa del frente popular fueron, por esos motivos, muy encendidas en algunos de los núcleos que empezaban a recorrer el camino de la oposición. Sin embargo, ella encontraba un infranqueable límite cuando, ante cada nueva convocatoria electoral, los partidos decidían ir separados a la elección, restableciendo con ello la lógica de la competencia.

Las otras dos modalidades que los disidentes exploraron estuvieron por lo tanto centradas en el accionar al interior de la propia UCR. Una de ellas consistió en organizar a los jóvenes radicales en un organismo autónomo del Comité Nacional. El puntapié de esta alternativa se dio en mayo de 1938, cuando en Córdoba tuvo lugar el «Primer Congreso Nacional de la Juventud Radical». Moisés Lebensohn fue el referente principal de esta corriente, que se caracterizó por la profundísima crítica que realizó a las prácticas vigentes en el radicalismo. La importante recepción que encontró este discurso, visible en el crecimiento constante de la organización, da cuenta de los enormes malestares acumulados en la UCR hacia el fin del período. La última de las modalidades mediante las cuales se manifestó la oposición interna fue más convencional: consistió en formar agrupamientos en los diferentes distritos para presentarse a elecciones, mientras, paralelamente, se demandaba a las autoridades la «democratización» del partido.

Los disidentes que exploraron estas diferentes variantes cuestionaron el modo en que funcionaba la «máquina» de la UCR. Pero no creyeron que esta era en sí misma repudiable. Juzgaban que de su letargo podía sacarla una nueva promoción de dirigentes que asumiera «consignas» acordes a la hora, entre las cuales figuraban invariablemente el antiimperialismo, la justicia social y la democracia económica.

Estas mismas consignas fueron reivindicadas por los grupos que, a diferencia de la disidencia interna, decidieron romper con la estructura partidaria de la UCR. Entre estos, el caso más conocido es el de FORJA. La diferencia que separó a esta agrupación de la intransigencia estuvo dada principalmente por el hecho de que ella sí levantó una oposición de principio a la «máquina». La formación de FORJA estuvo motivada por la decisión de protestar contra el levantamiento de la abstención, medida que fue vista como la imposición del radicalismo «electoralista», el cual se caracterizaba por su estrecha dependencia de los puestos del Estado. La prédica «revolucionaria» que asumió la agrupación tuvo precisamente como finalidad reforzar la diferencia que mantenía con el «electoralismo». Los aspectos de la UCR que hacían a su conformación partidaria y electoral fueron así cuestionados, y ello condujo a algunos de sus miembros a levantar

una oposición de principio contra los partidos políticos y su modalidad de intervención pública (cfr. Giménez 2013a; Scenna 1982).

En el contexto mundial de la segunda mitad de la década del treinta, los posicionamientos de FORJA podían interpretarse como un implícito aval a las experiencias que en el viejo mundo ponían en jaque a las democracias liberales. La agrupación, sin embargo, negó respaldar a esos movimientos, aduciendo que su carácter «nacional» la ponía a salvo de cualquier complicidad con los bandos en que se debatía la conflagración mundial. La extrema polarización política e ideológica que pronto se trasladó al escenario local, empero, hizo que no fueran muchos los radicales dispuestos a prestar su adhesión a una agrupación que no tomaba postura ante uno de los acontecimientos principales de la hora. FORJA, además, con su orgullosa postura «revolucionaria», tampoco parecía ofrecer ninguna alternativa eficaz a la encerrona en que se encontraba la UCR: tan sólo prolongaba el abstencionismo que tan pocos resultados había arrojado en el pasado. Fue por esos motivos que el grueso de la disidencia radical no se canalizó a través de agrupaciones como FORJA, sino que se dirigió mayormente hacia la disidencia interna, cuyo vertiginoso crecimiento desde principios de los cuarenta puede tomarse como una prueba de los malestares acumulados en el radicalismo.

1.4 Conclusiones

Los tres lustros siguientes al golpe de Estado de septiembre de 1930 fueron cruciales para la UCR. Enormes desafíos se plantearon al partido en esta etapa. Algunos de ellos pudieron ser encarados positivamente: la caída en desgracia del principal líder de la organización se sorteó con éxito a través del reemplazo de Yrigoyen por Alvear y del impulso dado a la institucionalización partidaria. Esta última contribuyó además a hacer del radicalismo un partido político mejor organizado internamente, donde no faltaron las regulares convocatorias a sus órganos deliberativos y resolutivos. También la cuestión programática fue atendida en los años treinta: la UCR acudió a las diferentes campañas presidenciales celebradas en esa década provisto de una plataforma que detallaba las medidas a implementar por sus candidatos en caso de resultar electos. La unidad partidaria, por último, pudo ser salvaguardada. Ninguno de estos aspectos carecieron de dificultades: las resoluciones tomadas por los organismos de dirección fueron con frecuencia desobedecidas. El programa tendió a relegarse frente a los requerimientos urgentes de la coyuntura. Y el imperio de la unidad no fue óbice para la aparición de un acentuado faccionalismo. Pero, si se atiende a la conformación interna del radicalismo como organización, puede afirmarse que bajo la jefatura de Alvear se registraron importantes avances.

Mayores problemas tuvo la UCR en su relación con la ciudadanía. La legitimidad del radicalismo descansaba, en gran medida, en el estrecho vínculo que había construido con el valor de la democracia. Fue esto lo que se puso en cuestión a lo largo del período. La participación en el esquema de la república fraudulenta tendió, en efecto, a erosionar la creencia de amplios sectores sociales respecto a la inquebrantable lealtad de la UCR hacia dicho ideal. Concurrir a elecciones fraguadas, aceptar compartir espacios institucionales (como las cámaras legislativas) con representantes electos a través del fraude, e involucrarse en hechos de corrupción, provocaron que el radicalismo apareciera de cara a la opinión pública, para retomar la expresión de Halperin Donghi (2004), más como un cómplice que como una víctima del irregular orden político vigente en la Argentina.

Los límites que la UCR enfrentó en sus relaciones con la ciudadanía no terminaron allí. En la dura disputa partidaria, quienes se opusieron a las máximas autoridades radicales lo hicieron a menudo reivindicando consignas como la justicia social y la democracia económica para mejorar la condición de vida de los sectores trabajadores y obreros. Pero estas demandas no conllevaron un replanteamiento de la relación del partido con sus potenciales seguidores. Los sectores intransigentes, en efecto, tuvieron dificultades para tender puentes con la nueva realidad social producida por la aceleración del proceso de industrialización, y frecuentemente sus demandas parecieron estar puestas más al servicio de la disputa partidaria que de la inclusión de un actor social. Todo ello brinda elementos para entender por qué, cuando volvió a imperar la verdad del sufragio a mediados de los cuarenta, se pudo comprobar que el cuarto de hora del gran partido construido por Yrigoyen había quedado definitivamente atrás.

Capítulo 2

Un frente nacional en tiempo de crisis: la Concordancia y el ocaso de la política de los viejos acuerdos

Ignacio A. López

.....

2.1 Introducción

El viernes 4 de junio de 1943 dos convenciones partidarias, la demócrata nacional y la de la Unión Cívica Radical Junta Reorganizadora, separadamente, se aprestaban a ungir como candidatos a presidente y vicepresidente de la República al senador nacional Robustiano Patrón Costas y al ex gobernador santafesino Manuel de Iriondo. El frente electoral Concordancia había sido fundado doce años antes y los convencionales abrigaban la esperanza de consagrar la fórmula que garantizase un nuevo éxito electoral, constituyéndose el tercer gobierno constitucional consecutivo del mismo signo político. Sin embargo, la insurrección militar desenvuelta durante la medianoche y madrugada de ese día, terminó con las esperanzas, y el resultado político emergente de ese golpe militar modificó radicalmente el escenario nacional por décadas.

El armado electoral surgido a mediados de 1931 durante el gobierno dictatorial de José Félix Uriburu nunca actuó ni como un partido único, ni como un frente orgánico, ni como una coalición de gobierno cohesionada y articulada. La Concordancia, como señaló Darío Macor, tuvo desde el inicio un carácter laxo y con identidades partidarias dispersas: jamás se conformó en una organización estable e institucionalizada sino que funcionó como una alianza de hecho, que congregaba fuerzas de diferentes recursos (Macor 2001). La imagen que mejor la describe pareciera ser la de una gran constelación de dirigentes, que manejaban agrupaciones partidarias de diferentes tamaños y de alcance territorial limitado, solo articuladas por liderazgos

nacionales. Los astros de la galaxia fueron pocos, y la estrella mayor tuvo nombre propio: el general Agustín Justo. Sin embargo, durante un breve lapso, el presidente Roberto Ortiz, y luego su sucesor, Ramón Castillo, fueron competidores reales por el manejo de recursos políticos y simbólicos, e intentaron imprimir sus propias orientaciones al armado político-electoral.

En los hechos, la Concordancia operó como un «acuerdo parlamentario de bloques partidarios» que en coyunturas electorales se articulaba presentando cargos ejecutivos comunes para el gobierno nacional o los provinciales, aunque cada agrupación presentaba sus propios candidatos para los otros cargos legislativos. En el fondo, la «unidad en la diversidad» era propicia por el carácter no competitivo de las fuerzas conservadoras en todo el territorio, facilitando el encolumnamiento en cada distrito detrás del partido que mejor podía representar a la coalición (Macor 2001, págs. 63-64).

Los partidos integrantes de la Concordancia fueron, en tanto, bastante definidos. El principal socio fue el Partido Demócrata Nacional (PDN) que en sí mismo representó una coalición ya que reunía a agrupaciones provinciales con diferentes tradiciones y prácticas políticas (Macor 2001, págs. 61-62). Inicialmente el PDN se dotó de autoridades federales y su mesa directiva a lo largo de los años fue teniendo un rol protagónico al calor del aumento de la participación del elemento conservador en el armado político, con acumulación en la capacidad de intervención en asuntos locales. La agrupación más importante de este universo – el Partido Conservador de Buenos Aires – generó internamente luchas facciosas y tuvo suficiente complejidad en términos organizativos e ideológicos (Béjar 2005b, Béjar 2005a). Pero esta federación demócrata también incluía a partidos provinciales con larga trayectoria e impronta diversa: el conservadurismo cordobés, el autonomismo (Corrientes), algunos de creación más reciente como el Partido Popular (Jujuy) o agrupaciones escindidas de la conducción nacional como Bandera Blanca (Tucumán) (Azaretto 1983; Solís Carnicer 2005; Parra 2011).

Un segundo núcleo dentro de la coalición concordancista fue el antipersonalismo radical. Las agrupaciones antiyrigoyenistas provinciales escindidas formalmente de la Unión Cívica Radical del Comité Nacional (UCR CN) apoyaron a Justo en noviembre de 1931, pero tampoco pudieron estructurarse en un partido único ni adquirir una organización institucionalizada a nivel nacional, salvo en períodos transitorios como 1932-33 y 1943. Su peso en el frente estuvo dado no solo por su caudal electoral en el Litoral, en Capital Federal y en la región Noroeste, sino por su capacidad de competencia con el radicalismo alvearista por la tradición partidaria y elementos simbólicos. Como señaló Macor, ambas cuestiones eran de vital importancia para matizar la impronta conservadora de la coalición oficial, que habría acotado el electorado potencial y permitido un predominio interno del PDN, incompatible con el tipo de liderazgo que Justo estaba organizando hacia 1931. Sin embargo, el antipersonalismo que siempre le

había otorgado un perfil competitivo a la Concordancia frente a la UCR, luego del levantamiento de la abstención en 1935, se vio envuelto en un problema crucial de competencia. Ana Virginia Persello analizó el carácter intrínsecamente faccioso del radicalismo que tendía a la unidad en determinadas coyunturas pero que estaba sujeto a continuos realineamientos partidarios en otras, y de cuya dinámica tampoco escapó la disidencia antipersonalista (Persello 2004). Elena Piñeiro, por su parte, abordó la dinámica de las fuerzas antipersonalistas, tanto desde el punto de vista organizativo como ideológico, y aunque siempre primó la intención de diferenciarse del Comité Nacional hacia afuera, hacia adentro, los antiyrigoyenistas se orientaron a acumular recursos propios, cobijándose en los liderazgos de Justo y Ortiz (Piñeiro 2007, 2014). El antipersonalismo gobernó a lo largo de la década las provincias de Santa Fe y Santiago del Estero y participó en coaliciones de gobierno en provincias como Entre Ríos, Corrientes, La Rioja, Jujuy, Catamarca y San Juan. También mantuvo un número nada desdeñable de legisladores durante la década, pero su suerte estuvo cada vez más atada a los liderazgos nacionales. Aún con sus diferencias, fallecidos Ortiz y Justo en la coyuntura 1942-1943, los radicales «rosados» se volvieron cada vez más demócratas.

Por último, el tercer núcleo partidario dentro del espacio concordancista fue el socialismo independiente (PSI). Esta disidencia del Partido Socialista gestada algunos años antes estaba conformada por un núcleo de dirigentes capitalinos y bonaerenses que lograron sobrerrepresentación en el gobierno nacional (cfr. Martínez Mazzola en este volumen). En un primer momento, por la capacidad electoral demostrada en la Capital Federal, y luego por su nivel de exposición pública, ministerial y legislativa, que impactaba en la opinión nacional. La gestión exitosa de sus figuras nacionales en carteras clave, como Antonio de Tomaso en Agricultura o Federico Pinedo en Hacienda, además de un puñado de legisladores en el Congreso, les otorgó la impronta de *policy makers*. Si bien su caudal electoral entró en descenso hacia mediados de la década, eso no impidió que los socialistas independientes fueran definiendo su lugar en la política como cuadros dirigentes orientados a responder a los problemas del Estado y de la economía: se transformaron entonces en «actores principales del proceso de reformulación del Estado nacional» (Macor 2001, pág. 66). A estos dirigentes se debió gran parte de la reestructuración de la política económica de la década: leyes de protección social, programas macroeconómicos (como los de 1932-1933 y el de 1940) y creación de instituciones clave en materia de política monetaria como el Banco Central (Sanguinetti 1984; Llach 1984; Korol 2001).

Por sobre la constelación de agrupaciones y dirigentes, emergía el liderazgo «bifronte» de Agustín P. Justo (civil y militar) que funcionó como un pivote donde se articularon los apoyos de todos los sectores, y su figura

fue esencial para explicar el éxito y desenlace de la Concordancia hasta su muerte en 1943 (Fraga 1993; De Privitellio 1997, 2001). La coalición oficialista mantuvo una situación de «equilibrio dinámico» durante toda la década. Sin embargo, cuando se expuso la política aperturista del sucesor de Justo, Ortiz, la situación inicial se deterioró debido a las intenciones del nuevo presidente de reacomodar el armado político-partidario. El alejamiento del antipersonalista del gobierno a mediados de 1940 y la sucesión de Castillo, significó una última etapa de reajuste, en donde el elemento conservador primó como núcleo excluyente (Macor 2001).

Las posiciones en materia de política exterior a lo largo de la década fueron quizás un elemento central para generar el clivaje más notorio dentro del espacio, agravado a raíz de la Guerra Civil Española (1936-1939) y de la Segunda Guerra Mundial. Si el conflicto español enajenó el apoyo de los sectores más nacionalistas que habían apoyado a Justo en forma «desconfiada» (Tato 2009; cfr. Echeverría en este volumen), la Segunda Guerra generó divisiones cada vez más visibles en el universo concordancista sobre qué alianzas estrechar en un futuro escenario de posguerra. La política económica, en cambio, pese a demostrar discontinuidades – el Pacto Roca-Runciman (1933) y el Plan Pinedo (1940) fueron puntos claros al respecto – generó algunos consensos básicos – mayor regulación e intervención estatal en diversas esferas de la política cambiaria, fiscal y comercial – que trascendieron los diferentes gobiernos.

2.2 Emergencia y consolidación (1931-1935)

Tres semanas después de la «revolución» de septiembre de 1930, una comisión organizadora constituida por la mayoría de los firmantes del «Manifiesto de los 44» – legisladores opositores a Yrigoyen – promovió la organización de la Federación Nacional Democrática compuesta por diputados del socialismo independiente de la Capital Federal y demócratas de la provincia de Salta, Corrientes, San Luis, Buenos Aires, y Córdoba. La Federación fue un intento de reunificar a nivel nacional las viejas fuerzas dispersas del autonomismo y demostrar una actitud colaborativa con el gobierno provisional de José Félix Uriburu. Sin embargo, pronto la Federación manifestó su desavenencia en modificar el sistema representativo como proponía el dictador, aunque daba su acuerdo en algunos puntos de la reforma constitucional, sobre todo aquellos orientados a aumentar la autonomía financiera de las provincias. Pese a su actitud colaborativa inicial, los demócratas exigieron la convocatoria a elecciones nacionales y provinciales – cuyo primer test en el calendario sería abril de 1931 en Buenos Aires – y su rechazo absoluto a las reformas corporativistas.

Ese mes, el Partido Conservador de Buenos Aires y el Partido Demócrata de Córdoba dieron el puntapié inicial para transformar esa federación en

un gran partido a nivel nacional que llevó el nombre de Partido Demócrata Nacional. La convención constitutiva se reunió en Buenos Aires durante julio y agosto y elaboró un programa orientado a la «adhesión al sistema democrático» y a otros puntos de reforma política y económica. Al mes siguiente se conformó una primera mesa directiva presidida por el salteño Robustiano Patrón Costas (Azaretto 1983, pág. 81). Los núcleos demócratas, para ese entonces, estaban alineados con la posible candidatura a la futura presidencia de la República del ex ministro de Guerra de Marcelo T. de Alvear, el general Agustín Justo. Este había sido fundamental en las gestiones del golpe que desplazó a Yrigoyen aunque tempranamente marcó disidencias con las políticas de reforma corporativa del presidente Uriburu.

A fines de agosto de 1931, las autoridades del PDN manifestaron a sus pares de la Junta Reorganizadora del Antipersonalismo, el deseo de que sus partidos entrasen «a considerar posibles concordancias».[1] Una semana después, el presidente Uriburu firmaba un decreto convocando a elecciones presidenciales para el 8 de noviembre. En los meses de septiembre y octubre, la campaña fue vertiginosa y las convenciones partidarias de la incipiente alianza proclamaron sus candidaturas. El PDN decidió proclamar la fórmula Agustín Justo-Julio A. Roca (h) pero no coincidieron con los antipersonalistas en consensuar la candidatura a la vicepresidencia. Ese mismo mes, algunos dirigentes le comunicaban su sentir al todavía presidente Uriburu sobre la candidatura de Justo y la adhesión de diversos interventores federales en las provincias. Justo disponía a través de estos, de distintos puestos públicos provinciales y se entrevistaba durante sus giras de propaganda política con jefes del ejército.[2]

Por su lado, el antipersonalismo había definido su posición a nivel nacional luego de superar las vacilaciones que provocó entre sus dirigentes la reunificación comandada por Alvear, conocida como «Junta del City». Muchos dirigentes provinciales, liderados por figuras santafesinas como Ricardo Caballero y férreos antiyrigoyenistas como Leopoldo Melo, hicieron naufragar los intentos fusionistas de Alvear y conformaron la comitiva llamada «Junta del Hotel Castelar» que apoyó la candidatura del general Justo (Piñeiro 2007, págs. 82-83). Hacia septiembre, la convención de la Unión Cívica Radical Antipersonalista (UCRA) proclamó la fórmula Agustín Justo-José Nicolás Matienzo, compartiendo con los demócratas el primer término, pero distinguiéndose en la candidatura a vicepresidente. Por último, los socialistas independientes también resolvieron su adhesión al general Justo, condicionándola al poder «limitado» de las fuerzas armadas en el nuevo

1.– *La Nación*, 21/08/1931.
2.– Archivo Alvear, Universidad Torcuato Di Tella, Tomo I (en adelante, AA, T. I), «Carta de Cipriano de Urquiza a José F. Uriburu», Buenos Aires, 27/10/1931, doc. 26.

gobierno; al respeto de las prerrogativas del Congreso; y al resguardo de las instituciones federales.[3]

La maquinaria de apoyos estaba lista. A partir de adhesiones partidarias, tejidas durante meses, Justo iba a conseguir una red de apoyos electorales sobre la que construir su poder político. Pero contaba además con militares de su confianza que integraban los elencos de las intervenciones provinciales, quienes no sólo se ocupaban de mantenerlo ampliamente informado sobre la acción de las distintas fuerzas políticas provinciales, sino que actuaban también como «operadores políticos» entablando negociaciones con interventores y dirigentes partidarios, y desarrollando propaganda a favor de su candidatura en distintos ámbitos de sociabilidad (Piñeiro 2007, págs. 104-105).

El general Justo consolidó tempranamente la adhesión de este importante núcleo de apoyos castrenses, cuestión que se volvió de vital importancia para la supervivencia de la Concordancia durante toda la década. Las lealtades militares hacia Justo provenían, en parte, por su experiencia como ex ministro de Guerra del presidente Alvear cuando realizó una gestión exitosa, pero también, por su paso por la dirección del Colegio Militar durante más de una década donde cosechó la simpatía de distintas camadas de jóvenes oficiales (De Privitellio 1997). Sin embargo, su posición profesional y «liberal» dentro de la institución se fue deteriorando a lo largo de los años, socavada en parte por el auge del integrismo católico y las ideas nacionalistas que penetraron en el mundo castrense, y que el mismo Justo toleró y ayudó a expandir (Zanatta 2005). Pese a ello, hasta su muerte en enero de 1943, la oficialidad respondió en forma mayoritaria a su liderazgo, y el general se convirtió en un actor de veto dentro de las fuerzas armadas, y en una figura disuasiva para cualquier tipo de plan que atentase contra la institucionalidad republicana que él mismo ayudó a forjar a partir de inicios de 1932.

Las elecciones presidenciales del 8 de noviembre se realizaron con la participación de los partidos que apoyaban la candidatura de Justo y aquellos que impulsaban a los candidatos de la Alianza Civil que integraban los partidos Socialista y Demócrata Progresista con la fórmula De la Torre-Repetto. La abstención del radicalismo, y el inicio de un proceso de sistematización de prácticas electorales fraudulentas, dejó el camino allanado para el triunfo de Justo. Con el aporte de los votos radicales y socialistas independientes, el porcentaje de la Concordancia rozó el 55 % de los votos (Cantón 1973, pág. 270). Los electores de la fórmula presidencial sostenida por el PDN triunfaron en Tucumán, Córdoba, Corrientes, Mendoza y Salta; y

3.– Archivo General de la Nación, Fondo Documental Agustín P. Justo (en adelante, AGN, FAPJ), Contestación del general A.P. Justo al Congreso Nacional del PSI, caja 28, doc. 49, f. 351.

en algunas otras el candidato de la Concordancia obtuvo mayoría y minoría de electores: Agustín P. Justo obtuvo 237 frente a los 122 de la Alianza Civil.

Como señaló Béjar, a partir de ese sonado triunfo fue posible advertir tres situaciones distintas en el grupo de provincias que controló el oficialismo. Primero, aquellas en las que los demócratas nacionales lograron una posición dominante como Buenos Aires, Mendoza, Salta, Córdoba y San Luis. Segundo, aquellas provincias en las que los demócratas nacionales compartieron cargos gubernativos con partidos de alcance provincial como Corrientes y Tucumán. Tercero, aquellas provincias en las que se destacaron las agrupaciones radicales antiyrigoyenistas, asociadas con la recuperación de las fuerzas conservadoras, como por ejemplo, San Juan, La Rioja, Jujuy, Catamarca y Santiago del Estero (Béjar 2005b, págs. 86-88).

La Concordancia, desde el inicio, aspiró a tener una política independiente e inorgánica, donde cada partido tomaba sus decisiones y se evitaba el fusionismo, pero además el liderazgo de Justo atentó contra cualquier tipo de institucionalización, beneficiándose de las disidencias internas de cada partido y colocándose en árbitro de las disputas. Las particulares características del contexto político argentino de inicios de los años treinta posibilitaron incluso que Justo hiciera uso de una retórica «regenerativa» y se presentase a sí mismo como un líder de «refundación». En este sentido, Halperin Donghi advirtió que una vez electo, Justo abusó de la ambigüedad en sus discursos con el objetivo de no enajenar el apoyo de las diversas fuerzas que levantaron su candidatura, pero con velados propósitos –y algunas referencias más claras– de «clausurar» el proceso abierto en septiembre (Halperin Donghi 2004, págs. 82-89).

Un escenario internacional convulsionado también sirvió a estos propósitos de refundación y posibilitó un moderado aislamiento de los conflictos europeos. La restauración argentina tuvo que convivir con las traumáticas experiencias de Benito Mussolini en Italia y de Adolf Hitler en Alemania, aunque también con la efervescente experiencia republicana española. El tratado Roca-Runciman firmado con el Reino Unido (1933) fue quizás uno de los intentos económicos y comerciales más audaces y estratégicos –aunque también polémicos– para reeditar pautas de inserción internacional que sufrían por esas alturas un notorio deterioro. A nivel regional, Justo mantuvo excelentes relaciones con Vargas en Brasil y la mediación antibélica del canciller argentino Carlos Saavedra Lamas durante la guerra del Chaco (1932-1935) le valió su consagración con el premio Nobel de la Paz. Por último, la visita del presidente estadounidense Franklin D. Roosevelt a Buenos Aires durante 1936, fue un hito en el espíritu panamericano y pacifista que Justo buscó imprimir en el ámbito exterior.

Desde la presidencia, el general también reforzó sus adhesiones militares y políticas iniciales con la construcción de una red de lealtades diversas y con alcance territorial amplio. A través del presupuesto y vinculaciones

personales, esa pléyade de apoyos se convirtió en una aceitada maquinaria de patronazgo y espionaje, que en tiempos de paz servía para mantener actualizado al presidente, y que en tiempos de elecciones, actuaba como un engranaje de control electoral. A los apoyos castrenses, luego se sumaron recursos policiales, y también empleados públicos, que en reparticiones cruciales como la Dirección Nacional de Correos, Telégrafos y Servicios Telefónicos mantuvieron siempre informado al presidente de todos los movimientos subterráneos de la política nacional y provincial.

Desde el punto de vista partidario, un rasgo característico de esta etapa de emergencia y consolidación del espacio político concordancista fue el intento de cada partido de dotarse de una estructura de gobierno a nivel nacional, por un lado, pero de faccionalización a nivel local, por el otro. Si bien el PDN logró constituir una mesa directiva nacional con estabilidad por largos años a cargo del senador Robustiano Patrón Costas –lo que permitió a las fuerzas conservadoras posicionarse con mayor firmeza ante la gravitación de Justo– no sucedió lo mismo con las agrupaciones antipersonalistas. Rápidamente se dieron conflictos entre los delegados partidarios de la Capital Federal y los de Córdoba. Sin órganos de gobierno a nivel nacional y desorganizado, un puñado de dirigentes en el Congreso decidió redactar un manifiesto político y constituirse en Junta Especial Reorganizadora a principios de 1933 (Piñeiro 2007, págs. 150-151). Sin embargo, la Junta se disolvió por enfrentamientos entre los delegados provinciales y el antipersonalismo capitalino.

Pero si bien los demócratas demostraban estabilidad a nivel nacional, en las provincias adquirieron una dinámica facciosa. En la provincia de Buenos Aires, Tucumán y Catamarca se suscitaron conflictos entre gobernadores y legislaturas (Béjar 2005b, págs. 122-127; Parra 2011; Bazán *et al.* 2000). En este sentido, las intervenciones federales durante el período de Justo deben leerse como mediaciones a conflictos internos de las fuerzas del bloque oficialista; sin embargo, siempre fueron «cautas» y buscaron preservar la imagen del presidente como «árbitro no comprometido con las tendencias y camarillas en pugna» (Béjar 2005b, pág. 94).

2.3 Supervivencia y equilibrio (1935-1940)

La vuelta del radicalismo a la arena electoral nacional en 1935 activó compromisos más sistémicos del oficialismo con las prácticas fraudulentas como modo de reproducción en el poder y control sucesorio. La modificación de la ley 8.871 mediante ley del Congreso en 1936 le devolvió la mayoría absoluta de electores para presidente y vice a la lista ganadora; a lo que hay que sumar la modificación de la legislación electoral en varias provincias que confirmaba el manejo inescrupuloso de mesas de votación, el involucramiento de empleados públicos y el monopolio de la fiscalización

comicial a los oficialismos locales. Todas medidas que conformaron un *corpus* orientado a activar la «maquinaria» del fraude, aunque las prácticas electorales tuvieron diferencias notorias en algunos distritos y en otros (Melón Pirro 1996; Macor y Piazzesi 2005; De Privitellio 2009). A partir de ese año, un nuevo balance de poder quedó conformado mediante la configuración de un campo opositor a través del «frente popular» – en el que confluyeron la UCR, el Partido Socialista y el Partido Demócrata Progresista – y un campo oficialista esbozado en el «frente nacional» con el PDN y el PSI como elementos aglutinantes, que en algunos distritos como la Capital Federal modificó la tradicional denominación «Concordancia» (Béjar 2005b, pág. 107). En marzo, en el marco de elecciones legislativas, se alteró incluso la relación de fuerzas entre la Concordancia y la oposición. Los oficialistas obtuvieron 43 % de las bancas y el bloque radical pasó a ocupar el segundo lugar detrás de los demócratas nacionales, vaciando la sobrerrepresentación parlamentaria para socialistas y demoprogresistas producto de la abstención radical (Macor 2001). A fines de 1935 se habían consolidado ciertas posiciones en las provincias y serían clave para la sucesión presidencial de 1937. Durante octubre, el presidente Justo decretó la intervención a Santa Fe despojando del poder a los demócratas progresistas, para garantizar un futuro número suficiente de electores. Al mes siguiente, Córdoba y Buenos Aires renovaron sus ejecutivos provinciales: mientras en Córdoba triunfó el radicalismo sabattinista, en Buenos Aires se impuso la fórmula Fresco-Amoedo.

Durante 1936-1937, el espacio concordancista inició un proceso de reajuste orientado a reafirmar posiciones políticas de la mano del presidente Justo. Al momento del recambio presidencial, el oficialismo controlaba once distritos y la UCR sólo tres (Entre Ríos, Córdoba y Tucumán). La decisión sobre el nombre del sucesor de Justo se hizo esperar hasta mediados de abril.[4] El cálculo reeleccionista del presidente saliente y la decisión de mantener la alianza balanceada entre un espacio conservador y otro radical, quizás fueron los elementos definitorios para que el presidente viese en su ministro de Hacienda, Roberto M. Ortiz, el mejor candidato a sucederlo. Dos cuestiones fueron centrales desde el punto de vista sistémico: el primer término debía ser antipersonalista; el segundo, conservador, en una política deliberada de inflamiento de las fuerzas radicales antiyrigoyenistas en detrimento de las conservadoras (Luna 1978; Fraga 1993; De Privitellio 1997; Halperin Donghi 2004).

A partir de 1938, el nuevo presidente Ortiz propició el sobredimensionamiento de la orientación radical del espacio, sin desmedro de apoyos conservadores a nivel provincial, aunque sincerando una política general de apertura electoral que implicase una representación más genuina de

4.– *La Nación*, 16/04/1937.

la voluntad popular (Luna 1978; Portantiero 1987; Torre 2006). También el «orticismo» inició una política de acercamiento al Ejército, como lo demuestran las medidas de aumento presupuestario y nombramientos en puestos clave de oficiales con orientación profesional (e incluso radical). Conseguir el respaldo castrense fue fundamental para ampliar las bases de poder en una coalición que parecía débil y supeditada a la gravitación personal del ex presidente Justo (Potash 1986, pág. 155). El nuevo ministro de Guerra, Carlos Márquez, fue un actor central para promover aumentos presupuestarios y desplazar de cargos elevados a oficiales nacionalistas. El presidente Ortiz, en clima con lo que sucedía en otras latitudes del mundo, fue visto cada dos semanas en establecimientos, desfiles o pruebas militares en una política deliberada de alta visibilidad castrense.

Las intervenciones federales se transformaron en una herramienta clave del poder presidencial para lograr apertura electoral y provocar realineamientos dentro del espacio concordancista. En cinco oportunidades –y en cuatro distritos– el presidente envió una misión federal o realizó algún tipo de acción, en ocasiones donde se denunciaron prácticas fraudulentas en actos comiciales. Al igual que Justo, Ortiz actuaba como nuevo «árbitro» pero con sello legalista: San Juan (abril de 1938 y mayo de 1939); Santiago del Estero (septiembre de 1939); Catamarca (febrero de 1940) y la poderosa Buenos Aires bajo el gobernador Manuel Fresco (marzo de 1940) fueron distritos intervenidos, y el presidente reordenó las alianzas en el plano local de manera en que él mismo tuviese un rol protagónico.

El escenario internacional con el que convivió el nuevo presidente fue realmente «tormentoso». A los estragos de la Guerra Civil Española y sus repercusiones en la Argentina, se sumó el inicio de la Segunda Guerra Mundial en septiembre de 1939. El gobierno argentino mantuvo una estricta neutralidad inicial, pero la polarización ideológica se instaló de lleno en el escenario político local lo que activó una serie de medidas por parte del presidente –que acompañó la oposición– con el objeto de controlar las actividades de asociaciones extranjeras en suelo argentino, especialmente las de origen alemán (Newton 1995).

Al ritmo de los acontecimientos externos, y cuando el conflicto europeo era cada vez más dramático –agravado por la invasión nazi a Francia en mayo de 1940– la política de apertura doméstica del presidente se hacía cada vez más visible para los partidos opositores y para los aliados de la coalición. Algunos historiadores no dudaron en advertir que dicha apertura respondía a un posicionamiento del presidente sobre los conflictos ideológicos de su tiempo en los que la institucionalidad democrática se derrumbaba en forma acelerada (De Privitellio 2001; Halperin Donghi 2004; Bisso 2005). A nivel local, sin embargo, no faltaron quienes vieron en ese programa democrático, los deseos de Ortiz de colocarse por encima de los partidos políticos y aprestarse a una nueva era de refundación republicana

que lo colocaría a él como elemento central de un nuevo equilibro, y en la que el cálculo estratégico primaba sobre preceptos ideológicos: mejorar las prácticas políticas y gestionar una nueva oferta electoral, serían sus objetivos complementarios, no muy lejanos al saenzpeñismo dos décadas antes.

El radicalismo en las elecciones legislativas de marzo de 1940 no solo alcanzó el 45 % de los sufragios sino que consiguió la mayoría de las bancas de la Cámara de Diputados en un clima de exaltación y apertura (Cantón 1973, pág. 120). Pocos meses duró la «primavera» del orticismo y el presidente se vio obligado a abandonar el cargo por enfermedad. Sin embargo, esa experiencia demostró una verdad irrefutable: el armado político no resistía el embate del poder presidencial y su existencia no era independiente de los deseos, intereses y sentido de dirección que quisiese imprimir este. El aura radical de la Concordancia se fue desvaneciendo y una fase terminal se gestó bajo la tutela del vicepresidente Castillo.

2.4 Reconfiguración y colapso (1940-1943)

Cuando hacia mediados del año 1940 el presidente Ortiz ingresó en licencia por razones de salud, el panorama político cambió rotundamente. La crisis política interna del espacio era latente. Hacia agosto y luego, durante febrero de 1941, el Senado de la Nación avanzó en la creación de dos comisiones de investigación en importantes asuntos políticos. La primera se orientó a indagar una venta irregular de terrenos al Ministerio de Guerra – denominado luego «escándalo de El Palomar» – y se acusó al ministro de dicha cartera de «mal desempeño». Este hecho terminó con varios procesados en la justicia, además de la separación de la Cámara Baja de los diputados involucrados. La segunda comisión buscó averiguar sobre el estado salud del presidente y – si era pertinente – sentar los antecedentes necesarios para un caso de inhabilidad, lo que posibilitaría el juicio político al titular enfermo. La labor de los senadores concluyó que la ceguera era irreversible y que Ortiz tenía escasas posibilidades de retornar al poder. Ambas comisiones, con móviles claros, se orientaron a desprestigiar al presidente enfermo y consolidar institucionalmente al vicepresidente Castillo, quien para septiembre de 1940 pudo nombrar a un gabinete propio.

La breve experiencia orticista había exacerbado los ánimos de oficialistas y opositores. Los radicales habían podido comprobar que una política honesta y recta en materia institucional, respetuosa de los resultados de las urnas, les había devuelto la mayoría en Diputados y algunas gobernaciones. Los aliados concordancistas, en cambio, habían probado el sabor de la derrota: una política demasiado permisiva, y sobre todo con el aval presidencial, terminaría por liquidar la alianza política y derivaría en el mediano o largo plazo en el retorno del radicalismo al poder. Castillo percibió la delicada situación institucional, y orientó todo su poder para afirmar su posición privilegiada.

Si bien criticó fuertemente el «régimen tutorial del Poder Ejecutivo» en sus facultades de intervenir distritos en los que supuestamente existían denuncias de fraude, en los hechos se mostró demasiado permisivo con las prácticas fraudulentas en distritos concordancistas, e «interventor» en provincias radicales. Las elecciones a gobernador de las provincias de Santa Fe (diciembre de 1940) y Mendoza (enero de 1941), además de las legislativas de marzo de 1942, evidenciaron a un ejecutivo dispuesto a «prescindir» de la vigilancia de los procesos electorales y a extremar la retórica de autonomía provincial para favorecer el *status quo* de los aliados a nivel subnacional.

El resultado de la comisión senatorial de abril de 1941 sobre el estado de salud del presidente Ortiz había tenido como resultado su retirada del tablero estratégico. En la mayoría de las provincias hacia mediados de ese año, dos movimientos parecían simultáneos: por un lado, las fuerzas demócratas tendían a la cohesión, y si bien el general Justo seguía siendo un árbitro respetado para importantes sectores del partido, Castillo emergía como un jugador primordial de respaldo para los más duros. Las gestiones del Comité Nacional del PDN en una delegación presidida por el senador Suárez Lago – presidente de la mesa directiva – en las provincias de Córdoba, Tucumán, San Juan y Catamarca fue exitosa en agrupar fuerzas conservadoras dispersas y tender a la unidad.[5] Por otro lado, las fuerzas provinciales antipersonalistas se dividían. En la mayoría de los distritos controlados por el oficialismo, y de cara a las renovaciones del ejecutivo provincial, el radicalismo concordancista tendía a fragmentarse; incluso en muchos distritos las escisiones correspondían a pautas «legalistas» como sucedió en Santa Fe y Córdoba; mientras que en otros distritos dichas fragmentaciones respondían a pujas internas partidarias y disidencias de dirigentes, como en Catamarca y Buenos Aires (Macor y Piazzesi 2005; Piazzesi 2010; Piñeiro 2014). Los nuevos tiempos que se avecinaban llevaron incluso a que alrededor del ministro del Interior, Miguel A. Culaciati, se propiciase la idea de formar un nuevo partido político, refundando la Concordancia pero con nombre distinto, estructura más cohesionada y bajo el auspicio del propio vicepresidente.[6]

Desde el punto de vista interno del espacio oficialista, la consolidación del poder del vicepresidente fue un éxito hacia fines de 1941 y principios de 1942. Varios factores reforzaron su posición: el retorno del presidente Ortiz se hizo imposible y en junio de 1942 presentó su renuncia; el acercamiento a sectores nacionalistas dentro del ejército como lo demuestran reuniones recurrentes con la oficialidad más activa desplazando a partidarios del general Justo (Potash 1986, pág. 232); y mayor control territorial enviando misiones federales. En estos meses, el vicepresidente se esforzó por seducir

5.– *La Nación*, 12/07/1941.
6.– *La Nación*, 29/05/1941.

a las fuerzas armadas a través de aumentos presupuestarios extraordinarios, mediante la creación de organismos e instituciones castrenses de alto impacto (como la dirección de Fabricaciones Militares), por medio de posibles compras de armamentos a EEUU y Alemania, y por último, vía instrumentos destinados a dar un mayor protagonismo al Estado sobre temas económicos y comerciales como exigían los sectores más nacionalistas (por ejemplo, la creación de la Flota de la Marina Mercante). El período que recorre los meses de marzo y junio de 1942 representó la transición definitiva hacia una nueva fase de la política nacional.

El escenario internacional adquirió dimensiones preocupantes al ritmo de la Segunda Guerra y el conflicto global en sus múltiples registros repercutió intensamente en la política doméstica y en el rumbo de la política exterior del gobierno de Castillo. El vicepresidente mantuvo una inflexible política de neutralidad que se volvió cada vez más polémica y difícil de sostener. El ataque japonés a Pearl Harbour en diciembre de 1941, y las consecuencias de la Tercera Reunión de Consulta de Cancilleres Americanos en Río de Janeiro durante 1942, demostraron que la postura exterior del círculo vicepresidencial era demasiado rígida (Corigliano 2009). Los sectores concordancistas se dispersaron en dos universos definidos en materia internacional: aquellos neutralistas, que seguían la línea del Ejecutivo, por obediencia, pragmatismo o, simplemente, por simpatías a gobiernos «fuertes»; y los espacios críticos, volcados al universo aliadófilo, por las mismas razones. En el primer grupo se encontraban el propio vicepresidente Castillo, el canciller Enrique Ruíz Guiñazú y el ministro Guillermo Rothe, entre otros. Entre el segundo, el presidente Ortiz, el ex canciller Julio Roca (hijo), el ex ministro Federico Pinedo, el gobernador Rodolfo Moreno, y luego, a partir del ingreso de Brasil a la contienda, el ex presidente Justo. En el medio de ambos sectores se movían pendularmente dirigentes con escasas definiciones y muchas ambigüedades, como el senador salteño Robustiano Patrón Costas, aunque eventualmente podrían haber definido su postura hacia la ruptura.

La desaparición física de dos líderes adversarios al programa de Castillo (Alvear primero, Ortiz luego), develaron la puja real del poder hacia el segundo semestre de 1942: la del ahora titular del Poder Ejecutivo con el ex presidente Justo, que emergía y se consolidaba como una figura de prestigio nacional con chances de obtener la presidencia en las elecciones del próximo año. Las elecciones legislativas de marzo de 1942, sin embargo, habían presentado algunos rasgos distintivos: no solo la derrota radical en algunos distritos – en los que no medió la maquinaria del fraude – como Capital Federal; sino también el «escaso entusiasmo», las «incertidumbres» y una «creciente anomia» que corroía el sistema político argentino (De Privitellio 2001, págs. 120-121). Paralelamente, la abstención radical en distritos como Catamarca, La Rioja y San Luis, logró que la Concordancia se presentase sin oposición en los comicios. Pero además, fue cada vez más notorio el

«exclusivismo» que intentaba imprimir Castillo a la coalición oficialista: los demócratas ganaban peso, mientras que los radicales concordancistas se desvanecían. Algunos grupúsculos antipersonalistas optaban por fusionarse con el PDN y mantener una Concordancia desbalanceada; otros «legalistas» veían apagar su estrella con la desaparición del liderazgo de Ortiz y se apegaban a la prédica antifascista del general Justo.

Los demócratas se impusieron en las provincias que renovaron sus Ejecutivos como San Luis (octubre de 1942) y La Rioja (noviembre de 1942). Pero también arrebataron el control de provincias radicales, intervención mediante: Jujuy (mayo de 1942) y Tucumán (octubre de 1942). En Corrientes, pieza clave en los planes reeleccionistas de Justo y con fuerte presencia antipersonalista, Castillo envió una misión federal y reordenó el juego de alianzas locales. El fallecimiento del general Justo en enero de 1943 terminó por consolidar la posición de Castillo y volvió a configurar el escenario político. El ex presidente venía trabajando hacía meses en su candidatura y posiblemente su figura hubiese logrado arrastrar elementos antipersonalistas, demócratas y también radicales del Comité Nacional (como el núcleo metropolitano que favorecían la conformación de la Unión Democrática).[7]

En el universo concordancista, las dos constelaciones se manifestaron claramente en esos primeros meses de 1943: la «coalición del Norte», por un lado, y la fuerza demócrata de Buenos Aires, por el otro.[8] En febrero, el presidente logró imponer la candidatura del salteño Robustiano Patrón Costas, presidente provisional del Senado, y tras algunas desavenencias partidarias, las fuerzas oficialistas aceptaron la imposición de la liga norteña. Pese a la rebeldía «demócrata» de Buenos Aires el camino se allanó hacia abril con el triunfo del designio presidencial. Los bonaerenses pedían un programa de gobierno, una suerte de ejes mínimos (además de eventuales realineamientos en política exterior)[9] e insistían en la candidatura presidencial de su gobernador Rodolfo Moreno, pero el conflicto terminó con su renuncia, previa amenaza de intervención. La adhesión de todos los núcleos provinciales – demócratas, antipersonalistas e incluso «justistas» – al presidente provisional del Senado sellaron su candidatura.

La candidatura a la vicepresidencia de esta alianza cada vez más despareja evidenció también el raquitismo del acuerdo. Algunos sectores vinculados a la dirigencia del antipersonalismo santafecino eran los más entusiastas defensores de la «fórmula mixta», es decir, completar la candidatura de Robustiano Patrón Costas con la de un dirigente de este grupo político. El

7.– AGN, FAPJ, «Informe político del mes de agosto», 14 de agosto de 1942, caja 104, doc. 186.
8.– AGN, FAPJ, «Declaraciones de José Aguirre Cámara para un diario no identificado», s/f, caja 104, doc. 112.
9.– AGN, FAPJ, «Carta de Justo Rocha a Gilberto Suárez Lago (PDN)», La Plata, 2 de febrero de 1943, caja 134, doc. 309.

radicalismo concordancista había quedado reducido a Santa Fe y Santiago del Estero. El socialismo independiente había perdido representación parlamentaria y ministerial y solo era una evocación de algunas figuras también distanciadas del gobierno de Castillo, como la de Federico Pinedo. La mayoría de los núcleos demócratas, fuertes en el resto de las provincias, sostenía la voluntad de presentar una fuerza *netamente* conservadora. No solo los dirigentes bonaerenses habían insistido en este punto, sino también los conservadores de Entre Ríos, Tucumán, San Luis y San Juan se ubicaban en esa misma idea. Según los defensores de dicho planteo, la integración de la fórmula no afectaría la política de la Concordancia que podía mantenerse en otras formas y con intervención más directa en las funciones de gobierno. Los cálculos desde el Ministerio del Interior eran que en septiembre de 1943 se lograrían 194 electores de las provincias demócratas y solo 52 de las antipersonalistas.[10]

Durante los primeros días del mes de mayo, se consagró la candidatura a vicepresidente del ex gobernador de Santa Fe, Manuel de Iriondo. Hacia inicios de junio, dos convenciones partidarias, una por el PDN, otra por el antipersonalismo –reunificado a nivel nacional en la UCR Junta Reorganizadora– proclamarían los candidatos por separado, con fecha programada para el trágico 4 de junio.[11]

Poco sirvieron los apoyos partidarios cohesionados en un oficialismo supeditado a la cúpula demócrata del Norte para contener la insurrección militar que estalló en la madrugada del 4 de junio, como una de las «soluciones» posibles ante el *impasse* en que estaba sumergida esa experiencia republicana (Devoto 2014). La constelación de dirigentes y agrupaciones había quedado cada vez más debilitada ante la percepción de la mayoría de la opinión pública y los partidos opositores sobre la ilegitimidad intrínseca de esos acuerdos políticos. Las fuerzas armadas no solo experimentaron un crecimiento burocrático sostenido durante toda la década, sino que además su «politización» fue otro elemento decisivo, alentado por los tres presidentes de la coalición (por el general Justo, pero también por los «civiles», Ortiz y Castillo). En consecuencia, el poder militar terminó siendo el que más rápido actuó –corporativamente– ante un escenario incierto producto de una serie de errores estratégicos del propio presidente (Rouquié 1981; Potash 1986; Devoto 2014). No sólo los oficiales nacionalistas sino los de supuesta postura aliadófila –y con mando de tropa– marcharon esa mañana del 4 de junio a la Casa Rosada y precipitaron la renuncia del presidente: el aval y la complicidad del ministro de Guerra, Pedro P. Ramírez, fue crucial para el éxito del movimiento. El poder militar controló la escena e hizo proféticas

10.– AGN, Archivo Intermedio, Dirección Nacional Electoral, Elección presidencial de 1943, Colegio Electoral (cálculos), en caja 47.
11.– *El Mundo*, 03/06/1943.

las palabras de Federico Donadío – un «justista» tucumano – en el nuevo contexto que emergió:

> «Necesitamos un conductor de multitudes ¿Pero qué hará él sin un partido orgánico, disciplinado, eminentemente popular? Parecería que de mis conceptos fluiría latente una confusión, una contrariedad, en una palabra argumentos antagónicos. Pero no es así: basta que el jefe aparezca y esté dispuesto a actuar activa y no pasivamente en política. La revolución de las masas vendrá después».[12]

12.– AGN, FAPJ, Federico Donadío a Tomás Amadeo, Buenos Aires, 23 de noviembre de 1940, caja 104, doc. 318.

Capítulo 3

Catolicismo y política en una república imaginada

José Zanca

.....

En los días previos al golpe de Estado del 6 de septiembre de 1930 se editaban los últimos números del semanario anticlerical *El Peludo*. Durante más de una década había sido una cantera incesante de relatos, denuncias y caricaturas que intentaban demostrar el carácter pernicioso que cumplía la religión en una sociedad ilustrada. No se trataba sólo de su remisión a la esfera privada, como sostenía el liberalismo novecentista; consistía en denunciar un «cáncer» que debía ser extirpado para permitir la evolución hacia formas más civilizadas de relación. La iglesia era, desde la perspectiva de este anticlericalismo radicalizado, una institución que permitía la reproducción de las peores lacras sociales: la ignorancia, el poder militar, la explotación femenina y su rebajamiento a mero objeto sexual. La historia condenaba a la Iglesia, que no había tenido «… jamás escrúpulos en utilizar el crimen y en transformar el crucifijo en puñal para sobreponer a la ciencia y a la razón su religión bastarda y mercenaria».[1]

Esta mirada no se circunscribía sólo a sectores intelectualizados y militantes. Imágenes y conceptos similares recorrían la prensa de masas de los años veinte, como el diario *Crítica*, que no dejó de denunciar los «negocios» del clero o las espurias maniobras que el Vaticano habría perpetrado para rechazar la nominación de Miguel de Andrea para el cargo de arzobispo de Buenos Aires. Esa perspectiva secularista, sin embargo, se oscurecería en la década de 1930. En octubre de 1934 se reunió en Buenos Aires el Congreso Eucarístico Internacional, en varias jornadas que movilizaron a cientos de miles de participantes. Muchas organizaciones de carácter laicista intentaron «esclarecer» a los ciudadanos sobre el perfil reaccionario del acontecimiento; sin embargo su masiva concurrencia hablaba de

1.– «La iglesia y sus crímenes», *El Peludo*, n.º 543, 16/08/1930, pág. 2.

la popularidad que había adquirido el catolicismo. ¿Cómo había logrado movilizar a tales contingentes humanos? ¿Cómo se traducía esa presencia pública en términos de poder político? Finalmente ¿cuáles serían los costos y los beneficios de la nueva relación en la que se insertaba el catolicismo, el Estado y la sociedad a partir de esa década? Este ensayo pretende responder algunas de estas preguntas auscultando las relaciones entre la política y la religión en el marco de la restauración conservadora de la década de 1930.

3.1 El poder y la gloria

Los vínculos entre religión y política son dinámicos. En una definición amplia y operativa, el *poder* es esa relación que establecen las instituciones y grupos afines a los bienes inscriptos socialmente en el campo religioso con otros actores e instituciones de la esfera política (Estado, partidos políticos, ejército, sindicatos, organizaciones varias de la llamada «sociedad política») (Casanova 1999).[2] Alejándonos de una mirada «mágica» e ilimitada respecto del poder eclesiástico, la acción política de la Iglesia está restringida por el sistema de valores de la sociedad. Esta relación (a veces de perfiles dramáticos) exhibe desde la Revolución Francesa y en forma aguda a partir de la consolidación de los Estados liberales modernos, el despliegue de un discurso profundamente contracultural. El *Syllabus Errorum* de 1864 sintetizaba ese conjunto de principios del mundo moderno con los cuales la Iglesia Católica de Roma no estaba dispuesta a negociar. Es impensable, sin embargo, que la iglesia o los católicos pudieran actuar en la esfera pública sin entrar en distintas formas de negociación con la cultura de su época. En Argentina, el discurso antimoderno del catolicismo debía convivir con una idea sedimentada sobre el ascenso social, la igualdad de oportunidades, las características de una tierra abierta a los inmigrantes en la que las diferencias religiosas eran minimizadas en pos del bien común. A su vez, que las aptitudes de un pueblo se midieran por su pujanza material era un sentido común que se colaba en muchos de los discursos de la jerarquía religiosa.

El 6 de septiembre de 1930, cuya incidencia en la historia política es indudable, ha sido cuestionado en su carácter de fecha disruptiva para la historia del catolicismo. Muchas de las manifestaciones características de la presencia pública de lo religioso y de las ideas enarboladas por los católicos

2.– Durante mucho tiempo los estudios sobre religión y política se han concentrado en sus aspectos institucionales, simplificando tal relación a los vínculos entre la Iglesia y el Estado. Si se incorporaba el concepto de campo religioso, este aparecía monopolizado por sus agentes más concentrados: la jerarquía eclesiástica y sus sacerdotes. En los últimos años el catolicismo comenzó a analizarse como un campo de tensiones, que se agudizaron a medida que este complejizó sus relaciones con la sociedad (Di Stefano y Zanca 2015).

en esa década estaban presentes mucho antes del arribo de Uriburu al poder (Lida y Mauro 2009). También tenían documentados antecedentes los ensayos de los católicos por llevar ideas propias a la arena política, a través de distintos medios, incluida la formación de partidos. En ese sentido la década de 1880 implicó un contexto de claro recorte dentro de la elite dirigente. Las leyes laicas impulsadas por el gobierno de Julio A. Roca significaron el apartamiento de hombres como José Manuel Estrada, Pedro Goyena y Emilio Lamarca, que a partir de entonces pretendieron organizarse por distintos medios, propios de la época, buscando preservar los «derechos» de la Iglesia. La poca centralidad que tuvo la temática religiosa en Argentina como articuladora de identidades políticas permitió que la reconciliación entre las distintas fracciones de los grupos dirigentes fuera rápida e indolora. Como lo ha subrayado Roberto Di Stefano, las elites políticas abrieron un proceso de acercamiento y reconciliación con la Iglesia en función de sus comunes temores frente al avance de la conflictividad social y del cosmopolitismo que acompañaba el crecimiento urbano (Di Stefano 2011). Patria, familia y orden social se convirtieron en pilares en torno a los cuales se edificó una mirada común para enfrentar los desafíos de la modernización. La cuestión nacional y la cuestión social permitieron reencontrarse a católicos y liberales moderados, preocupados por los peligros que se cernían sobre la joven nación.

Ya entrado el siglo XX, en el ocaso de la republica conservadora, los católicos se perfilaron dentro de las fuerzas que buscaban regenerar el sistema político. La incorporación de relevantes figuras del «partido católico» (una entidad que, en forma significativa, nunca había existido) al saenzpeñismo empezó a generar escozor entre los sectores más radicalizados del liberalismo local, aquellos para los cuales la frontera entre lo religioso y lo secular, lejos de flexibilizarse, debía avanzar hacia los terrenos en los que estaban adentrándose las naciones más ilustradas de la tierra (Castro 2008). El cimbronazo ideológico de la Primera Guerra Mundial llegaría a la Argentina con las características mediaciones que se registraban entre la radicalidad del antiguo continente y la moderación de los grupos locales. El proceso de democratización social devenido de la llegada de Hipólito Yrigoyen al poder no pasaría desapercibido para un segmento de la elite política que encontraría en el criollismo y en la antigua fe de los conquistadores españoles un estandarte de identidad para enfrentarse a la «barbarie» de la nuevas masas urbanas. Una generación de hombres y mujeres fueron interpelados por el renacimiento del catolicismo en Francia y en otros países europeos. Bebieron en ese cáliz latino, lo que les permitía enfrentar, dicho sea de paso, la presencia de la cultura norteamericana que despuntaba a través de las nuevas industrias mediáticas. A esto se sumaba la decepcionante travesía de la República Posible a la Verdadera, que comenzaba a ser juzgada por muchos como el fracaso mismo del sistema

democrático y liberal. La Reforma Universitaria de 1918, los conflictos sociales que enfrentaron a patrones y trabajadores entre 1919 y 1922, reforzaron el temor a la disolución social y la esperanza en la religión como un pilar en donde afirmar el orden en peligro (Rapalo 2012; McGee Deutsch 1999). No deja de ser sintomático, sin embargo, que uno de los primeros que esgrimiera una vocación públicamente antidemocrática fuera un poeta anticlerical como Leopoldo Lugones (cfr. Echeverría en este volumen). Esto revela el lugar un tanto accesorio y utilitario que lo religioso ocupaba –y ocuparía– en relación a las definiciones políticas de los grupos que se ubicaron a la derecha del espectro local. Al igual que para Charles Maurras –la figura tutelar del nacionalismo autoritario argentino– la política era *siempre* primero.

En 1922 un grupo de jóvenes, en su mayoría de sectores medios y altos, organizaron los Cursos de Cultura Católica, un ensayo de universidad paralela, en un país en donde el celo por el monopolio estatal de la educación superior había impedido a los católicos tener sus propias casas de estudios. Se trataba de una humilde iniciativa para los años veinte, con poco apoyo por parte de la jerarquía eclesiástica, para la cual las aventuras intelectuales eran siempre riesgosas, y ponían en manos de los laicos una capacidad de intervención en la esfera pública que los obispos preferían reservarse. La década de 1920 estuvo cruzada, a su vez, por el conflicto por la sucesión del Arzobispado de Buenos Aires. El candidato del presidente Alvear, el ascendente Miguel de Andrea, fue vetado por el Vaticano, luego de las exitosas gestiones de los enemigos locales del prelado. Tal enfrentamiento entre el Estado y la Iglesia no podía dejar de vincularse con las repercusiones domésticas de la guerra cristera en México (Meyer 2010). La devoción a la virgen de Guadalupe, acrecentada en esos años, fue fiel reflejo de cómo un mecanismo estrictamente piadoso podía ejercer profundos significados políticos (Lida y Mauro 2009).

En los años de 1930 el despliegue público del catolicismo creció exponencialmente. Este fenómeno acompañó a la urbanización y la dinámica de la sociedad de masas (Lida 2015). La presencia de los católicos en las calles de Buenos Aires, pero también en las grandes y pujantes urbes del interior, implicó en el escenario de los años treinta la acumulación de un capital que distintos actores dentro del campo religioso intentaron instrumentalizar, transformándolo en una influencia efectiva en el campo político. Por supuesto, el vértice institucional de la Iglesia dispuso de mejores herramientas para vectorizar ese capital. Emergía en ese plano la figura del arzobispo y cardenal primado, Santiago Copello, quien ejerció una firme autoridad sobre el clero y las organizaciones laicales que se multiplicaron en esa década. Copello sería recordado por el impulso que brindó a la presencia física de la iglesia a través de la construcción de decenas de parroquias en la Capital Federal. En una década en la que el ejercicio de las jefaturas políticas unipersonales

parecía ser el camino más eficiente y recomendado para jugar un papel en la escena pública, el catolicismo se prestó complacido a construir una imagen de liderazgo de rasgos muy seculares. Tanto en la figura del Papa como en la de los obispos, entre las que se destacaba, por lejos, la de Copello, el catolicismo se autorepresentaba como una masa homogénea que se encolumnaba cuasi naturalmente detrás de sus máximos dirigentes (Bianchi 2002). A la hora de analizar el discurso público de Copello, sin embargo, la proyección de su imagen de jefe es mucho más limitada, y mucho más moderado su ataque a los grupos que el catolicismo había identificado como enemigos. Es sintomático que en sus alocuciones de los años de 1930 fuera tan elíptico a la hora de mencionar al comunismo. Copello hablaba de «propaganda impía», de «materialismo», podía mencionar cómo «el mal se organiza en formas especializadas, escalonadas y jerarquizadas» y por ende debía oponérsele la fuerza de la Acción Católica, con una estructura similar, pero con distintos fines (Copello 1959, pág. 22). Incluso en una rogativa por las víctimas religiosas de la Guerra Civil Española eludió caracterizar a los autores, implorando la intersección de la Virgen María y «su valeroso valimiento para la pacificación de España» (Copello 1959, pág. 74). Esta moderación no era, es de suponer, producto de una convicción ideológica, sino del lugar que ocupaba como jefe de la Iglesia Católica, y por ende de una heterogénea grey.

En esta década, el clero –o al menos un número importante de sacerdotes– ejerció un nuevo tipo de liderazgo. Este se acomodaba a nuevas expectativas sobre su rol en la esfera pública. Desde los años veinte puede observarse la participación de sacerdotes tanto en la prensa periódica como en las calles, arengado e intentando «reconquistar» a las masas para Cristo. Se destaca la figura de Dionisio Napal, que encuadraba bastante bien en la prédica integralista. Para Napal era necesario combatir a los enemigos de la Iglesia convenciendo a la sociedad de los males que representaba el comunismo, el laicismo y también el judaísmo (Lvovich 2003). En la prensa, sacerdotes como Gustavo Franceschi y Julio Meinvielle, o el radiofónico Virgilio Filippo, con estilos muy divergentes, se convirtieron en protagonistas de debates hacia afuera y hacia adentro del campo católico.

Finalmente los laicos se constituyeron en un actor central del catolicismo de la década de 1930. En los años previos la jerarquía llevó adelante un proceso de verticalización para que los católicos que ejercían cierto liderazgo en el campo social y político aceptaran someterse a sus directivas. En los años treinta este proceso se profundizó, aun cuando no fue sencilla la tarea de reducirlos a la unidad subordinándolos. Por supuesto que hablamos de sus grupos dirigentes, hombres y mujeres extraídos de los sectores tradicionales de la sociedad, desacostumbrados a recibir directivas de los sacerdotes, ni de nadie. Tanto la experiencia de la Acción Católica como la de los Cursos de Cultura Católica exhiben el trabajoso camino que recorrió la imposición del

modelo verticalista y sus limitados resultados (Zanca 2014). Los laicos no sólo fueron un segmento difícil de gobernar, sino que al ser interpelados por los conflictos políticos e ideológicos de la década, revelaron cómo el campo católico – que se auto representaba por encima del conflicto político – sería escenario de algunos de sus más encarnizados combates.

Desplegar una nueva estructura organizativa fue un medio indispensable para ganar influencia en la sociedad. Tanto la Acción Católica Argentina (ACA) como los Cursos de Cultura Católica buscaban recuadrar a un variopinto grupo de hombres, mujeres, jóvenes y niños vinculados a la cultura religiosa, desde intelectuales a odontólogos, pasando por artistas plásticos, médicos, abogados y arquitectos. Nadie debía quedar fuera de este encuadramiento. El crecimiento de las organizaciones del laicado fue exponencial en los trece años que van desde 1930 a 1943. El número de afiliados en las cuatro ramas de la Acción Católica (varones, mujeres, jóvenes y adultos) en 1932 era de aproximadamente unos 20 mil y trepó a los 60 mil en 1943 (Acha 2010). Las parroquias de la ciudad de Buenos Aires se triplicaron en la década, y pasaron de 40 a 119 entre 1928 y 1945 (Lida 2015, pág. 136). La Asociación de Niños de la Acción Católica Argentina pasó de contar con 2.500 afiliados en 1936 a duplicar esa cifra para 1940 (Rubinzal y Zanca 2015).

Si de ganar influencia se trataba, en las organizaciones laicas existía clara conciencia – mucho antes de la década del treinta – de la necesidad de adaptar el discurso a las demandas de la sociedad de masas. Esto implicaba que debía transformarse su contenido, orientándose a las necesidades de sectores postergados y marginados en la década de 1930, y que debía variar su forma. Como han señalado los más agudos análisis sobre la cultura católica de la década, la discursividad de las organizaciones del laicado se relajó, se volvió más juvenil, se adaptó a la sociedad de masas y a las voces de sus hombres y mujeres *grises*: incorporó términos de la calle, del lunfardo, buscó llamar la atención, se *plebeyizó* (Lida 2015). Esto no dejó de causar escozor entre muchos intelectuales católicos que creían que la división entre la alta y la baja cultura seguía vigente y le otorgaba a la Iglesia un rol civilizador. Véase, como ejemplo, el papel que le cupo al destacado intelectual católico Gustavo Franceschi en la censura y modificación de las letras del tango en la década de 1940 (Yeager 1997, pág. 73).

Finalmente, en una decenio marcado por una cultura de masas acriollada, la Iglesia debió también recurrir a elementos telúricos para integrase y ganar influencia social. En primer lugar, reinsertando su papel en la historia nacional, reescribiendo su participación en el proceso revolucionario e independentista del siglo XIX. Luego, nacionalizando su discurso, acriollando los apellidos de sus sacerdotes, incentivando las vocaciones de un clero argentino, y apelando a una conformación que tendría un sentido político particular en esta década: la superposición del nativismo y el exclusivismo

religioso. Ser católico era sinónimo de ser argentino. ¿Era esta una prerrogativa de los católicos? Claramente no, se trataba de una forma de interpelación extendida en el campo político, en la que la condición de enemigo poco a poco se fue trasladando a la condición de extranjero (Cattaruzza y Eujanian 2003). La izquierda también había apelado al nacionalismo, denunciando la condición «foránea» de los católicos para impugnar su participación pública (Justo 1934; Mauro 2010). Las polémicas de la década se dieron entre contendientes que hablaban la misma lengua. Los católicos, sin embargo, vivieron sus propios enfrentamientos a medida que coronaban su exitoso despliegue público.

3.2 De la unidad al conflicto

El crecimiento de las organizaciones católicas a principios de los años de 1930 generó ambiciosas expectativas en la jerarquía eclesiástica. Su efectividad como fuerza política estaría dada, suponían, por su unidad doctrinaria y el respeto a sus líderes «naturales»: el Papa y los obispos. Sin embargo, el éxito de su crecimiento –a través del uso de instrumentos modernos, como la prensa periódica de masas, el cine o la radio– tuvo consecuencias inesperadas. Entre otras, la introyección de conflictos de la esfera política en el campo religioso. Se podrían señalar así un conjunto de categorías que segmentaron al catolicismo en diversas «familias». Este sería, sin embargo, un camino un tanto engañoso, en virtud de la fluidez de sus posiciones y de la multitud de tensiones que recorrían el campo. Resulta más ajustado describir las líneas de corte del catolicismo de la época, aquellos meridianos que dividían a un conjunto que gustaba de percibirse unido, homogéneo y vertical, para mostrar por dónde pasaban sus puntos de ruptura. Podemos mencionar tres grandes ejes: el problema político, el problema social y el problema cultural. En el primero se agruparon los debates en torno al sistema de gobierno, atendiendo a la crisis del liberalismo, que tenía en la Iglesia uno de sus más acérrimos enemigos. Liberalismo, democracia y libertad ¿eran sinónimos en el mundo católico? Sin duda para algunos lo eran, pero una buena parte del debate que se produjo en la segunda mitad de la década de 1930 estuvo estrechamente vinculado a la definición y distinción de estos términos, a la condena de algunos y a la identificación con otros. El segundo eje dividió a los católicos en torno a la percepción de las condiciones socioeconómicas de los sectores populares urbanos –y en menor medida rurales– en el contexto de la transformación económica de la década. Allí las soluciones de la doctrina social de la Iglesia –un conjunto poco vertebrado y heterogéneo de ideas– pretendían competir con las asentadas tradiciones de izquierda. A pesar de su debilidad, y como lo ha señalado Lila Caimari, era una de las pocas ideologías sociales claras e identificables que podían presentarse como

alternativas al capitalismo y al comunismo (Caimari 1995). Finalmente la dimensión cultural segmentaba el campo religioso de una particular forma: el avance de la sociedad de masas interpelaba a las elites intelectuales, trazando una línea de partición que no necesariamente coincidía con las otras. En esta última podemos incluir una dimensión de género en los clivajes: ¿era la religión una manifestación «femenina»? ¿La iglesia era sólo «para mujeres, chicos y viejos» como afirmaba el Gauna de Bioy Casares?

Desde fines de la década de 1920, y como lo ha señalado en forma reiterada la bibliografía, fue patente la «afinidad electiva» entre catolicismo y nacionalismo (Zanatta 2015; Löwy 2004; cfr. Echeverría en este volumen). Más allá del plano ideológico, en el que ambos confluían en un común antiliberalismo, muchos ámbitos de sociabilidad –por ejemplo, los Cursos de Cultura Católica– y de sus figuras dirigentes se superpusieron. No debería soslayarse, sin embargo, que la distinción entre lo político y lo religioso nunca estuvo ausente del horizonte en el que se pensaban los actores en los años treinta y cuarenta. Si bien los grupos nacionalistas –incluso los más radicalizados– no dejaban de reivindicar al catolicismo como una fuente de legitimidad ineludible para la elaboración de su crítica al Estado liberal y para su proyecto de sociedad futura, el papel que efectivamente le otorgaban a la «piedad religiosa» era bastante marginal. Basta recorrer la páginas de algunos de los más reputados periódicos nacionalistas de la década de 1930 –por caso, *Crisol*– para ver que prácticamente las festividades religiosas no eran un motivo para cambiar la diagramación del periódico u otorgarle a las celebraciones un papel destacado en sus páginas. Algunos grupos intentaron pensar las categorías de la política desde la tradición evangélica, cuando para otros, la política tenía su propia lógica, y en términos claramente maurrasianos, se independizaba de los mandatos religiosos. La distinción entre nacionalistas *católicos* y católicos *nacionalistas* es pertinente para ubicar el lugar que los distintos grupos políticos le daban a lo religioso en la construcción de sus programas (Mallimaci y Cucchetti 2011).

El período que separa los golpes de Estado de 1930 y 1943 estuvo marcado por un catolicismo activo y público, con capacidad de definir los aspectos que podía vetar de la política gubernamental, pero con grandes dificultades para traducir su apoyo callejero y organizativo en un proyecto político concreto. En 1930 la mayoría de las voces del catolicismo se manifestaron a favor del golpe de Estado que terminó con la segunda presidencia de Hipólito Yrigoyen, en concurrencia con sectores de diferente origen ideológico y político. La revista *Criterio* se convirtió en esos años en un escenario de los debates políticos ideológicos de la década. Desde 1932 estaba gobernada por Gustavo Franceschi, la figura intelectual más relevante de entreguerras, que operaba como un articulador de un campo profundamente dividido, a través de una prédica que pretendía, ante todo, hablar en nombre de la Iglesia, pero a su vez contener los argumentos de las distintas

vertientes con las que se fue identificando el catolicismo (nacionalismo, socialcristianismo, humanismo cristiano). Desde una perspectiva tomista, Franceschi pretendió mostrar cómo el catolicismo podía ser el punto medio entre las alternativas ideológicas de la década (Ivereigh 1994; Lida 2002; Zanca 2013). Desde el punto de vista cultural, Franceschi sentía un profundo desprecio por las manifestaciones de la «barbarie» urbana, identificada con un amplio abanico de males que iban desde el antisemitismo antievangélico del nazismo, hasta la desfachatez de la cultura popular, en las novelas, la radio y el cine de masas.

El horizonte político del catolicismo estuvo particularmente internacionalizado. Tanto la crisis del liberalismo, el ascenso de los fascismos como la consolidación del comunismo en la URSS fueron leídas por los católicos como la confirmación de que era necesaria una postura propia para enfrentar a los grandes sistemas ideológicos en danza en el mundo. Si otros grupos estaban mucho más concentrados en las dimensiones locales de la política, el catolicismo parece haberle conferido un tono «universal» al debate público. El ascenso de las derechas europeas ilusionó a muchos católicos nacionalistas que veían en este avance la desaparición de los «errores» de la sociedad liberal y laica. El comunismo aparecía como un enemigo perfecto que podía justificar el apoyo, por parte de laicos y sacerdotes, a tan radicales aventuras. Esa misma agenda de preocupaciones generó la reacción en otros segmentos del catolicismo: temor frente a la «derechización» del catolicismo local y el alejamiento de los trabajadores, y la reivindicación de los valores que el liberalismo le había aportado a Occidente. Rafael Pividal, en su traducción de *Tres Reformadores* de Jacques Maritain, señalaba que «… un nuevo orden humano, aunque fuera el "orden latino" al que aspira Maurras, no puede bastar. Es inútil salir de un naturalismo liberal para caer en un naturalismo autoritario, como nos dan algún ejemplo los flamantes regímenes de Europa» (Maritain 1933, pág. 15). Por su parte, Tomás Amadeo rechazaba por impropio el «falso dilema» de elegir entre el fascismo y el bolchevismo (Amadeo 1939). Sobre el comunismo la postura de las diferentes familias del catolicismo era de similar rechazo; podían cambiar las consideraciones, entre aquellos que creían que su existencia estaba justificada por lo despiadado del régimen capitalista, y quienes sin entrar en tales consideraciones, lo suponían intrínsecamente malo y capaz de rebelar a los trabajadores contra sus justos amos (Meinvielle 1936).

La distancia que separaba al catolicismo de los modelos político-ideológicos enfrentados en la década de 1930 no debería llevarnos a suponer que se trataba de un mero movimiento «reactivo», ni que su horizonte fuera, sencillamente, la construcción de una «contrarrevolución». Como ha señalado Miranda Lida, respecto de la cuestión social el catolicismo vivió en poco tiempo una transformación profunda. De una postura oscilante entre las respuestas tradicionales (caritativas) y una muy tímida apelación a la inter-

vención pública, pasaría a sostener la necesidad de la instrumentalización del Estado como árbitro de la lucha de clases (Lida 2015, pág. 164).

EI Congreso Eucarístico Internacional fue un punto de ruptura en la politización del catolicismo argentino. La reunión escenificó su carácter masivo. Las imágenes de 1934 movilizaron las voluntades participativas de los católicos, que siguieron expandiendo su sistema de organizaciones a lo largo de la década, llegando a su cenit hacia los años de 1940. Dada las – hasta ese momento – humildes dimensiones institucionales de la Iglesia Católica, e incluso de los núcleos más importantes de la dirigencia laica, tal movilización no dejaba de generar vértigo en algunos de sus miembros. Tomás Casares, director de los Cursos de Cultura Católica, le confesaba a Maritain en 1936: «… este es un momento decisivo para los católicos jóvenes argentinos que tienen vocación intelectual. La responsabilidad que ha dejado sobre nuestras espaldas el Congreso Eucarístico es abrumadora y se trata de asumirla con la mayor lucidez posible».[3]

La presencia pública de varones en las ceremonias del Congreso fue un rasgo original. En términos del liberalismo secularista lo religioso estaba circunscripto a la esfera de lo doméstico, y por ende a lo femenino o a ciertos grupos etarios asimilables (niños y ancianos). Los varones, portadores de la representación del ciudadano moderno, debían ingresar a la esfera pública liberados de sus marcas particulares, en especial la religiosa, una insignia de atraso y dependencia. La autonomía masculina se construía en oposición a los sujetos sociales que, por su «debilidad intrínseca» (mujeres, niños, ancianos) estaba limitados en el ejercicio de sus derechos políticos. La presencia masiva de hombres en el Congreso iba a contracorriente de esta imagen, construida al calor del desarrollo de la familia burguesa moderna. Esta masculinización de la devoción fue balanceada por el crecimiento de las organizaciones católicas femeninas. Su presencia en las manifestaciones – al igual que otras formas en que las mujeres ocuparon el espacio público – permite concluir que el catolicismo fue una vía para la construcción de formas de ciudadanía política previas a la obtención de sus derechos electorales. Las organizaciones católicas femeninas parecen haber funcionado como plataformas educativas para el ejercicio de los derechos en una – futura e imaginada – república de ciudadanos cristianos.

Si bien la masividad de la presencia pública de lo religioso era un dato insoslayable de la política de los años treinta, no fue tan clara su transformación en un programa efectivo de reformas para modificar, por ejemplo, las pautas del «pacto laico» argentino. El despliegue de las masas católicas no parece haber impedido, por ejemplo, que el electorado de la ciudad de Buenos Aires consagrara en los comicios para concejales del 4 de marzo

3.– Casares a Maritain, 13 de marzo de 1935, *Cercle d'études Jacques-et-Raïssa-Maritain*.

de 1934 nada menos que al Partido Socialista como primera fuerza, uno de los más consecuentes en su proyecto de laicización de las instituciones. Si bien el socialismo perdió su hegemonía en el Consejo Deliberante luego del levantamiento de la abstención de la Unión Cívica Radical en 1935, en las elecciones de 1936 siguió manteniendo un expectante segundo lugar (De Privitellio 2003). Una de las atribuciones que desarrolló el catolicismo de los años treinta fue la de convertirse en un actor ineludible del campo político, más allá de sus capacidades reales. Conservó un poder de veto sobre ciertos aspectos (divorcio, separación de la Iglesia y el Estado) pero no logró, por lo menos en esa década, avanzar mucho más allá de la incorporación de la educación religiosa a las legislaciones provinciales de algunos distritos. Todavía en 1934, días antes del Congreso Eucarístico Internacional, el Consejo Nacional de Educación festejó con un gran desfile de alumnos frente al monumento a Mitre el cincuentenario de la ley de educación 1420, un ícono del laicismo.[4]

La pregunta sobre la relación entre fascismo y catolicismo ejerció un lugar central en los debates y adquirió un tono urgente con la Guerra Civil Española (1936-1939) y la Segunda Guerra Mundial (1939-1945). El marco de estas discusiones, al calor de la violencia desatada en Europa, sirvió para vehiculizar una novedosa teología política. La visita, a fines de 1936, del filósofo tomista Jacques Maritain, tuvo una honda repercusión dentro y fuera del campo católico. El filósofo francés, figura tutelar de los jóvenes católicos nacionalistas, brindó una serie de conferencias organizadas por los Cursos de Cultura Católica y dictó charlas en Rosario y Córdoba. La postura de Maritain respecto de la situación política en la península ibérica era de una neutralidad incomprensible para los católicos nacionalistas, para los cuales no cabía duda de que el bando de Franco llevaba la razón y la fe de su lado.

Meses antes de su arribo a Buenos Aires, Maritain había dictado una conferencia en Santander que se convertiría en una piedra basal de su filosofía política, y se editaría bajo el título de *Humanismo Integral*. Este nuevo credo de los católicos antifascistas –identificados con el humanismo cristiano– denunciaba las falencias del orden liberal –su individualismo y materialismo– sin proponer una salida reaccionaria o tradicionalista, sino un nuevo tipo de sociedad «inspirada» en los valores cristianos. Esta propuesta fue apropiada por distintos segmentos del catolicismo europeo y sudamericano, y terminaría convirtiéndose en el programa de los movimientos demócrata cristianos de los años cuarenta y de la segunda posguerra (Compagnon y Mayeur 2003; Zanca 2013).

4.– «Resultó grandioso el homenaje de las E. de adultos a la ley de educación», *Noticias gráficas*, 08/07/1934, pág. 1.

Durante los casi dos meses que duró su estadía en Argentina, Maritain protagonizó una serie de gestos que evidenciaban la emergencia de una nueva sensibilidad, que abriría una profunda grieta en el catolicismo. En la reunión del PEN Club – que se llevó adelante en esos días en Buenos Aires – se sumó a las condenas de los escritores franceses, ingleses y alemanes exiliados a los regímenes racistas. En las conferencias dictadas en el marco de los Cursos de Cultura Católica destacó los valores positivos de la modernidad, en especial, la conciencia de los derechos individuales. Finalmente aceptó la invitación para dictar una charla sobre el antisemitismo en la Asociación Hebraica de Buenos Aires, lo que colmó la paciencia de sus huéspedes nacionalistas. La prensa más radicalizada cargó contra Maritain, desde las mismas páginas que había celebrado su arribo. La polémica se extendió a *Criterio* que se convirtió en el escenario de un extenso debate en el que participaron figuras del catolicismo local y donde el mismo Maritain escribió sus réplicas. El centro de la discusión era el papel que los católicos, carentes de un programa político propio, debían jugar respecto de las organizaciones fascistas. Eso incluía, en forma urgente, el caso español. Los católicos nacionalistas sostenían que, si efectivamente las críticas al liberalismo y al Estado «ateo» que este había creado a fines del siglo XIX eran legítimas, también era legitimo emplear todas las herramientas disponibles para derrotarlo. Eso habilitaba la colaboración con las fuerzas de la nueva derecha europea, que eran, en palabras del joven sacerdote Julio Meinvielle, una fuerza, como un martillo o una piedra. Luego le correspondería al catolicismo domar a ese potro desbocado que sería un instrumento útil para destruir, y se vería si seguiría siendo funcional a la hora de construir una sociedad integralmente cristiana (Zanca 2013).

Los cuestionamientos al liberalismo tenían una traducción más pedestre en el ámbito de la política local. Las situaciones provinciales fueron escenarios de un clima de radicalidad, en las que los católicos intervinieron, en especial, en torno al laicismo escolar. En el caso de Santa Fe, la gobernación demo progresista de Luciano Molinas impulsó una ley de educación neutralista en materia religiosa, lo cual reactivó al movimiento católico en su contra. El experimento terminó con la intervención federal de 1935, la restitución de la Constitución provincial de 1900 y la ley de educación de 1886 (Mauro 2010). En Córdoba, el arribo a la gobernación de Amadeo Sabattini fue tomado con hostilidad por los católicos, que denunciaban su tolerancia frente el comunismo y las actividades de grupos anticlericales. A diferencia de estos dos casos, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Manuel Fresco, concitó las expectativas de muchos católicos que veían en sus políticas centradas en la familia y la religión la transformación de un conservadurismo de carácter laicista en un socialcristianismo «popular». Su difuso programa social católico parecía cristalizar en políticas económicas, sociales y educativas, aun cuando representaba, para los grupos demócrata

cristianos, un ejemplo de una peligrosa derecha, y para los católicos nacionalistas un hombre del antiguo régimen, reconvertido por el cambio de clima ideológico.

El estallido de la Segunda Guerra Mundial –y la consecuente crisis final de la *República Imposible*– profundizó la división del catolicismo local. Los católicos antifascistas se perfilaron dentro del laicado, generando medios de difusión propios desde los cuales elaboraron, no con pocas dificultades, un discurso político alternativo. A partir de 1941 comenzó a editarse el quincenario *Orden Cristiano*, representativo de este sector que se dedicaría a defender la posición de los Aliados en la guerra y a acusar de anticristianos a los grupos nacionalistas. A diferencia de otros grupos, los católicos usaban su cristianismo como un medio para legitimar su postura pública. Un antifascismo cristiano, en el que se anteponía la adscripción religiosa al posicionamiento político (Zanca 2013, 2014).

Los vínculos entre teología y política se exacerbaron durante la Segunda Guerra. El trasfondo del debate católico se establecía en diálogo con la tradición evangélica y con el magisterio eclesiástico. Esa polémica, que terminaría dividiendo al catolicismo en forma casi permanente, estaba centrada tanto en la imaginada sociedad en la que Cristo sería restaurado, como en los procedimientos que debían emplearse para conseguirla. En este segundo aspecto, los humanistas cristianos se formulaban una pregunta característica de la tradición liberal. Si para los católicos nacionalistas todos los medios eran legítimos para destronar al liberalismo –incluso, y privilegiadamente, la fusión de la espada y la cruz, como un epítome de la alianza entre el Ejército y la Iglesia– los humanistas cristianos creían que el liberalismo, a pesar de sus yerros, le daba al cristianismo las vías para regenerarse. La política internacional dividía a los católicos, y el sueño de unidad que acarició la jerarquía en 1934, necesario para restaurar la cristiandad, parecía desvanecerse. La Revolución del 4 de junio de 1943, que llevaría a muchos destacados militantes e intelectuales católicos en una forma inusitada al control del Estado, no haría más que profundizar esas diversas formas de entender al catolicismo.

3.3 Reflexiones finales

En la Argentina de los años 1930 el catolicismo apareció como un movimiento de presencia pública y evidente influencia política. El prestigio social alcanzado por la Iglesia y los católicos pudo obedecer a muy distintos factores: a su discurso integrador en lo social en un contexto de crisis ideológica; a su organización y despliegue público en un período de temor frente al avance de las organizaciones obreras; a su imagen preservada en un contexto de crisis de las tradicionales élites políticas. Su situación, sin embargo, no fue demasiado diferente de otras instituciones de la sociedad

civil y su relación con el Estado y la sociedad política. Este aspecto fue largamente debatido en las ciencias sociales en Argentina, al menos a partir de su refundación en los años de 1980. Las iniciales preguntas sobre la entreguerras se interrogaban sobre las combinaciones y los esquemas que habrían dado lugar a la conformación de una «Argentina autoritaria». Los trabajos pioneros ubicaban a grupos corporativos mediando las relaciones entre la sociedad civil y el Estado, y ocluyendo el papel de los partidos políticos (Ansaldi 2000). El peso de las corporaciones habría limitado el desarrollo de una ciudadanía plena, sustituida por formas autoritarias de relación. Los trabajos más recientes han matizado esta mirada, señalando que ambas formas de representación podían convivir y ser compatibles con un régimen de ciudadanía plena (Piglia 2014). El caso del catolicismo y sus organizaciones puede ser reconsiderado en esta nueva perspectiva. Si bien la Iglesia era una institución de carácter público, con relaciones privilegiadas con el Estado, y su peso parainstitucional cuasi monopólico, en los años treinta se sumó a una cadena de corporaciones que se propusieron como representantes de la sociedad y mediaron efectivamente entre las demandas sociales y el Estado.

Esta perspectiva para analizar las relaciones entre política y religión nos permitiría tomar distancia de dos presupuestos en exceso generalistas. Aquel que supone un «ideal» secularista; y el otro que, en oposición, supone que la autonomía (incluso relativa) de los campos es un mito liberal. Para el primer enfoque toda presencia de lo religioso en la esfera pública implica necesariamente un retroceso civilizatorio. Suponiendo que la sociedad tiende en forma evolutiva hacia un esquema «secularizado», el catolicismo es un factor que le resta autonomía a la política e induce comportamientos irracionales, reduce las complejas relaciones a un esquema binario de santos y pecadores, y se hace eco de mandatos que exceden el acuerdo propio del *Novus Ordo Seclorum* (Zanatta 2015). Por el contrario, una lectura «estructural», en parte nihilista respecto del concepto de secularización, sostiene que las matrices de comportamiento político y religioso tienden a encontrarse y a perpetuarse, en un esquema de relaciones que poco habría cambiado a lo largo del siglo XX. La idea de un catolicismo *integralista*, intransigente, social y romano está en el centro de esta lectura que invisibiliza los procesos de cambio y los matices (Mallimaci 2015).

Desde una perspectiva histórica, la religión, en ciertos contextos, puede ser el vehículo que moviliza descontentos sociales y políticos que no encuentran otras vías de expresión pública. Canalizando demandas sociales insatisfechas, el catolicismo de los años treinta dio lugar a reclamos sociales de una mayor integración social frente a las amenazas del obrerismo clasista. Vectorizó, por otro lado, un discurso nacionalista que guardaba un rasgo supranacional – en oposición al cosmopolitismo – característico de la cultura católica. El hecho de presentarse como una organización

espiritual hacía confluir su prédica con los discursos antimaterialistas del inconformismo de los años treinta. Una tradición que tenía varias décadas cuestionaba la avidez de las elites, que si bien hacían girar la rueda de los negocios y garantizaban el fenomenal desarrollo «hacia adentro» de la década, eran presentadas como una casta guiada sólo por sus intereses materiales. El espíritu anti burgués del discurso de algunos sacerdotes, como el de Gustavo Franceschi, fue bastante prototípico de esa percepción (Franceschi 1940). Como señalábamos en la introducción, sin embargo, la capacidad de acceso a las masas estuvo mediada por la cultura, que como interfaz para la difusión de la religión era una realidad con la cual el catolicismo debió negociar. Imaginar que la relación entre catolicismo y política en los años treinta se definió exclusivamente por el rechazo a la cultura moderna implica subestimar sus características más complejas. Los años que van del derrocamiento de Hipólito Yrigoyen a la caída de Ramón Castillo fueron testigos del cambio en la percepción social de lo religioso: el catolicismo triunfó discursivamente y pudo incorporarse como un factor «civilizador». La explicación más plausible de su éxito está dada por que, más allá de oponerse a sus principios, se articuló en forma eficiente con muchos de los valores de la «Argentina liberal», ejerciendo un papel nacionalizador e integrador al igual que otras instituciones de la época.

Una larga prédica y acciones por parte de la jerarquía católica, sacerdotes y laicos, lograron asentar socialmente la idea de que el catolicismo era una piedra fundante de la nacionalidad. Si eso era un mito o no, deja de ser relevante a la hora de interrogarnos sobre qué apropiaciones hicieron distintos actores de ese relato. No cabe duda que esta circunstancia le dio a la jerarquía católica una inusual capacidad para desplegarse como actor político. Sin embargo, el crecimiento cuantitativo de su presencia pública no le otorgó un control muy claro sobre los sentidos de esa movilización, ni siquiera sobre las interpretaciones que su propia grey hacía de la realidad política. Por el contrario, parece haber introyectado muchos de los conflictos propios de la esfera secular.

La capacidad de la jerarquía para jugar como un actor político estuvo limitada por su habilidad para controlar las inclinaciones políticas de los laicos. Si la historiografía se ha centrado en las coincidencias entre catolicismo y nacionalismo, se ha detenido poco en las estrategias discursivas de los obispos y del Papa para ser consecuentes con una imagen que la misma jerarquía buscaba proyectar: la de poder cumplir el papel de un juez imparcial frente a una sociedad «necesitada» de reglas.

El discurso antimodernista, que reclamaba volver a una edad dorada –la medieval– en la que regía la cristiandad, chocaba con la profunda modernización organizativa que vivió el catolicismo en esos años. A medida que la estructura de la Iglesia (incluyendo a las organizaciones laicales) se hacía más compleja, se mostraban sus facetas más modernas, es decir,

su apertura a las innovaciones. Si las organizaciones católicas en los años treinta han sido leídas como un retroceso de la democracia y la laicidad frente al avance de lo religioso, no debería olvidarse que las formaciones laicas fueron también una particular escuela de ciudadanía, que enseñaron a sus militantes – hombres, mujeres, adolescentes y niños – una vía de participación pública y de relación con el Estado. Esta dimensión, que ha sido señalada para la explosiva sociabilidad del siglo XIX, es posible encontrarla en las prácticas de las organizaciones del laicado del siglo XX (Sabato 1999). Se ha subrayado, en diversos trabajos, el peso que tuvo el catolicismo en su carácter de formador de «cuadros políticos», un medio para «reconquistar la sociedad para Cristo» (Cucchetti 2010). Las formaciones católicas, sin embargo, se convirtieron en organizaciones de masas, en cuyo seno los participantes aprendieron a encuadrarse, a participar y competir por su dirección, a ser parte de la esfera pública y a pugnar con otras organizaciones por la influencia social. Pero para que eso fuera posible, fue necesario que tales estructuras redefinieran su rol social. Ahora debían reconquistar a la sociedad para Cristo, denunciar y combatir a sus enemigos, y acercar a más y más almas a la Iglesia. Fines todos terrenales y seculares, dada la estricta separación de funciones propias del catolicismo. Los católicos desplegaron tareas que justificaban su existencia como organizaciones públicas, en un escenario en el que la sociedad no parecía dispuesta a aceptar sólo las antiguas y tradicionales funciones salvíficas del clero.

Capítulo 4

La derecha nacionalista. Decepciones políticas e influjos culturales

Olga Echeverría

.....

4.1 La constitución de un actor político: la derecha nacionalista en el escenario político argentino

En una república escasamente republicana (Herrero 2011), con un Poder Ejecutivo fuerte y centralizado que dejaba poco margen de maniobra a los partidos de oposición y a las demandas provinciales (Botana 1997), el liberalismo argentino realmente existente fue mucho más conservador que lo que se convenía. Con el ingreso de la Argentina al mercado capitalista internacional y sus lógicas, algunos hombres de las elites, atemorizados, comenzaron a consolidar la idea de que eran las «minorías espirituales superiores» las que daban carácter a un pueblo y no las mayorías, y que en ellas debía recaer la dirección moral y política de la nación.[1] Así, el concepto nación escudaba un proyecto homogeneizador, elitista, que ocultaba más de lo que evidenciaba sobre las características y objetivos de un modo político-ideológico y cultural que reinventaba, con nostalgia, el orden y la disciplina de antaño y se oponía a un presente desmoralizado e irrespetuoso del orden y el estatus social y político (Echeverría 2013, págs. 49-50).

Esas élites se fueron reconvirtiendo, en contraposición a los inmigrantes y las clases subalternas nativas, y comenzaron a presentarse bajo la denominación de «clase patricia» (Torre 2010), para buscar reaseguros del poder y comenzar a darle forma a un nacionalismo cultural, con el que pretendían fijar una supuesta identidad argentina auténtica que se expresaba a tra-

1.– En este sentido, tampoco puede desconocerse la crisis de conciencia que atravesaba al mundo occidental y que hacía que sus intelectuales y sectores sociales más amplios se sintieran atemorizados, al borde de un cataclismo.

vés de una conjunción de clasismo, xenofobia, nacionalismo y pretendida aristocracia.

Con la implantación de la democracia de voto universal masculino y el fracaso del partido conservador orgánico y programático, politizaron la perspectiva anti igualitarista y antidemocrática, mediante un diagnóstico violentamente lúgubre del presente y la participación política de las mayorías, temible fermento de una Argentina indisciplinada que abría una movilidad social atentatoria contra los que «habían hecho la patria».

El triunfo de la Unión Cívica Radical (en adelante UCR) tras la reforma electoral azuzó los temores. Y si bien el gobierno de Yrigoyen no trastocó profundamente la estructura social y los destinos de la Argentina (Persello 2007), su sola presencia, la apertura de la burocracia estatal y la política a sectores medios, y la constitución de una incipiente intelectualidad no legitimada por el origen de clase, generaron un fuerte desasosiego que hacía crecer el desprecio por los advenedizos. Pronto surgieron cuestionamientos a las formas de ocupación del Estado y acusaciones de corrupción, mediocridad e ineficacia. Se cuestionaba la ineptitud para resolver el problema obrero y frenar el avance comunista.

En ese clima, en 1919 surgió la Liga Patriótica Argentina, grupo paramilitar y expresión claramente derechista, integrado por los jóvenes hijos de las élites (Caterina 1995; McGee Deutsch 2003) que amedrentaban a obreros, «rojos» y judíos, con el fin de evitar que la civilización argentina se malograse por la acción del extranjerismo sectario (Ospital 1994).

Desde sus inicios, la derecha emergente ligaba la nación con la fe católica, el honor de las clases superiores y la defensa de las tradiciones y jerarquías.[2] Es interesante señalar que tanto en la Liga como en otros agrupamientos políticos e ideológicos que iban surgiendo, se aglutinaban liberales, conservadores y clericales, lo que indica que la coyuntura política polarizaba a las fuerzas sociales en pugna y también demostraba la homogenización y alianza de los sectores patronales ante lo que percibían como una amenaza (Avner 2006, pág. 58). Junto al accionar de la Liga se fueron formando grupos políticos e ideológicos dispuestos a fomentar postulados antidemocráticos, antiplebeyos (Devoto 2002), antifemeninos (McGee Deutsch 2003; Echeverría 2005), antisemitas (Lvovich 2003) y conspirativos (Bohoslavsky 2009) que estimulaban la elaboración y difusión de pensamientos que propugnaban la instalación de gobiernos militaristas, autoritarios y anti igualitaristas. En ese sentido, las conferencias que brindó Leopoldo Lugones en 1923, patrocinado por la Liga Patriótica junto al Círculo Tradición Argentina, marcaron un momento fundacional de la derecha argentina, donde ya se puede advertir una fuerte presencia del militarismo como paradigma político (Navarro Gerassi 1968).

2.– *La Nación*, 16/01/1919.

Con ese ánimo y antes de la segunda victoria electoral de Yrigoyen, publicaciones surgidas para la campaña destituyente (*La Nueva República* y la católica *Criterio*), el accionar violento de los jóvenes anticomunistas, organizados en La Liga Republicana, dirigidos por Roberto de Laferrère, y algunos intelectuales insertos en la escena pública y política, ponían en palabras y hechos la reacción antidemocrática que superaba ampliamente el rechazo al yrigoyenismo, e instalaba la idea de una «revolución necesaria que las fuerzas armadas debían llevar adelante» (F. Ibarguren 1969, pág. 23). Así, con fuerte impronta intelectual y articulación laxa, se fue conformando una derecha plural, multiforme, pero unificada por un fuerte elitismo y el descontento profundo ante un orden que entendían llevaba a la ruptura de las jerarquías naturales (Rock 1993; Buchrucker 1987). En ella convivieron perspectivas militaristas, conservadoras, modernizadoras, corporativistas, hispano católicas y nacionalistas (Echeverría 2009) que se unificaban ante el imperativo de poner fin al «gobierno de los inferiores». Según Zuleta Álvarez, en ese colectivo híbrido, el «nacionalismo» aportaba una actitud política sistemática y doctrinaria con capacidad organizativa (Zuleta Álvarez 1975).

4.2 La construcción del golpe de Estado y las contribuciones de la derecha de proyección nacionalista

Desde antes que Yrigoyen asumiera su segunda presidencia ya estaba en marcha la campaña para destituirlo. El objetivo golpista aglutinó a diferentes tendencias políticas e ideológicas y, por ende, a diferentes proyectos que se exteriorizaron en la organización del golpe de Estado. Incluso dentro del campo nacionalista, que prefiero denominar como derecha nacionalista, la diversidad era elocuente. Aquellos que surgían de tradiciones conservadoras, aportaron su perspectiva tradicionalista y antiplebeya, aunque presentaban innovaciones dentro del conservadurismo ya que, inicialmente, en busca de legitimidad y consenso, propusieron aplicar políticas sociales de raíz católica, que propendieran a la paz y al orden, pero ante el avance de la democracia impulsaron el quiebre del sistema. Este grupo, ejemplificado principalmente por Carlos Ibarguren, proporcionó al «nacionalismo» representaciones del interior y del pasado como expresiones del genuino espíritu argentino y únicas defensas de la nación para repeler el desborde y caos del cosmopolitismo (Kozel 2008; Echeverría 2009). Sin duda, era el fragmento «nacionalista» con más contactos políticos e ideológicos y con mayor voluntad de establecer alianzas a lo largo de la década dominada por los conservadores.

Otra expresión nacional-derechista, surgida al calor de la conspiración antidemocrática, fue la que emergió del grupo de jóvenes escritores que fundaron en 1927 *La Nueva República*, tanto una publicación política como una organización con pretensiones de poder. Encabezados por los her-

manos Rodolfo y Julio Irazusta, Juan Carulla, César Pico y Ernesto Palacio, tenían vínculos ciertos con el catolicismo y una relación contradictoria con el liberal-conservadurismo (cfr. Zanca en este volumen). Afincaban su identidad en su condición generacional (en su mayoría habían nacido con el siglo XX), con ungida verdad y porte para resolver los errores de las generaciones pasadas (Palacio, LNR 1927: 2). Sus manifestaciones políticas y culturales respondían a lo que percibían como una amenaza del «país real» que comenzaba a penetrar en el reducto del país legal y político. Cuestionaban los excesos secularizadores y la abusiva tolerancia hacia las ideologías «desintegradoras», reclamando volver media página de la historia atrás y construir una República aristocrática, camino que había sido desviado por la democracia yrigoyenista, un sistema de revancha y rencor, indigno e imperfecto, contrario a la moral cristiana, que no reconocía la superioridad de la posición y la cultura. Esta derecha, de laxa inspiración maurrasiana y burkeana (Devoto y Barbero 1983; Mutsuki 2004), declaradamente republicana en tanto antipopular, sostenía que la democracia no estaba inscripta ni en la historia ni en la Constitución Argentina (Irazusta, R., LNR 1928: 1).

Estos grupos y figuras habían crecido (no sin conflictos) alrededor del activo poeta Leopoldo Lugones, precoz y muy celebrado autoritario.[3] Formado en la vanguardia modernista, pregonaba las virtudes de la rebeldía contra el materialismo asfixiante del mediocre mundo burgués. Se presentaba a sí mismo como un cruzado ético, político y cultural y exponía un ánimo beligerante y jerárquico (una posición basada en el talento y el saber más que en la clase) para constituir una comunidad superior. Fue asociando paulatinamente el ideario del hombre fuerte con la posesión de las armas y el despliegue de heroísmo y valentía viril. Con escenográfica vehemencia y severidad llamaba a tomar las armas para hacer frente al deterioro vergonzante del presente. El ejército y sus guías – los profetas del intelecto – eran la última aristocracia y, por ende, el último reaseguro de autoridad y orden (Leopoldo Lugones 1979). Lo significativo es que ese ideario militarista iría permeando al resto de las fracciones que simultáneamente eran conmovidas por un contexto internacional de creciente totalitarismo (Buchrucker 1987; Finchelstein 2010).

Lugones amalgamaba una postura afirmativa hacia el progreso y la industrialización con un categórico rechazo a otras dimensiones sociales y culturales de la modernidad, lo que resultaba en un modernismo tecnológico, con alucinaciones de grandeza y marcadamente reaccionario en lo social (Herf 1993).

3.– Para cuando comienza a organizarse el golpe de Estado, Lugones llevaba años señalando que era necesario constituir a las fuerzas armadas en un actor político que, además de dar gobierno, debían militarizar a la sociedad toda y sacarla de la «infección de anarquía y feminismo en que estaba hundida» (Lugones 1917, pág. 171).

Desde esa etapa fundacional, nacida al calor de la voluntad destituyente, los abstractos e imprecisos conceptos de nación y nacionalismo ungían a la vez que enclaustraban proyectos y cosmovisiones diversos con los que pretendían defender el orden y las jerarquías, a través de una voluntad disciplinante y anti igualitaria. «Nacionalismo» fue el concepto escogido por la tendencia para autodefinirse, para dar cuenta de su interés esclarecido y su espíritu de entrega, por encima de intereses sectoriales o mezquinas individualidades. Por ello mismo, entiendo que tomar ese concepto utilizado por los propios sujetos que se estudian, implicaría aceptar que una parte defina al todo, puesto que el «nacionalismo» estaba lejos de ser el único elemento o el más determinante del carácter de esta corriente política e ideológica.

Los hombres que dieron forma a esta tendencia juzgaban que su posición social se veía amenazada y que sus expectativas sociales y políticas habían sido desacreditadas por la democracia. Por lo tanto, defensiva y al mismo tiempo ofensivamente, se erigieron como la conciencia colectiva de toda la nación, a la que le atribuyeron sus propios intereses y en cuyo nombre buscaban transformar las estructuras y la cultura.[4] El alegato nacionalista instalaba a sus portadores por encima de la esfera política, al tiempo que pretendía presentarlos ante el conjunto social como los únicos incontaminados promotores y custodios del interés legítimo de la nación que la democracia había trastocado. El nacionalismo disimulaba una cuestión medular: el rechazo a toda forma de soberanía de las mayorías puesto que la igualdad era antinatural y sindicaba al gobierno representativo como un sistema amoral, disgregador y corrupto, opuesto al ideal social y disciplinado de la nación, al que los sujetos se debían hasta el sacrificio. Es en ese sentido que postulamos el carácter limitado o restringido del componente nacionalista en esta naciente derecha antidemocrática. El «nacionalismo» de los «nacionalistas» era un dispositivo discursivo de índole instrumental que formaba parte de un proyecto con muchos otros rasgos.

Por ello, he optado por denominar como derecha (derecha de proyección nacionalista, para diferenciarla de las expresiones más estrictamente conservadoras o hispanocatólicas, aunque los límites entre una y otras nunca fueron tajantes) a sujetos e idearios que se definían por su elitismo anclado en la reivindicación de las jerarquías «naturales», por su oposición a la democracia y por su constante llamado a la implementación de una disciplina ordenadora de la sociedad. No se trata, en todo caso, de darle un sentido absoluto al concepto, sino de considerarlo en su relatividad histórica

4.– Aunque con una diversidad de matices que se soslayarán por razones de espacio, la derecha antidemocrática argentina de apelación nacionalista, entendía a la nación como a una situación de orden, una estructuración jerárquica y disciplinante que se concretaba en la identificación de la sociedad toda (subordinada jerárquicamente) con ese concepto superior que era la nación (Echeverría 2009).

e interpretarlo como actitudes de fondo, como intenciones (Bobbio 1996). Es decir, como una definición no contingente, no ocasional, no esencialista y viable de aplicar a la variedad de posiciones históricamente desarrolladas. Las derechas son colectivos amplios, diversos y dinámicos que están siempre construyendo y reconstruyendo su identidad (Bohoslavsky y Echeverría 2012). No obstante, este dispositivo discursivo nacionalista actuó como articulador de las diferentes fracciones, como legitimador de las acciones y fue reclutador eficaz de adherentes.

4.3 El golpe del 6 de septiembre de 1930 y la «década infame»

Desde comienzos del año 1930, las reuniones de los conspiradores se volvieron más frecuentes, eufóricas y concurridas. Los nacionalistas habían encontrado en el general Uriburu al caudillo que buscaban y este a los publicistas que necesitaba.

No es vano mencionar que, mientras organizaban el golpe de Estado, algunos de esos conjurados, como los Irazusta y otros referentes de *La Nueva República* y La Liga Republicana (LR), propusieron armar una lista de confluencia para las elecciones de marzo, que debía estar encabezada por Manuel Carlés (Liga Patriótica), Leopoldo Lugones (paladín del militarismo), dirigentes del Partido socialista Independiente (en adelante PSI) y algunos conservadores nucleados en la LR (Tato 2009, págs. 153-154), poniendo al desnudo que el campo de la derecha nacionalista se hallaba cruzado por ambigüedades e incertidumbres sobre las formas políticas. La propuesta no prosperó y la Liga Republicana se bifurcó (Irazusta 1975: 190).

En dichas elecciones el oficialismo logró mantener la supremacía a nivel general, aunque fue derrotado en la ciudad de Buenos Aires y se evidenció un notable aumento de votos opositores en casi todos los distritos. Con el optimismo de una crisis terminal del yrigoyenismo, Alvear se sumaba a los ataques, punteando el desgaste del gobierno, la negligencia y desidia generalizada del presidente y la obtusa voluntad de mantenerse alejado de personas de relieve.[5]

De tal modo, y más allá de las vacilaciones, el programa golpista avanzaba y se alimentaba del deterioro electoral, de las tensiones internas de la UCR, de los violentos conflictos en el Senado y de las intervenciones provinciales tanto como de los efectos de la crisis internacional iniciada a fines de 1929.

En julio de 1930, el sistema político partidario opositor a Yrigoyen (Conservador de Buenos Aires, Demócrata de Córdoba, Liberal de San Luis, Corrientes, Tucumán y Mendoza, el autonomismo correntino y la Unión Provincial de Salta), intentó conformar un gran partido nacional, aunque ante la imposibilidad de conciliar intereses se pactó la unión en una confederación, donde los partidos mantendrían su autonomía y nombre pero articularían

5.– *Caras y Caretas*, 31/05/1930.

sus fuerzas para derrotar al yrigoyenismo.[6] Quedaron por fuera la UCR antipersonalista, los demócratas progresistas y los socialistas. En tanto que el PSI daba apoyo público aunque no se integraba plenamente.

La derecha nacionalista quedó excluida de esa alianza, quizás por voluntad propia, pero también porque sus discursos, cada vez más extremos, resultaban, cuanto menos, incómodos para el universo liberal conservador. En un camino de inexorable radicalización, en agosto de 1930, conformaron la Legión de Mayo, fuerza paramilitar que se ponía al servicio de Uriburu y de los proyectos corporativistas (Buchrucker 1987; Finchelstein 2002, Halperin Donghi 2004; Navarro Gerassi 1968; Rouquié 1994; McGee Deutsch y Dolkart 1993), evidenciando la radicalización con un manifiesto violento que hablaba en nombre de la civilización construida con esfuerzo y sangre y estaba siendo desbaratada por un presidente ineficaz y corrupto que hundía al país en la miseria, en la vergüenza y en la anarquía.[7]

Al mismo tiempo, se hacían inocultables las diferencias dentro del elenco golpista, especialmente con el general Justo (y el amplio sector que este lideraba) quién desde inicios del mes de julio había alertado sobre los riesgos de atacar la «legalidad constitucional» (F. Ibarguren 1969, pág. 36), despertando la ira y el rechazo de la derecha de proyección nacionalista, que reclamaba la urgente y definitiva actuación de las fuerzas armadas. Ya siendo pública la conspiración, Justo se había deslindado de las acciones aunque, según sus propias palabras, había hecho los reclamos pertinentes a Yrigoyen.[8] Estas declaraciones no hicieron más que indignar e insolentar al sector corporativo que, confiando exageradamente en sus fuerzas, denostó al general Justo y se proyectó victorioso en el poder (Palacio 1954; C. Ibarguren 1955, págs. 391-392).

Indudablemente, la afinidad entre legalistas y corporativistas era endeble y como ha señalado Ernesto Palacio, representaban dos conspiraciones paralelas con divergentes caminos y objetivos. Los autoproclamados nacionalistas estaban por la vía armada para una profunda reestructuración social y política, se consideraban mayoría y avanzaron en acciones directas contra el enemigo, denunciando la debilidad de sus aliados. Golpizas, insultos callejeros y otras fechorías menores (pero muy celebradas al interior del campo «nacionalista»), junto con actos contra la vida de militantes yrigoyenistas pusieron en evidencia la decisión y la voluntad que los constituían. Por otro lado, y en busca de generar impacto en el universo político y social instituido, organizaron una teatralizada repulsa al ministro de Agricultura y Ganadería de la Nación, Dr. Fleitas, con motivo de la inauguración de la exposición ganadera de 1930. Allí no sólo se mostraron envalentonados, sino también decididos a desafiar a la elite económica que, a través de Federico

6.– *La Nación*, 02/07/1930, pág. 9.
7.– *La Prensa*, 27/08/1930, pág. 15.
8.– *Crítica*, 31/08/1930, pág. 7.

Martínez de Hoz, presidente de la Sociedad Rural, intentó evitar la «rechifla» (F. Ibarguren 1969, págs. 43-44).

Resulta evidente que la alianza que se había empezado a conformar en los días de la «Semana Trágica» de 1919 llegó desmembrada al golpe de Estado de 1930. Unidos por el diagnóstico antes que por las formas y los proyectos, mantuvieron el acuerdo básico que permitió el quiebre de la norma constitucional que había sido el emblema de orden y progreso de los organizadores del Estado. Fue un movimiento plural, protagonizado por los militares, acompañado y sostenido por las élites del poder, escoltado por contingentes sociales significativos y por un grupo relativamente numeroso de activistas radicalizados que decían encarnar el verdadero sentir de la patria.

Al momento de la acción concreta, unificados por el rechazo a la democracia, los sublevados se organizaron en los dos bandos mencionados. La llamada línea Uriburu, minoritaria, pero sin conciencia de tal condición y sin predisposición para asumirla, agrupaba a algunos militares corporativistas y a los «nacionalistas» (Carulla 1958, pág. 120). Por otro lado, la línea Justo-Sarobe, que comprendía a la mayoría de la oficialidad interviniente y expresaba vinculaciones fuertes con el conservadurismo, los radicales antipersonalistas, el PSI y buena parte de la elite económica del país. Estos, como herederos y representantes del régimen pre democrático y de las élites, propugnaban devolver el gobierno a sus tradicionales y «legítimos» poseedores, convocando, cuando fuera viable, a elecciones que mantuvieran, al menos formalmente, la vigencia constitucional y la reforma electoral. Si bien quien se benefició con la presidencia fue el jefe de la tendencia corporativa, el grupo Justo-Sarobe disponía del poder y condicionó a Uriburu, limitando sus intenciones transformadoras (Sarobe 1957, pág. 115), conformando el proyecto y el equipo de gobierno,[9] que estuvo integrado mayoritariamente por hombres del liberal-conservadurismo, representantes de la tradicional lógica política de las élites.

Indudablemente, más allá de sus propósitos en conflicto y tensiones, el golpe de Estado significó el retraimiento de la democracia liberal. La heterogénea y dificultosa coalición que lo ejecutó, ya sea por la propulsión de proyectos corporativos, ya sea por consagración del fraude, expresaba un rechazo consumado a la democracia y a lo popular. La conjunción de la crisis en el modo de desarrollo y en las formas de dominación política cargó a 1930 de un sentido axiomático de clausura (Macor 1999).

9.– El discurso con el que Uriburu iba a presentarse ante la población fue redactado inicialmente por Leopoldo Lugones y reflejaba el espíritu del «nacionalismo». No obstante, el que finalmente fue pronunciado fue reescrito por el teniente coronel Sarobe, quien eliminó todo contenido disruptivo y sumó las promesas de pronto retorno a la legalidad (Al respecto puede verse Díaz Araujo 1998; Frontera 2000; Segovia 2006; Echeverría 2009).

El gobierno de facto tuvo un discurso «legalista», celebratorio de la constitución y la promesa de un pronto regreso a la normalidad institucional, incluso en boca del general Uriburu (Echeverría 2011). Pero, a la vez ofreció un claro perfil dictatorial expresado a través de la disolución del Congreso, la intervención de las provincias y las universidades, el Estado de sitio, y la aplicación de la ley marcial con una extensión significativa (Amaya 1993, págs. 127-131). En ese sentido, la violencia institucionalizada por el gobierno provisional, abarcó tanto a delincuentes comunes como a enemigos políticos y, en principio, alentó e impulsó a los grupos paramilitares ya existentes. Mas luego, esa legitimación de la violencia estatal quitó cierta razón de ser a las ligas de choque de la derecha nacionalista que, sin desaparecer, fueron ocupando un espacio cada vez más secundario, contingente y testimonial.

De tal modo, la radicalizada derecha nacionalista que esperaba cambios profundos, prontamente expresó su disconformidad con lo que entendía era sólo una «restauración del Régimen», rechazando que se desdeñara el componente militar (en favor de los partidos políticos que hasta último momento habían menguado las fuerzas de la «revolución») y desafiando la falta de avances en la creación de un gobierno nacional, no partidario (Gálvez 1939, pág. 449; Palacio, LNR: 13/9/1930). Si bien, y quizás por sobrevivencia, se mantuvo un público apoyo a Uriburu e incluso se construyó un mito en torno a él (Finchelstein 2002), indudablemente, el corporativismo – o la voluntad – del general eran más equívocos y volátiles que lo que el entusiasmo «revolucionario» había hecho suponer a sus seguidores (Devoto 2002, págs. 252-257). Ello produjo un rabioso desencanto y un acompasado alejamiento que se producía al ritmo de las pasiones heridas y los anhelos de permanecer en la escena política. En diálogo entre los hermanos Irazusta, lo sucedido con el golpe se sintetizaba como «Preparado y efectuado por los reaccionarios, es usufructuado por los liberales» (Irazusta, R.: 1/10/1930). Durante ese interregno confuso se esforzaron en advertir que la vuelta a la «normalidad» y la realización de elecciones a base del sufragio universal reproduciría los errores, gestaría políticos de ínfima categoría, ineficaces, cubiertos de rábulas legalistas y postulados constitucionalistas estrechos e inútiles (Zía, LNR 13/9/1930).

Al mismo tiempo, y como efecto de la mencionada fragilidad, buena parte de la derecha corporativo-nacionalista se recluyó en Córdoba, donde Carlos Ibarguren (primo hermano de Uriburu) había sido designado interventor. Hacia allí, único reducto de poder al que habían accedido, marchó con sus hijos Carlos y Federico como secretarios, y con un elenco de miembros de la Liga Republicana (Enrique Torrino, Arturo Mignaguy, Adolfo Figueroa García, Belisario Hueyo, Roberto Thiegi, y varios referentes más). Los otros sectores quedaron excluidos, contrariados o sumidos en soledades profundas como el poeta Lugones.

Sin embargo no fue el fin del «nacionalismo». Muy por el contrario, a lo largo de la década, surgieron numerosas organizaciones a la vez cercanas y rivales (Legión Cívica Argentina, la Acción Nacionalista Argentina, luego Afirmación de una Nueva Argentina, la Logia Teniente General Uriburu, la Milicia Cívica Nacionalista, la Guardia Argentina, la Alianza de la Juventud Nacionalista), y comenzaron a escrutar las experiencias totalitarias de Europa, particularmente atentos a la capacidad ordenadora que habían mostrado los regímenes nazi-fascistas.

La derrota, lejos de inducir una adecuación al sistema político o cierta flexibilización discursiva, aumentó el rechazo hacia las formas políticas vigentes y sus políticos referenciales. Ya sin moderación alguna, a lo largo de la década, los «nacionalistas» se dedicaron a denigrar al sistema político y sus sostenedores, acusándolos de mezquinos, corruptos, mediocres y antinacionales. Esa radicalización se manifestó además en una multiplicación de publicaciones como *Sol y Luna*, *El Pampero*, *Crisol*, *Bandera Argentina*, *Cuadernos Adunistas*, *Nueva Política*, *El Fortín* y *Nuevo Orden*, en la creación del Partido Nacionalsocialista Alemán de la Argentina, en 1931 (Jackisch 1988) y el Partido Fascista Argentino en 1932 (Prislei 2008; Rubinzal 2011), en la exacerbación de planteos antidemocráticos, xenófobos y conspirativos, y en las escenográficas demostraciones de grupos violentos que amedrentaban en huelgas y en espacios políticos y culturales democráticos y/o de izquierda.

Por su parte, en el plano de la praxis política coyuntural, al autonomizarse de los sectores conservadores, como era obvio, rechazaron mayoritaria y fervientemente toda propuesta de alianza, como por ejemplo la participación en el frente nacional, en 1936, que buscaba enfrentar a una probable alianza opositora de radicales, socialistas, comunistas y demócratas progresistas. Laferrère puso en palabras el sentir de la tendencia al señalar que un frente nacional liderado por los conservadores sólo podía prolongar la triste historia de los viejos partidos en derrota, verdaderos generadores de buena parte de las desgracias nacionales (Laferrère 1936).

Todo lo expuesto evidencia la fragmentación del campo de las derechas y la paulatina constitución de la derecha nacionalista como la expresión más extrema, la que desafiaba enemigos de izquierda, los comunistas desestabilizadores, y de derecha, los conservadores «vende patria» (Torres 1940). Los gobiernos de Roberto Ortiz y Ramón Castillo no atenuarían esa distancia (Halperin Donghi 2004) sino que incluso profundizarían las críticas a un régimen mentiroso (Irazusta 1942), al que ya declaraban muerto (Sánchez Sorondo 1941) y para cuya superación se seguían ofreciendo solícitos y competentes.

4.4 El pensamiento como acción

Como vengo señalando, los años que siguieron al fracaso del uriburismo y la década toda, fueron tiempos de autonomización, radicalización, elaboración de propuestas y reconsideraciones. Al materializarse la separación categórica con los sectores liberal-conservadores, una derecha moderada, los representantes de la derecha nacionalista, la expresión más extrema, comenzaron a definir sus proyectos con mayor precisión, a repensar el poder y a mirar con mayor detenimiento al contexto internacional, la economía y la historia.

Los intelectuales de la derecha nacionalista, asumiendo el fracaso político, redoblaron sus esfuerzos especulativos y de allí que sus mayores aportes fueran publicaciones, más influyentes en el plano cultural y en los imaginarios sociales que en la arena política. Sus logros fueron la instalación de problemáticas, cosmovisiones e incluso palabras[10] que, antes que permitir conformar una expresión política concreta, establecieron premisas formativas que permearon a diferentes familias ideológicas y sectores (por ejemplo círculos significativos del ejército). Esto, que muchos analistas han concebido como el fin de la experiencia nacionalista, fue, sin embargo, una interesante instancia de complejización, que implicó la elaboración de proyectos para el país que ambicionaban. Esa fue su arma privilegiada y reflejaba tanto sus mayores capitales como su impotencia política. De tal modo, fueron contrastando diferencias internas, redefiniendo objetivos y alianzas, al tiempo que desencadenaron una valoración altamente negativa de la dirigencia política conservadora, los llamados *regiminosos.* En simultáneo fueron valuando la posibilidad de incorporar disciplinadamente al pueblo al juego político, recuperando el concepto de representación popular como instancia indispensable de generación de consenso obediente e instrumento legítimo de representación nacional, «no de los intereses bastardos del comité».[11] No obstante, esa voluntad nunca fue lo suficientemente fuerte como para desplazar su elitismo histórico y su carácter «orgullosamente minoritario» y antipopular.

Julio Irazusta, Palacio, Gálvez y algunos otros llegaron a reivindicar a Yrigoyen y su capacidad de movilización, disciplinamiento de lo social y sentido nacional. Defraudados, pero no vencidos, como vanguardia incontaminada – en tanto decían representar un ideario puro – anunciaron la necesidad de recuperar ciertas tradiciones que simbolizaba la UCR que, en conjunción con el ejército, debían hacer emerger la fuerza para defenderse de los murciélagos y cuervos que le chupaban la sangre a la nación y esperan

10.– La denominación «década infame» proviene de José Luis Torres, escritor del nacionalismo y del latinoamericanismo, influyente en la conformación del GOU y el golpe de Estado de 1943 (Torres 1945).
11.– «Declaración», LNR 05/10/1931, pág. 1.

su descomposición (Irazusta, R. *La Nueva República* 13/10/1931: 1). En lo pragmático, aducían que la ausencia política de la UCR era peligrosa, ya que ante el desprecio que sentían las mayorías hacia la «oligarquía» traidora y antinacional, podían derivar su descontento político hacia alguna alternativa marxista.

Resulta claro que la organización del Estado posgolpe militar, fue la mayor derrota que sufrió la derecha nacionalista y su reflexión ocupó un lugar destacado en la etapa de la frustración. Así, surgieron propuestas pro corporativas más elaboradas que en la etapa previa. Pero el corporativismo es un concepto abierto a distintas perspectivas y esa diversidad se manifestó en los distintos planteos que se forjaron desde el heterogéneo campo de la derecha nacionalista. Sin duda el que alcanzó mayor repercusión, aunque no estaba exento de ambigüedades, fue el que elaboró Ibarguren desde su cargo de Interventor en la provincia de Córdoba. Sostenía que la «Revolución» de septiembre constituía un hito en la historia argentina, como inicio de un proceso fundamental llamado a producir una profunda reorganización nacional, que debía promover la transformación de las prácticas políticas, de los valores, y del propio concepto de ciudadanía, a través de la instalación de un sistema político y constitucional basado en la presencia de «representantes genuinos de los verdaderos intereses sociales en todas sus capas» y de un nuevo parlamento «donde debe estar representada la opinión popular, y acordarse también representación a los gremios y corporaciones que están sólidamente estructurados». No se conformaba con un simple cambio de hombres sino que requería de una transformación honda incluso de lo constitucional. Asociado a esto, proponía afianzar el federalismo, al que argumentaba en términos de técnica de organización constitucional, política y fiscal más que cómo ideología (C. Ibarguren 1975).

Por su parte, los Neorepublicanos, en uno de sus últimos intentos por influir en la política oficial, elevaron al general Uriburu propuestas para la organización política del país, donde reconocían la importancia de las corporaciones (Irazusta, R. 1931; Irazusta, J. 1931).[12] Proponían la ampliación del número de provincias a partir de la reestructuración de los territorios nacionales y la incorporación de la representación corporativa del ejército, la universidad y de las distintas colectividades urbanas y rurales, incluyendo al decano de los párrocos («alguien tiene que velar por la moral pública, aunque no se le haga caso») y planteaban la conveniencia de algún tipo de reforma electoral que suprimiese la obligatoriedad del voto. Finalmente convocaban a otorgar el gobierno a la ciudad administradora y la fiscaliza-

12.– Finalmente, con una proclama publicada el 5 de octubre de 1931, los neorepublicanos se alejaban del poder fáctico y afirmaban sentirse burlados por un movimiento que había olvidado que la aspiración que había aglutinado al colectivo era la de independizar al Estado de las facciones que pretendían –y de hecho lograban– convertirlo simplemente en un mercado.

ción a la campaña productora. El Senado debía ser el encargado de elegir el presidente y los jueces de la República (Irazusta, R., LNR: 7/3/1931).

Estos proyectos tampoco tuvieron eco. Fue entonces cuando pusieron sus ojos en el pasado para mantener vivo el espíritu «auténtico» de la revolución y demostrar que el proyecto inicial seguía siendo «urgente y necesario». Además del contenido de autoreafirmación que esas alocuciones tenían, se pretendía también ganar posiciones en la lucha que sostenían con los políticos liberal conservadores. Sin abandonar su carácter elitista, anticomunista y xenófobo, su enfrentamiento con los políticos herederos del «régimen» se constituiría en pieza principal de su definición identitaria, de su propuesta programática y de su accionar político. Fundaban su marca «nacionalista» en el uso sistemático del concepto «republicano» que quedaba claramente anclado en el ideario alberdiano, en tanto república jerárquica y «aristocrática» que superase la anarquía y el desorden.

Lejos del tan proclamado antiliberalismo, establecían una batalla al interior de dicho sistema respaldando genealogías «puras» frente a otras supuestamente desviadas, y allí Alberdi ofrecía una trayectoria de defensa de una sociedad orgánica y de un catolicismo estructurador (Botana 1997, pág. 299), encarnaba una identidad conservadora que no negaba ni rechazaba las desigualdades económicas y sociales, y sostenía que estas eran producto de un orden natural, en tanto que la libertad política era una cuestión de capacidades. Esto no debe sorprender. Como ya he aludido en otros trabajos (Echeverría 2001) y también ha señalado Devoto, el discurso radicalmente antiliberal de la derecha nacionalista es desmentido por el propio accionar y proyectos, puesto que la apelación a esa tradición liberal conservadora y aun a la Constitución dominaría las retóricas de todos aquellos que aspiraban a tener un espacio político real y no marginal en la vida argentina (Devoto 2002, pág. 284). Invocando aquellas expresiones conservadoras se insertaban en el debate entre las tendencias liberales, sosteniendo que el liberalismo realmente existente en la Argentina expresaba una vía corrupta de un modelo original más sano y, por lo tanto, más efectivo para el desarrollo de una nación con pretensiones de grandeza. De allí que sus postulados «nacionalistas» fueran expresados primordialmente a través de la crítica a la élite política corrupta, «errónea» y traidora de los intereses generales del país, de los postulados del movimiento de 1930 y de la auténtica historia argentina.

Asimismo, los Irazusta se sumaron a un debate ya añoso, contradiciendo la premisa que sumergía al federalismo en la oscuridad de la barbarie, buscaron otorgarle centralidad y legitimación en la historia y el presente del país y propusieron la configuración de una red de provincias autónomas, con sufragio censitario, sin superposiciones y sostenedoras de la educación y otras cargas públicas. La misma autonomía debía alcanzar a las dimensiones municipales, ya que entendían que la desaparición de la democracia

permitiría el perfeccionamiento espontáneo de la vida comunal y la buena administración de esas jurisdicciones.

Pero, fundamentalmente, su arribo forzado a la Historia tenía el objetivo primordial de deslegitimar a la «oligarquía restaurada». Así, en 1934, con una lectura histórica que enmarcaba al tratado Roca-Runciman, los hermanos Irazusta publicaron *La Argentina y el imperialismo británico. Los eslabones de una cadena, 1806-1933*, donde cuestionarían reciamente al convenio y realizarían una colérica historia crítica de la «oligarquía» argentina. Sobre el tratado, retomaban una serie de objeciones y cuestionamientos que se encontraban extendidos en el campo político argentino[13] a partir de la firma de un pacto considerado vergonzante y sólo beneficioso para los capitales británicos y sus socios internos. Sin embargo, significó una profundización del pensamiento económico de los Irazusta y de los nacionalistas, en general.

Dicha lectura política de la economía y de las relaciones entre ambos países alcanzaría gran impacto en la opinión pública, acercándoles un auditorio amplio que se sentía disconforme con un tratado que sacrificaba a la economía argentina con el único fin de mantener el estatus de la clase dirigente (Di Tella, Petrecolla y Zymelman 1973, pág. 110). El interés primordial de los Irazusta era demostrar que la oligarquía se había convertido en una empresa de intereses económicos mezquinos, en un «consorcio de comercio mixto o sindicato internacional» (Irazusta J. y R. 1934: 22) que no tenía ninguna intención de salvar a la nación. El análisis del tratado fue el camino elegido para demostrar la incapacidad e inmoralidad de la elite, tanto como su agotamiento y decadencia, incluso en lo que se suponía que era su mayor competencia, es decir la diplomacia. Se trataba de una dirigencia de «mano torpe» que no había sabido, tan siquiera, haberse asegurado la permanencia en el poder. Una clase dirigente que no se comportaba como representante de un Estado soberano, sino como una «facción partidaria» de la dominación colonialista, una élite que no sabía más que «derogar el liberalismo profesado» (Irazusta, J. y R. 1934: 86).

El libro era esencialmente político y se constituyó en un fenómeno de gran significación que no pudo ser usufructuado por sus propios autores. El político opositor al tratado fue, para casi todos, Lisandro de la Torre. Aun así no puede desconocerse que consolidó el prestigio intelectual y el carácter crítico de los Irazusta, pero no les asignó el lugar de poder que seguramente anhelaban. De todos modos, entiendo que el libro conlleva una victoria: el afianzamiento de una perspectiva fuertemente denigratoria de la «oligarquía» y de sus formas de ejercicio del poder.

13.– Los Irazusta reconocieron en el libro que compartían buena parte de las opiniones emitidas sobre la cuestión, incluso las del socialista Nicolás Repetto y del demócrata progresista Lisandro de la Torre.

Las objeciones al desempeño de esa élite política no se originaban en fundamentalismos anti oligárquicos, sino en la particular configuración histórica de la élite política del país, pues así como esta era perniciosa, otras «oligarquías» habían sido «benéficas» haciendo posible la grandeza de sus Estados (Irazusta, J. y R. 1934: 138).

El libro marca, sin duda, un momento fundante del Revisionismo Histórico Argentino (institucionalizado en 1939), un espacio y una dinámica voz intelectual y política que contuvo a la derecha nacionalista, permitiéndole intervenir (y sobrevivir) en la amplia zona de encuentro entre lo cultural y lo político (Cattaruzza 2003; Devoto y Pagano 2009). Un ámbito que le permitía a Ernesto Palacio reclamar el derecho y la obligación de cada generación a reescribir la historia (Palacio 1939), a Manuel Gálvez evadirse de la ficción, y a Carlos Ibarguren desplegar sus dotes de minucioso historiador.

Ibarguren en los años treinta dio forma de libros a las que habían sido sus clases de historia argentina en la Universidad de Buenos Aires, donde rescataba la figura, la obra y el entorno de Rosas (aunque la «proscripción» había sido levantada antes por Adolfo Saldías y Ernesto Quesada), concibiéndolo como emblema de lo nacional, de la autoridad y el orden (C. Ibarguren 1975). Y es allí donde la obra de Ibarguren resulta mucho más convencional que la representación de los Irazusta, ya que en el fondo implicaba un reconocimiento a la capacidad de mando de las elites conservadoras que en nombre de la nación lograban construir y sostener un orden.

Resumiendo, el recorrido de la tendencia que le puso nombre a la década del treinta, es la historia de una voluntad ideológica atemorizada y muy dinámica que instaló pautas culturales de amplio y extendido alcance, pero no logró traducirlas en posiciones políticas y de poder concretas. Su radicalización liberó del estigma derechista a otras corrientes y movimientos que aparecían como moderados, incluso democráticos, en términos comparativos. No alcanzó desarrollos teóricos profundos, aunque penetró los imaginarios sociales y políticos. Buena parte de sus manifestaciones más radicales fueron una apelación a los propios, casi como una contraseña identitaria surgida de los fracasos, una coraza aglutinante y protectora, antes que un recurso para interpelar o convocar a otros individuos o sectores sociales.

Capítulo 5

Comunismo y cultura política comunista: el momento antifascista

Ricardo Pasolini

.....

5.1 Introducción

La extendida década de 1930 fue muy significativa para el comunismo argentino. Durante este período se consolidó la estructura y la dirigencia partidaria que en los años veinte se habían caracterizado por numerosas tensiones internas, escisiones, expulsiones y abandonos de las filas institucionales. También se profundizó la política de inserción en el mundo obrero que venía de la década anterior, a la par del ingreso, a veces orgánico y otras no, de sectores medios estudiantiles y de intelectuales que dieron por estos años una coloratura más amplia a la imagen del comunismo argentino, dado que para los últimos años de la década de 1920 estaba dominada por un perfil mayoritariamente obrero y extranjero, de acuerdo al peso que en su base social tenían los inmigrantes de ultramar.

Fue un período donde a la complejidad interna de un partido que desarrollaba sus acciones políticas en diferentes frentes (secciones idiomáticas, el frente cultural, el sector juvenil, el femenino, el sindical, las células de base en las fábricas, etcétera) se le sumó a partir del golpe de 1930 la proscripción, y, con la creación de la Sección Especial de Represión del Comunismo (1931), la persecución de sus diversas actividades consideradas todas ellas ilegales. Incluso entre 1932 y 1936, el senador Matías Sánchez Sorondo promovió una ley de Represión del Comunismo, la que si bien no contó con los apoyos parlamentarios necesarios para ser promulgada, evidenció hasta qué punto desde las esferas del gobierno de la Concordancia el comunismo fue percibido como un verdadero problema, en un contexto donde la política nacional se internacionaliza, en la medida en que los eventos locales comienzan a

ser vistos con el tamiz interpretativo de las grandes nociones políticas que ilustran el conflicto del momento: liberalismo, comunismo, fascismo.

Esta situación de mayor complejidad interna, persecución y fuerte represión estatal e ilegalidad formal, provocó una particular modalidad de actuación militante que muchas veces hizo coincidir al partido con las entidades en las que se desarrollaba la praxis y con las personas que la promovían. Animado por un notable componente identitario en los militantes, el partido parecía a veces residir y confundirse en esas entidades obreras o culturales, y esto – que era también uno de los efectos de la situación de ilegalidad – fue prontamente advertido por todos los gobiernos del período, de Uriburu a Rawson, que en el mantenimiento de la proscripción y represión de las actividades sindicales, periodísticas partidarias y/o culturales, creyeron avanzar en la extirpación de un «virus ideológico» que se consideraba ajeno a las tradiciones nacionales.

Así y todo, si el comunismo internacional se caracterizaba ya por una multifacética actividad militante que se proponía como modelo de acción también a los partidos comunistas periféricos, como el argentino, el carácter particular de institucionalidad difusa y actores múltiples hace posible pensar al comunismo de ese período como partido *stricto sensu* y, a la vez, como sociabilidad, es decir, como un conjunto de espacios asociativos que actúan en tanto ambientes en los que se desarrolla la socialización política de los adherentes, más allá de que las personas que se vinculan a ellos tengan con la estructura partidaria un lazo formalizado (afiliados) o se encuentren más lejanos de la institucionalidad aunque cercanos en el ideario político (compañeros de ruta). No menos importante en estas adhesiones fue – y sobre todo en ambientes intelectuales – el peso de la Unión de Repúblicas Socialista Soviéticas (URSS) como mito político de progreso y emancipación humanos.

Por otra parte, esta característica no deja de expresar aspectos en principio relevantes, pues si bien es factible pensar que un grado elevado de institucionalización del militante devino en una alta adhesión a las políticas del partido (incluso a sus comunes virajes tácticos), otros casos de adhesión plena al comunismo podían hacerse sin la necesidad de vinculaciones partidarias formales, y aquí el ejemplo más significativo del período es el del reconocido intelectual Aníbal Ponce, referente del pensamiento marxista local, quien nunca se afilió al Partido Comunista Argentino. Por cierto, en el largo plazo el PCA institucionalizó ese vínculo y lo convirtió en una propia figura mítica. Claro que en el caso de Ponce están interviniendo otros factores, como los lazos intelectuales que tenía con escritores y académicos franceses, que aunque también comunistas, participaban de un espacio amplio de relaciones, redes transnacionales y referencias culturales que excedían las propiamente partidarias, y allí Ponce arribará al descubrimiento del marxismo más desde una motivación científica que política, pero el

resultado final será una conversión ideológica total (Pasolini 2015, pág. 138). Si los años veinte inauguraron el culto de la revolución, los treinta serán en las imaginaciones políticas los de la *mise-en-scène* del socialismo, de allí también que muchas figuras del pensamiento y las letras argentinas concretaron en esos años su viaje iniciático a la URSS sin que por ello mantuvieran con el partido un lazo institucionalizado (Saítta 2007, pág. 5). Por cierto Ponce, a instancias del escritor Henri Barbusse, adalid del antifascismo y el comunismo francés e internacional, fue invitado por el Instituto Marx-Engels-Lenin para concretar una estadía en Moscú, la que ocurrió a partir de febrero de 1935.

La situación descripta da cuenta también de que lo que llamamos comunismo es un fenómeno mucho más complejo, diverso y amplio en sus manifestaciones, de lo que la opinión generalizada respecto de él establece, opinión que también tiene su correlato en sede historiográfica. Según esta suerte de interpretación canónica de sentido común político, el comunismo sería una gran maquinaria de falsificación ideológica que, dominada desde Moscú, proyectaría sobre la red internacional de los partidos comunistas los intereses particulares de la nación donde la revolución se concretó, es decir, la URSS. De este modo, políticas tales como el cambio de estrategia en favor de los frentes populares de 1935, responderían menos a un verdadero interés en la lucha antifascista global y más a una operación defensiva por parte de la Unión Soviética, que optó por promover alianzas antes improbables con sectores burgueses. El antifascismo sería entonces un invento de Stalin que los partidos comunistas del mundo reprodujeron en la obligada cadena de mando emanada desde Moscú (Furet 1995, pág. 306). Sería ingenuo pensar que esta pretensión no existió pues está claro que el comunismo funcionó como un sistema mundial y allí el peso de la URSS fue significativo en la dirección y el diseño que tomaron las estrategias políticas globales. Pero la imagen de omnipresencia disciplinaria deviene en un esquema limitado cuando el ojo del estudioso se orienta al análisis de los comunismos particulares, y así como es fácil establecer el influjo soviético también es posible identificar tendencias, momentos, ambientes, prácticas y actores en el espacio nacional, regional o local que hacen del comunismo una experiencia «en plural» (Dreyfus *et al.* 2000, pág. 9), o al menos no reducible exclusivamente a la impronta más o menos orwelliana con que se lo ha pensado. Por otra parte, en el caso argentino, no pocas veces la circulación de la demanda política tomó otro sentido, y el vínculo con Moscú se promovió para tratar de resolver a través de la Internacional Comunista las tensiones internas que enfrentaban a las diferentes facciones en pugna en el Comité Central local (Piemonte 2016, pág. 236).

El comunismo, entonces, asumió formas muy diversas en este período (es necesario señalar que existen más que evidentes diferencias entre el comunismo como política de Estado, y el comunismo partidario en países

donde no se es gobierno sino oposición), y si bien articuló una serie de nociones que conformaron una teleología optimista que conducía a la sociedad sin clases (el comunismo como matriz ideológica), también proyectó una imagen de la historia y la sociedad nacional en la que se desarrollaba su práctica política. De allí que, para el caso del comunismo argentino, este período fuera tan significativo, pues las interpretaciones que se crearán a mediados de los años treinta tendrán una potente perdurabilidad, de tal suerte que a inicios de la década de 1970 aún podían informar algunas dimensiones de la actividad política, sea del partido como de la extendida sociabilidad donde las ideas comunistas tenían su influjo.

Esta sensibilidad política dominante, que se podría denominar «comunismo liberal» o «marxismo liberal» (Viñas 1971, pág. 202) es el resultado de la combinación de tradiciones políticas nacionales y del impacto local de un complejo proceso político y cultural que atravesó el mundo occidental y su periferia en el período de entreguerras: la lucha antifascista. Fue a partir de esta puja internacional que las izquierdas comenzaron a revalorizar los componentes de una tradición liberal y republicana, *ergo* burguesa, que se veía amenazada por la fuerza de fascismos reales o imaginarios. Es por ello que he llamado a esta etapa el momento antifascista del comunismo argentino (Pasolini 2013).

5.2 Organización celular, clasismo, antifascismo

Entre 1925 y 1943, el PCA experimentó un proceso de crecimiento y fortalecimiento organizacional, que le permitió obtener una ascendente presencia en el escenario de las fuerzas políticas del período, situación que se verifica no en su participación electoral, que fue siempre limitada, sino en la generación de espacios culturales, organizaciones antibélicas, entidades antifascistas de carácter nacional y extranjeras, y órganos de prensa diversos, donde pudo residir alternativamente en un contexto de restricción de la acción política dada la proscripción impuesta por el gobierno a partir de 1930.

Sin embargo, uno de los elementos más significativos consistió en la gravitación que logró alcanzar entre las fuerzas del movimiento obrero argentino. Hacia 1940, el PCA era la organización de mayor peso en el movimiento obrero, tendencialmente superior a las otras corrientes que habían hecho sentir su presencia en la década anterior: el anarquismo, el socialismo y el sindicalismo. Los comunistas parecieron ser los militantes más eficaces en las tareas que se trazó el movimiento obrero de la época: impulsar la movilización de los trabajadores en función de lo que llamaban «las reivindicaciones inmediatas» (aumento de salarios, oposición ante los despidos, mejora en las condiciones laborales); organizar a los trabajadores en nuevos sindicatos únicos por rama de actividad para potenciar su capaci-

dad de lucha y negociación; respetar la tendencia a la autonomía sindical de los trabajadores frente a la patronal, el Estado e incluso los partidos políticos, y desarrollar estrategias de negociación respecto del gobierno para obtener mejoras sectoriales (Camarero 2001, pág. 137).

En efecto, con sólidas posiciones en las actividades de los trabajadores textiles, madereros, de alimentación, frigoríficos y otras ramas de la industria, a mediados de los años treinta la acción de los comunistas logró también la constitución de la Federación Obrera Nacional de la Construcción, uno de los gremios más importantes de la época e impulsores de la gran huelga del 1º de Mayo de 1936. Y entre 1935 y 1942, los comunistas compartieron con los socialistas la dirección de la Confederación General del Trabajo, es decir, la central mayoritaria de un movimiento sindical que alcanzó a organizar el 30 % de los obreros industriales (Aricó 1987, pág. 15; cfr. Martínez Mazzola en este volumen).

El proceso de inserción efectiva del PCA en el mundo obrero se inició con fuerza hacia 1925 y gran parte de las instancias organizativas y reivindicativas estuvieron relacionadas con la situación de ese sector de la clase obrera que se componía mayoritariamente por extranjeros, y en un modo considerable por trabajadores italianos.[1] En ese momento, el partido se orientó en una perspectiva de «proletarización» e impuso una estructura celular para el reclutamiento y la acción militantes, y a la vez promovió la creación de periódicos de células. Así, durante los años 1926 y 1927, se produjo un surgimiento febril de numerosas páginas comunistas de confección técnica muy rudimentaria, que informaban sobre la situación de los obreros en el ámbito de trabajo. Nacieron así los periódicos *El Rebelde; El Cromo Hojalatero; Regeneración; Dasac; El Luchador; Nuestra Palabra; El Ferroviario Rojo; El Obrero del Mueble; El Astillero; Vasena; El Barreno; La Fragua; Kl'o'ckner; Defensa Metalúrgica; El Obrero Textil; El Telar y La Lanzadera*, entre otros.[2]

De periodicidad muy irregular, este tipo de prensa comunista se estructuró en la mayoría de los casos en tres secciones básicas: una general y recurrente en la que el Partido Comunista instaló una serie de temas que consideraba importante que llegaran uniformemente al mundo obrero. Por ejemplo, su posición respecto de la ejecución de Sacco y Vanzetti fue tratada en la portada de la mayor parte de los periódicos de célula, así como las referencias positivas constantes al modelo de organización soviética. En un lenguaje sumamente sencillo, en todos los casos, el periódico celular invitaba a la lectura de la prensa partidaria promoviendo a la vez una campaña de suscripciones.

1.– Archivo General de la Nación, Fondo Documental Partido Comunista Argentino, legajo 5, 3.364, «Impresos, periódicos, folletines, 1927-1935».
2.– AGN. Fondo Documental Partido Comunista Argentino.

En una segunda sección denominada «Cómo nos explotan», se relataban las experiencias laborales de la relación entre patrón y empleados o entre capataces y empleados en el seno de la empresa, recurriendo muchas veces al uso de la primera persona y al nombre propio. En este sentido, a las reivindicaciones de carácter más general como la lucha por obtener una semana laboral de 44 horas, se presentaban otras que en el espacio micro resultaban indignas desde el punto de vista militante: la diferencia entre el salario por día y el trabajo a destajo en la industria hojalatera; la inestabilidad laboral;[3] el no cumplimiento de las 8 horas de trabajo;[4] las multas a los obreros y obreras que no alcanzaban a terminar su trabajo en la jornada diaria;[5] las arbitrariedades de los capataces y el maltrato a los obreros extranjeros recién incorporados, quienes en su mayoría desconocían la lengua del país, o, por el contrario, la defensa de los capataces que se negaban a establecer una relación de maltrato de los obreros, y que por esa razón eran separados de sus cargos, como lo indica *El Ferroviario Rojo* en junio de 1927.[6] En todos los casos, la sección «Cómo nos explotan» culminaba con un llamado a la organización celular. Las situaciones laborales vividas por los obreros y obreras eran evaluadas como resultados esperables de la tendencia del patrón a la explotación de sus trabajadores, pero sobre todo, a la falta de organización obrera.

Algunos de estos periódicos contenían una sección escrita en italiano, como por ejemplo *El Rebelde* y *La Fragua*, que adoptaban un contenido esencialmente antifascista, a veces enumerando los sucesos persecutorios del fascismo en Italia y rescatando así el componente heroico de la clase obrera,[7] otras convocando al antiguo militante obrero en Italia a la lucha en el país de recepción. En este marco, y como portavoz principal de la sección idiomática del PCA, se constituyó tempranamente el Gruppo Comunista Italiano, de marcado corte antifascista. La importante dinámica en la acción política de este grupo en un contexto donde se verificaba el arribo tanto de exiliados políticos italianos como de inmigrantes por razones «económicas», motivó que el Comité Ejecutivo del PCA estableciera como prioridad de su política una serie de acciones que tendieran al reclutamiento de nuevos afiliados y la constitución de un Comité Central de las Agrupaciones Idiomáticas. Este estuvo integrado por dos miembros del Gruppo Comunista

3.– *El Cromo Hojalatero. Órgano de los obreros de cromo-hojalatería del taller Bunge y Born*, 2 (1-5-1927).
4.– *Dasac. Órgano de los obreros y empleados de la Droguería Americana, Buenos Aires*, año 2 (5-1927).
5.– *La Lanzadera. Órgano de los obreros y obreras de la fábrica de tejidos Campomar y Soulas* (7-1927).
6.– *El Ferroviario Rojo. Órgano defensor de los obreros y empleados ferroviarios de Constitución*, 4 (06/1927).
7.– *El Rebelde. Órgano de la célula comunista de Villa Adelina*, 2 (05/1927).

Italiano, otros dos del Grupo Israelita, – que eran las secciones que contaban con el mayor número de afiliados – y un representante de la dirección del Partido.[8]

A la par, el Comité Ejecutivo aprobó una resolución en la que se establecía que todas las agrupaciones que conformaban el partido debían actuar en función de asegurar la salida diaria de los periódicos más importantes del PCA: *La Internacional* – que había nacido en 1917 – y *Avanti*, este último destinado a la comunidad italiana y dirigido por el militante Silvio Ravetto. La necesidad de contar con un periódico estable del partido era visualizada como un instrumento fundamental en la acción política del mismo, y se apoyaba en una serie de datos relevantes: entre febrero y marzo de 1925, las suscripciones a *La Internacional* en el mundo obrero habían sumado alrededor de 300, y la distribución de los 250 ejemplares que se destinaban a las células de fábrica y talleres, habían superado los 1.000 ejemplares.

El partido llevó adelante una campaña de suscripciones, solicitó donaciones a sus militantes, organizó diversas actividades festivas, y tomó la decisión no sólo de asegurar la periodicidad diaria del órgano periodístico, sino que convirtió la última página de *La Internacional* en un página escrita en lengua italiana, que abandonó el anterior nombre de *Avanti* para llamarse *Ordine Nuovo*. El objetivo inicial se relacionaba con el hecho de contar con una prensa destinada al obrero italiano que disputara el lugar de preeminencia que en la comunidad tenían órganos como *La patria degli italiani* o *L'Italia del Popolo*, periódicos considerados desde el PCA como reaccionarios, filofascistas, o bien socialistas.[9] Pero también como una forma de organización de la lucha sindical de los obreros italianos. Desde el inicio, la página italiana se esforzó por convocar a los obreros que habían tenido experiencia en la vida sindical en Italia y que por ello fueron obligados al exilio o la emigración.

También en *Ordine Nuovo*, la información sobre los acontecimientos de las células fue relevante y permite establecer en modo muy general la experiencia del comunismo en el mundo obrero. En efecto, a la par de los debates sobre las políticas del antifascismo, la publicación de la información sobre las células muestra una situación de la clase trabajadora equivalente a la que devela el resto de la prensa celular. Se verifica una crítica permanente de la situación laboral de los trabajadores textiles, albañiles, del mueble o ferroviarios – de cualquiera de las ramas donde los comunistas tuvieran representación – que no siempre apela al argumento de la injusticia de los aspectos salariales – aunque este está presente en la preocupación por el aumento de las horas de trabajo sin remunerar – sino a la dimensión «existencial» de la experiencia laboral: el trato humano, la relación con los patrones, la higiene y las condiciones materiales en el trabajo.

8.– *La Internacional* (07/03/1925), *Ordine Nuovo*, (06/10/1925) (29/05/1926).
9.– *La Internacional* (21/03/1925) (18/04/1925).

Sin embargo, *Ordine Nuovo* no sólo no abandonó en su retórica el propósito final de la organización obrera, sino que continuamente derivó una serie de prácticas en ese sentido. Así, participó con sus oradores en actos políticos en sede laboral, en los que debían compartir la tribuna con representantes de las otras secciones idiomáticas y con dirigentes nativos.

También, el periódico comunista reflexionó sobre la relación entre inmigración italiana y desocupación en Argentina, indicando que el desarrollo tecnológico de la industria en el país había cambiado sustancialmente; por lo tanto, la situación laboral con la que se encontraban los recién llegados distaba de ser la de los primeros años del siglo XX. Ante eso, *Ordine Nuovo* consideraba necesaria la incorporación de los connacionales desocupados en los sindicatos de oficios existentes, una posición que se retomará con iguales argumentos hacia 1933, cuando el PCA motorice la organización de los desocupados a través de la estructura partidaria.[10]

Quiere decir, entonces, que un primer antifascismo en las filas del Partido Comunista Argentino se fundó en un componente por un lado clasista, y, por el otro, extranjero, que evaluó la lucha frente al fascismo como una instancia más de la abolición de la sociedad capitalista. Antifascismo, «bolchevización» en la dirección política, y proletarización, fueron sinónimos en esta etapa inicial, que, de algún modo, posibilitó un diálogo al nivel de las células de fábrica entre obreros y trabajadores de diversas extracciones partidarias y nacionales (socialistas, anarquistas y comunistas).

En los hechos, la acción antifascista del Partido Comunista Argentino anticipó la política del tercer período de la IC, en la medida en que su particularidad política le permitió sentar las bases de un proceso de proletarización y de un conjunto de acciones militantes que se acercaban de *facto* a la estrategia de «clase contra clase» que estableció el VI Congreso de la Comintern en 1928. Pero este antifascismo distará mucho del que se desarrollará a mediados de los años treinta, pues si el primero se circunscribirá a la problemática de un sector amplio de la clase obrera comunista, el otro se convertirá en un tópico central del sistema político argentino de esos años.

5.3 La persistencia del frente único

Así y todo, hacia mediados de la década de 1930, el PCA alentó la disolución de los grupos idiomáticos dentro del movimiento obrero nacional, en parte porque la composición de la clase obrera fue cambiando sustancialmente debido a la interrupción de la inmigración de ultramar que impuso el gobierno de Uriburu y al flujo creciente de los migrantes internos que se instalaban en el cordón industrial de Buenos Aires, acompañando el proceso de desarrollo del modelo de sustitución de importaciones que

10.– AGN. Archivo Justo, Fondo Comunistas. Sección Especial. «Memorandum», mayo 16 de 1933.

se implementó como respuesta a la crisis económica mundial de esos años. Esta distancia se presentó también entre la dirigencia del PCA y los comunistas italianos, quienes en 1935 habían constituido el Fronte Unico dei Partiti Operai Italiani (FUPOI). Esta experiencia establecía un pacto entre el Partido Comunista Italiano y el Partido Socialista Italiano en el exilio, para recuperar la unidad de acción de todas las fuerzas antifascistas, luego de la desaparición de la Concentrazione d'Azione Antifascista en 1934, una entidad creada en 1927 que agrupaba a los exiliados de distintos partidos y que con sede central en París tenía también sus expresiones institucionales locales.

Pero las lecturas de la realidad política que hacía el PCA fundamentalmente subordinaban el tópico antifascista a la posición antiimperialista, mientras que para el FUPOI de lo que se trataba era de lograr la mayor incorporación de fuerzas posibles en la clave del antifascismo, sobre todo porque se evaluaba desde allí la particular situación política italiana, que con la invasión a Abisinia había logrado motorizar un potente discurso de nacionalismo expansionista, que tenía su impacto en las comunidades italianas de ultramar (Scarzanella 2007, pág. 48). Así todo, el FUPOI no dejó de participar en la campaña de constitución del frente popular en Argentina, y muchas de sus acciones se orientaron hacia una búsqueda de acompañamiento electoral con los partidos socialista y demócrata progresista locales.[11]

El peso de un perfil de algún modo «nacional» en la estrategia de los frentes populares que el partido asumirá a partir de 1935, más allá de una retórica internacionalista que establecía el tópico de la *defensa de la cultura* como el elemento aglutinador de la lucha antifascista, impuso límites a la acción política de clase, en favor de una estrategia de incorporación de sectores sociales de la pequeña burguesía y de los partidos políticos considerados ahora como democráticos: la Unión Cívica Radical y el Partido Socialista (Pasolini 2005, pág. 403).

Claro que este cambio si bien fue inmediato al nivel de las retóricas de las dirigencias tardó en asumirse en las bases, donde en la práctica la gravitación de la política de *frente único* siguió informando la acción de los militantes comunistas, desde que en 1933 el PCA se propuso avanzar en la lucha antifascista a través de la acción en penumbras en el Comité de Unidad Sindical Clasista.[12] Incluso en este momento y hasta el advenimiento del peronismo, la presencia del comunismo entre los trabajadores se acrecentó con independencia de los sucesivos cambios en las estrategias partidarias (Camarero 2009, págs. 145-173). Y, al menos hasta bien entrado el año 1935,

11.– AGN, Archivo Justo, Fondo Comunistas, documento n.º 221, agosto de 1935.
12.– AGN. Archivo Justo, Fondo Comunistas. Asamblea Popular contra el Fascismo, 16 de junio de 1933.

los tópicos de la lucha antifascista no dejaron de expresarse según la fórmula utilizada desde mediados de los años veinte, es decir, con un fuerte énfasis clasista, a lo que se sumó una preocupación de coyuntura: el temor de que la pauperización de los sectores de la pequeña burguesía pudieran orientarse hacia posiciones fascistas. Por ello, el PCA recomendaba a sus organizaciones trabajar en la ampliación de la influencia proletaria hacia esos sectores considerados vulnerables.[13]

Es verdad, también, que el advenimiento de Hitler al poder en Alemania en 1933 había conducido a los comunistas a rever paulatinamente su posición respecto del socialismo, dejando de lado su anterior calificación de «socialfascistas», para promover ahora en clave antifascista la acción conjunta en el mundo obrero, lo que para los socialistas no era más que una táctica con la que el PCA intentaba apropiarse de sus bases sociales, lectura común a la del socialismo internacional (Mancini 1985, pág. 188; cfr. Martínez Mazzola en este volumen). Sin embargo, este cambio abonó la posibilidad de diálogos cercanos en un contexto local e internacional donde las expresiones de la izquierda se vieron jaqueadas por la persecución y la represión políticas de gobiernos de corte autoritario o claramente fascistas.

5.4 Hacia el frente popular antifascista

La preminencia obrera en la política partidaria se vio complementada prontamente por el ingreso a la sociabilidad comunista de nuevos actores sociales y culturales. Durante la década de 1930 se advirtió la emergencia de un sector intelectual de afiliados y adherentes que poco a poco fue ocupando posiciones más importantes aunque subordinadas, sea en la escala partidaria como en el amplio abanico de asociaciones que se ligaban de algún modo a su esfera de influencia. En este sentido, avanzadas las décadas de 1940 y 1950 – y como un impacto de la emergencia del peronismo en el mundo obrero – el comunismo alcanzará sus adeptos casi exclusivamente en ciertos sectores de las capas medias (los profesionales, el mundo universitario, los maestros, las organizaciones femeninas y el amplio tejido de asociaciones culturales diseminadas a lo largo del país). En este marco, la incorporación paulatina de las mujeres en la militancia comunista durante la década de 1930 pareciera ser uno de los procesos más relevantes de este período que poco a poco ha ido obteniendo credencial historiográfica. En efecto, investigaciones recientes han demostrado el importante papel de las mujeres en la política global del PCA. El itinerario de algunas de ellas, como Fanny Edelman, da cuenta de hasta dónde era posible llegar en la carrera política del comunismo internacional en la etapa antifascista, pues

13.– «Al CC del PC de la Argentina, Secretariado Sud y Centro Americano de la IC, 26 de septiembre de 1933». AGN. Partido Comunista Argentino, legajo 3, 3.362, n.º 19. Documentación interna. Correspondencia 1921-1935.

esta militante que había llegado al partido en 1934, fue alcanzando una fuerte gravitación interna: primero, gracias en su participación *in situ* en la Guerra Civil Española durante dos años, luego en Argentina integrando los agrupamientos de ayuda a los huérfanos españoles de la guerra, más tarde en la que fue sin duda la mayor organización de mujeres creada en el país en tiempos de la Segunda Guerra Mundial, la Junta de la Victoria (McGee Deutsch 2013), y finalmente, en la Federación Democrática Internacional de Mujeres, organización antifascista y procomunista de gran peso internacional que promovió los derechos civiles femeninos y la lucha por la paz en el clima de la Guerra Fría (Piepper Mooney 2013, pág. 216).

Si la trayectoria de Edelman puede ser evaluada como un ejemplo excepcional, lo que muestra la participación femenina extendida en la sociabilidad comunista es una cierta comunión de percepciones particulares respecto del papel de la mujer y la política argentina e internacional, en un período de alto activismo político y movilización ideológica caracterizado por el antifascismo y el inicio de la guerra mundial. Estas ideas compartidas, que dan cuenta de una ampliación de los tópicos de la discursividad comunista hacia nuevos temas, se fundaron en el «maternalismo», una serie de nociones que proyectaron sobre el espacio público lo que se consideraba era una especificidad de la experiencia femenina. Además de los temas globales de la lucha antifascista internacional, y de las críticas al carácter represivo del gobierno de Justo, el discurso femenino del comunismo presentó a las mujeres como agentes extendidos de la experiencia doméstica y maternal. Se ilustraba a las mujeres sobre los problemas de la carestía, y sobre dónde comprar los alimentos y el manejo del presupuesto familiar. Se aconsejaba también que no debían enfrentarse con el pequeño comerciante del barrio ante la suba de los precios, pues la causa se encontraba en la acción de los monopolios; pero sobre todo, se enfatizaba en la importancia de la crianza de los hijos en la clave del pacifismo (de allí las críticas a la promoción del uso de juguete bélico en los niños). Por cierto, esta posición «pacifista» contrastaba –en el clima de la Guerra Civil Española– con el elogio que las entidades de mujeres hacían de las milicianas republicanas, capaces de tomar las armas junto a los hombres para hacer frente al ejército rebelde, pero se justificaba ello también en tanto actitud extrema de maternalismo: las milicianas defendían así lo más preciado de la vida: sus hijos.[14]

Con la creación en 1941 de la Junta de la Victoria, una agrupación masiva de mujeres de diversa extracción partidaria y social, y en la que el comunismo tenía también sus representantes (la matemática Cora Ratto formaba parte del consejo directivo), estas posiciones se profundizarán en un contexto donde la entidad asumirá desde Argentina el apoyo a las fuerzas aliadas en la contienda bélica. Pero ello tendrá también un resultado interno

14.– *Mujeres!* Órgano de la Agrupación Femenina Antiguerrera, mayo de 1937.

a la vida pública femenina y al sistema político en general: la experiencia de la democracia que se obtuvo de la participación y la toma de decisiones en la entidad conducirá a abonar una discusión global por los derechos cíviles de las mujeres que antecederán a la ley de sufragio femenino de 1947 (McGee Deutsch 2013, pág. 175).

¿Qué clima de época posibilitó el desarrollo de estos procesos? La notable profundización en el acrecentamiento del discurso partidario hacia sectores cada vez más amplios de la vida política y asociativa se relacionó sin duda con el cambio de estrategia del VII Congreso de la Internacional Comunista de agosto de 1935, que propuso el reemplazo de la estrategia de lucha de «clase contra clase» por la del «frente popular», lo que implicó la promoción de alianzas con otros partidos de base obrera y con los sectores progresistas de la llamada pequeña burguesía.

El Partido Comunista Argentino prontamente adoptó esta directiva, se propuso salir del «*ghetto* político en el que voluntariamente se había encerrado» (Halperin Donghi 2004, pág. 210) y ello posibilitó – no sin tensiones – una novedosa participación en el juego político en una Argentina dominada por el fraude electoral y las restricciones al libre funcionamiento de los derechos individuales y las instituciones republicanas. De allí, entonces, que espacios intelectuales y femeninos encontraran ahora una posibilidad de activismo mayor.

En este marco, los comunistas alentaron la candidatura presidencial del radical Marcelo T. de Alvear, en tanto cabeza de un frente popular *sui generis* que no logró constituirse como tal, y que en cierto modo, más allá de las acciones militantes explícitas, se activó con un PC en penumbras que no fue del todo legitimado por los coyunturales aliados.[15] Así y todo, y aunque la experiencia fuera infructuosa, en la medida en que Alvear fue derrotado en los comicios presidenciales de 1937 por el candidato oficialista Ricardo M. Ortiz, el hecho inauguró una etapa en la que los comunistas se propusieron de ahora en más jugar un juego en el que se vieron como aliados de los partidos que – aunque burgueses – pudieran ser reconocidos por su vocación democrática. De allí su oposición al gobierno de Ramón S. Castillo, político conservador quien asumió la presidencia ante la temprana muerte de Ortiz, de allí también la férrea caracterización del golpe de junio de 1943 como fascista (Campione 2007, pág. 177).

Sin embargo, la derrota del frente popular antifascista de 1938 motivó una fuerte discusión interna y por momentos una dirigencia desorientada pareció retomar los temas de una estrategia de lucha de clases que visualizaba en un horizonte cercano un proceso de «bolchevización» encabezado por lo que denominaban el campesinado argentino, como lo indican los in-

15.– Documento del Comité Central del PCA convocando al frente popular, 1º de Mayo de 1937. Dossier Argentine, 1936-1948, BDIC.

formes que el secretariado general del partido enviara en 1938 a la dirección de la Tercera Internacional Comunista.[16] Sin embargo, se trataba de una estimación que recurría a una conceptualización residual. Una evaluación un tanto más realista observó que el fracaso en la constitución de un frente popular se debió no sólo a unos aliados poco confiables (los dirigentes radicales por un lado; los socialistas no del todo convencidos del frentismo, y, finalmente, los dirigentes del Partido Socialista Obrero influenciados por el trotskismo), sino también a la debilidad del Comité Central para vencer la resistencia e incomprensión de los militantes respecto de la nueva estrategia de la Internacional Comunista. El CC no había tenido la fuerza para instalar la lucha por las reivindicaciones económicas y políticas de las masas en el centro de su trabajo cotidiano y de su actividad electoral: «Su consigna electoral "los radicales al poder, Alvear presidente" ha impedido el trabajo por un amplio frente democrático; el apoyo al radicalismo se ha desligado de la lucha por las reivindicaciones inmediatas de las masas populares».[17]

Lo cierto es que la constitución del frente popular si bien se orientó en un sentido electoral, tuvo un impacto que excedió las imaginaciones de los dirigentes partidarios, pues fue un proceso activado por múltiples actores y con una temporalidad que discute –al menos en este punto– el papel primordial otorgado a la IC en el origen de la estrategia frentista. Por otro lado, fue un momento en que los fundadores y representantes más importantes de la dirigencia partidaria se encontraban en el exterior: Victorio Codovilla había dejado el país en 1930 y había sido enviado por la IC para actuar en la organización del Partido Comunista Español. Y Rodolfo Ghioldi, quien acompañó la insurrección de José Carlos Prestes en Brasil, luego del fracaso de la misma fue encarcelado y recuperó la libertad recién en 1940, en que volvió al país. Claro que las directivas de la IC podían ser ejecutadas mediante una disciplina partidaria que no requería del todo de la presencia de las figuras más encumbradas, pero fue este un período en que la ampliación de campo de los protagonistas del comunismo vernáculo (dirigentes, militantes, adherentes, compañeros de ruta, etcétera) posibilitó un cierto margen de libertad de acción, que, por cierto, se interrumpirá hacia 1939 con la firma del pacto germano-soviético, y con la posición neutralista ante la contienda bélica (Schenkolewski-Kroll 1999, pág. 91).

Pero para quienes desde Argentina seguían los hechos políticos europeos, dado los fuertes vínculos existentes entre los sectores de la cultura local y el viejo continente, la posición de la IC de agosto de 1935 vino a confirmar en el plano de la institucionalización política del comunismo lo que en los hechos había sido la alianza de trabajadores, intelectuales y partidos de

16.– AGN, Fondo Partido Comunista Argentino, sala VII, legajos 11 y 13, n.º 3.360.
17.– «La actividad del PC en el año 1937 y sus tareas inmediatas. Proyecto de resolución», Confidencial, 16/02/1938. AGN.

la izquierda francesa que el 6 de febrero de 1934 resistieron – a través de la constitución de agrupamientos diversos – a lo que evaluaban como el intento de golpe de Estado fascista, motorizado por las organizaciones Croix de Feu; Action Française; Union Nationale des Combattants y Jeunesses Patriotes (Jenkins 2006, pág. 340).

En efecto, en marzo de 1934, se constituyó en París el Comité de Vigilance des Intellectuels Antifascistes (CVIA). El Comité estaba liderado inicialmente por renombrados intelectuales y profesores universitarios (Alain, François Walter, Paul Rivet, Paul Langevin, Jean-Richard Bloch), quienes si bien tenían vínculos medianamente orgánicos con los diversos partidos de la izquierda francesa (radical, comunista y socialista), prontamente definieron una posición antifascista que se subordinó a los intereses de los trabajadores.

A diferencia de otros agrupamientos intelectuales que venían trabajando desde los inicios de la década de 1930 y de fuerte perfil comunista, la novedad del CVIA residía, por un lado, en que se inscribía en un cuadro prioritariamente nacional y secundariamente internacional. Y por el otro, en la importante progresión cuantitativa de adherentes y participantes que alcanzó alrededor de 6.000 hacia finales de 1934 (Santamaría 1998, pág. 77).

El más importante éxito del CVIA fue también uno de los primeros éxitos del todavía no constituido frente popular: la elección de su presidente, Paul Rivet, en las elecciones municipales parisinas de mayo de 1935, como candidato único de la izquierda (comunistas, socialistas, republicanos, sindicalistas, miembros de la *Ligue des droits de l'homme* e independientes), de allí que este agrupamiento no sólo se transformó en una inspiración para el diseño de una política frentista en Francia, sino también para la IC y para el resto de los países donde se evaluaba la situación política local en camino hacia un proceso de «fascistización».

5.5 La AIAPE, defensa de la cultura o las relaciones entre comunismo y nación

El 28 de julio de 1935 en Buenos Aires, un grupo de intelectuales de diversa extracción ideológica ligados en su mayoría a las diversas izquierdas del momento fundaron la Asociación de Intelectuales, Artistas, Periodistas y Escritores (AIAPE). La concreción de la entidad se debió al rol preponderante que cumplieron los escritores Aníbal Ponce y Cayetano Córdova Iturburu.

Aníbal Ponce había regresado de su tercer viaje europeo en mayo de ese año, y había establecido allí múltiples relaciones con los intelectuales antifascistas franceses. Hacia finales de diciembre de 1934, había participado en el Congrés Mondial des Etudiants, desarrollado en Bruselas, y en abril de 1935, en un *meeting* representando a los intelectuales *d'Amérique du Sud*, en el que se refrendó la intención de constituir una Union Internationale des Intellectuels Antifascistes, que, por un lado, agrupara a los intelectuales

sin distinción de partidos, y por otro, estableciera un marco nacional para las organizaciones, como el CVIA, y un nexo internacional de los comités.

Por su parte, Córdova Iturburu brindaba su experiencia de animador del proyecto literario de la publicación de izquierda *Nueva Revista*. El primer presidente fue Aníbal Ponce, acompañado por el periodista Edmundo Guibourg, el escritor Alberto Gerchunoff y el dramaturgo Vicente Martínez Cuitiño. Lo sucedió en la presidencia el doctor Emilio Troise, quien fue reemplazado en 1940 por el doctor Gregorio Bermann.

Tempranamente, la AIAPE se organizó tomando el modelo del CVIA francés, y no pocas veces Ponce – de encumbrada posición intelectual y de sofisticada formación marxista – se vio obligado a moderar a los sectores «izquierdistas» de la AIAPE que proponían una acción cultural más radical de la entidad frente al moderatismo que el propio perfil de su presidente y la política frentista ameritaban. Así y todo, si Ponce – en esta etapa claramente identificado con el comunismo – fue el promotor de un espacio inicialmente abierto a otras expresiones, en el mediano plazo, las tensiones internas se resolvieron en favor del sector comunista más dogmático, de allí que la AIAPE endureció su disciplinamiento interno cuando en la campaña electoral de 1937 algunos de sus adherentes se manifestaron más cercanos a apoyar la candidatura de Ortiz que la de Alvear. Por otra parte, desde fines de 1936, Ponce – perseguido por el gobierno del presidente Justo y expulsado de sus cargos docentes – había optado por el autoexilio en México, de modo que la entidad no sólo perdió a uno de sus más claros referentes sino que se encontró a la vez en el ojo de la represión estatal.

La acción político-cultural de la AIAPE fue profusa hasta finales de 1939, momento en que la firma del pacto Molotov-Ribbentrop y la posterior neutralidad liquidó las alianzas que se habían constituido en la etapa del frente popular, hasta que en 1941, con la invasión de Alemania a la URSS, los comunistas evaluarán la nueva etapa bélica no ya como guerra interimperialista, sino como «guerra internacional antifascista», e intentarán recuperar a sus antiguos aliados. El contexto internacional los favoreció en ese sentido.

Las revistas *Unidad* (1936-1938) y *Nueva Gaceta* (1941-1943) fueron los espacios más visibles donde los miembros de la AIAPE expresaron los contenidos más significativos de su prédica ideológica y su acción cultural, aunque muchos de ellos se destacaron como conferencistas, autores y artistas en el marco de la amplia actividad cultural que desarrolló la entidad.

Más allá de los deseos imaginarios de los integrantes de la AIAPE, su antifascismo inicial significó menos el intento de construcción de una salida política (el frente popular) ante lo que consideraban el avance del «fascismo criollo» – los tiempos institucionales inaugurados por el golpe de Uriburu, el gobierno del presidente Justo y el fraude electoral – y más la percepción de la debilidad de unos intelectuales que se lanzaron al mundo de la política. Pero

si la AIAPE poco pudo hacer en esa esfera, en otra dimensión logró articular una serie de discursos y acciones culturales en la que la tematización de la «defensa de la cultura» se convirtió en la noción aglutinante de la sensibilidad antifascista. A través de este tópico, el fascismo fue percibido a nivel internacional como incivilización, como una nueva Edad Media funcional a la nueva etapa del capitalismo mundial, etapa que se expresaba al nivel local con su particularidad. De allí que este antifascismo se convirtió no sólo en una fuerza de resistencia, sino en una reflexión sobre la situación política nacional que reivindicó tanto una posición activa de defensa de la tradición liberal y sus próceres más notables, como una actitud más beligerante a favor del modelo de organización social que se desarrollaba en la URSS. Así, los comunistas hicieron propio el pensamiento de Moreno, el de Echeverría, el de Sarmiento, admiraron no sin cuestionamientos a la Generación del Ochenta y postularon que el mandato revolucionario de Mayo de 1810 todavía se encontraba inconcluso. En este punto, y en otros, siguieron el esquema que había postulado José Ingenieros en *La evolución de las ideas argentinas* (1918), de tal suerte que la historia argentina se vio como una puja entre fuerzas que tendían unas a la reacción y otras hacia el progreso. No fue difícil hallar en este esquema a los actores que en cada momento actuaban en una y otra tendencia. Y allí los jesuitas fueron asociados a Rosas y este al nacionalismo y al antisemitismo de los años treinta, mientras por otro lado, el espíritu de Mayo, con Echeverría y Sarmiento, integraron la genealogía de una tradición progresista que venía desde el Renacimiento y llegaba a través de Mayo y la Revolución Rusa al antifascismo comunista.

La operación intelectual de inscribir el comunismo local en una tradición política argentina que reconocía sus orígenes en la Revolución de Mayo fue un proceso en el que participaron múltiples actores. De algún modo, se trató de un clima de opinión compartido, pero fue Aníbal Ponce quien lo desarrolló tempranamente y en forma más acabada. La situación de inestabilidad política más o menos permanente que caracterizó el período también ayudó al desarrollo de esta percepción de la política nacional en la que los comunistas se volvieron los defensores de las libertades individuales, de la institucionalidad republicana y la Constitución Nacional, al tiempo que en las dimensiones más profundas de su ideario proyectaban la abolición de la sociedad burguesa. Claro que en este momento, otros marxismos – más economicistas algunos, menos moralistas otros – tuvieron su espacio en la reflexión comunista, y sea desde la revista *Soviet* (1933) o desde *Argumentos* (1938), importantes intelectuales del PCA, como Rodolfo Ghioldi, primero, o Rodolfo Puiggrós, después, estuvieron más cerca de un marxismo-leninismo que vio en la Revolución de Mayo más el origen de la clase burguesa argentina que el contenido de un mandato a cumplir en el futuro (Cattaruzza 2008, pág. 169). Sin embargo, fue el «marxismo liberal» el que pervivió en el corto y el mediano plazo (Pasolini 2013, pág. 183).

5.6 Algunas consideraciones finales

Para los intelectuales que inicialmente se habían socializado en la experiencia antifascista representada por la AIAPE, el advenimiento del golpe militar de junio de 1943 supuso un encuentro con la realidad beligerante del enemigo político que habían construido desde mediados de la década del treinta. No es que durante los gobiernos de Justo y de Ortiz las persecuciones estuvieran ausentes, pero no es menos cierto que había durante ese período un margen para la acción política y cultural de estos intelectuales, que la revolución de 1943 clausuró de inmediato. Por otra parte, más allá de la infinitamente declamada asociación entre estos gobiernos fraudulentos y fascismo, no eran muchos quienes creían verdaderamente en un proceso de fascistización de la sociedad desde el poder, de modo que aunque la retórica antifascista servía para aglutinar afectividades ideológicas que en su componente mayor se dirigían a concientizar sobre la implicancia de los fenómenos europeos –primero la Guerra Civil Española, luego la Segunda Guerra Mundial– al nivel local el antifascismo aunque potente se presentaba circunscripto a algunos grupos políticos y espacios culturales. Tal vez fue también en esta percepción de que el fascismo no era un peligro inminente que la constitución del frente popular declamado se vio frustrada, y que los radicales no vieron oportuno presentarse como aliados del PCA (cfr. Giménez en este volumen).

Sin embargo, los hechos de 1943 traducirán en la escena local la concreción de una amenaza que se anunciaba desde hacía tiempo atrás, y los tópicos del antifascismo de la época del frente popular alcanzaron nueva vigencia.

De algún modo, los intelectuales de la AIAPE consideraron esperable el desenlace abrupto del gobierno fraudulento de Ramón Castillo, y con ello albergaron la esperanza de instalar de lleno la vigencia de la Constitución Nacional. Pero el resultado significó la clausura de la entidad, y la persecución y encarcelamiento de muchos de sus integrantes, vinculados como estaban en su mayoría a la esfera cultural del Partido Comunista Argentino.

Con todo, los componentes de la retórica antifascista se convirtieron en los elementos dominantes de un estado de la sensibilidad ideológica que tendrá gran peso interpretativo cuando, a partir de mayo de 1945, se instale la convocatoria a la Unión Nacional Antifascista,[18] en un momento en que acaba de producirse la caída Berlín, pero que en el ámbito local se va colocando cada vez de un modo más potente en la figura de Juan Domingo Perón. Quizás por ello esta sensibilidad logre expandirse incluso más allá del ámbito específico del mundo comunista en Argentina, y de hecho, más allá también de la etapa de la lucha antifascista.

18.– *El Patriota*, 12/05/1945

Capítulo 6

El Partido Socialista en los años treinta

Ricardo Martínez Mazzola

En un texto escrito hace ya 20 años, Macor (1995) reconstruía el modo en que en los años sesenta habían ido cambiando las imágenes acerca de los años treinta: a los tópicos usuales con que había sido asociado el período – el fraude, la sumisión a los intereses extranjeros, el avance del fascismo – las miradas provenientes de las ciencias sociales habían contrapuesto la consideración de importantes innovaciones económicas y sociales. El historiador santafesino subrayaba que no se trataba de un relato alternativo sino de la consideración de factores explicativos – la reformulación del modo de desarrollo, subrayada por Aldo Ferrer, el surgimiento de una alianza de clases, postulada por Miguel Murmis y Juan Carlos Portantiero – que reducía los rasgos antes iluminados a lo «meramente coyuntural». El costo de esta mirada, señalado por la crítica que a la obra de Ferrer hicieran Oscar Cornblit y Ezequiel Gallo, y que también podría extenderse al libro clásico de Murmis y Portantiero, era la desatención del marco político en el que se producían dichas transformaciones «estructurales».

Sin embargo, como señala López (2012, pág. 23), en los últimos años la historiografía política, que parece haber recobrado el vigor que le negaron los partidarios de la historia social, ha comenzado a abordar el período produciendo miradas que dan cuenta de la compleja dinámica política tejida en esos años. Los trabajos de Melón Pirro (1996), De Privitellio (2009) o Béjar (2004) iluminan los mecanismos a través de los cuales el régimen establecido a partir de 1930 aseguró su reproducción; mecanismos fraudulentos que, como señalan Macor y Piazzesi (2005), plantean un dilema entre el imperativo de mantenimiento del poder y el de la producción de legitimidad. La imposibilidad de superar ese dilema dará su tono a lo que Halperin Donghi (2004, pág. 80) ha denominado «República en el limbo». Los trabajos que abordan la lógica política han sido acompañados por una creciente producción dedicada a reconstruir la historia de unos partidos políticos que parecen suscitar un interés que antes se limitaba al movimiento

obrero, la Iglesia o las fuerzas armadas. El radicalismo es la fuerza que ha recibido más atención, pero también han sido abordados los conservadores bonaerenses, los socialistas independientes, los demócrata progresistas y los comunistas.

El Partido Socialista (PS) no ha quedado fuera de este nuevo interés por el papel de los partidos en los años treinta. La producción historiográfica de los últimos años ha permitido matizar una mirada que lo veía como una fuerza en decadencia luego del período «glorioso», en el que se había concentrado la mayor parte de las indagaciones, cerrado con los fuertes golpes recibidos a fines de los veinte: la escisión de los socialistas independientes en agosto de 1927; la muerte de Juan B. Justo, fundador y principal líder del partido, en enero de 1928; las derrotas electorales de 1928 y 1930. Los trabajos recientes muestran que, lejos de marcar el inicio de un ciclo descendente que se pronunciaría luego del surgimiento del peronismo, en los primeros años treinta el PS experimentó una nueva e importante fase de crecimiento que le permitió incorporar importantes núcleos de militantes juveniles, que a la vez reforzarían la acción cultural del partido y alimentarían los conflictos internos; proponer respuestas para salir de la crisis económica; a la vez que alcanzar un papel de dirección en las organizaciones del movimiento obrero, lo que agudizaría el viejo problema del vínculo entre partido y organizaciones gremiales. Debe señalarse, sin embargo, que la renovación historiográfica sobre el PS ha desatendido su lugar en la escena política. No existen trabajos específicos sobre su papel en la Alianza Civil de 1931 ni sobre sus posiciones ante el frente popular; tampoco se hallan análisis que se detengan en las prácticas electorales del PS o en su actuación en la arena parlamentaria. Sin embargo, apoyándonos tanto en los trabajos que abordan la dinámica política general del período (Halperin Donghi 2004; Macor 2001; De Privitellio 2001), como en otros que presentan una caracterización general de la historia del PS en ese entonces (Herrera 2007; Graciano 2010) podemos adelantar la existencia de un PS que logró sobreponerse de los golpes de fines de los veinte para convertirse en un actor relevante en la escena política de los años treinta. Pero, como veremos, esa misma inserción político-institucional conllevaría al agravamiento de viejos dilemas, al surgimiento de nuevos conflictos internos y a transformaciones en la identidad socialista.

6.1 El lugar del PS en el sistema político de comienzos de siglo. Breve recapitulación

El PS surgió a fines del siglo XIX como resultado de un proceso de fusión de centros socialistas y sociedades de resistencia a los que se sumó un grupo de intelectuales. Entre estos se destacaba Juan B. Justo, en torno a quien se estructuró un núcleo dirigente de extraordinaria cohesión que rigió los

destinos del partido por décadas y definió los que serían rasgos distintivos del socialismo argentino: centralización de la estructura organizativa, predominio de la acción electoral y parlamentaria, aislamiento del resto de las fuerzas del sistema político. Aricó (1999) y Portantiero (1999) han relacionado ese aislamiento con la adhesión a una concepción racionalista de la política que postulaba una transparente traducción de lo social a lo político. Apoyado en esa concepción el PS siempre consideró que el sistema político argentino constituía una rémora a ser eliminada a través del establecimiento de una «nueva política» organizada alrededor de dos fuerzas delineadas en torno a intereses económicos bien definidos: un partido de la clase obrera, lugar que se asignaba a sí mismo, y un partido de la burguesía «inteligente».

La vida política argentina no siguió la prognosis socialista. Por el contrario, la ampliación democrática establecida a partir de la ley Sáenz Peña dio el gobierno a la Unión Cívica Radical (UCR), una fuerza que, rechazando la vinculación con cualquier tipo de interés particular, se presentaba como representante de la nación toda (Aboy Carlés y Delamata 2001). La modificación producida en el sistema político con el ascenso del radicalismo acentuó el aislamiento de un PS que se mostraba poco dispuesto a dialogar con una fuerza con la que chocaba tanto por motivos doctrinarios, la diferente interpretación de los procesos políticos y de los fines que debían cumplir los partidos, como materiales, la competencia electoral directa en la Capital Federal, principal bastión de los socialistas. Por otro lado, y aunque el acceso de los radicales al gobierno hizo que crecieran entre los socialistas los incentivos para fortalecer los vínculos con las otras fuerzas opuestas a la UCR, la tendencia al aislamiento bloqueó también una confluencia directa del PS con los actores antiyrigoyenistas. Sin embargo, esa confluencia sí fue buscada por un sector de la dirigencia partidaria que, en pos de una política de poder, fracturó el PS y constituyó el Partido Socialista Independiente (PSI) (Martínez Mazzola 2011a). A fines de los años veinte, mientras el nuevo partido experimentaba una expansión que lo transformaría en una pieza clave en la coalición que derribaría al gobierno de Hipólito Yrigoyen, el PS intentaba una difícil búsqueda de autonomía, expresada en la fórmula «solos contra todos», que se mostraría impracticable en un escenario polarizado.

Los socialistas cuestionaban las iniciativas golpistas de la coalición antiyrigoyenista, pero no veían con malos ojos una solución «institucional» que dejara la presidencia en manos del vicepresidente Enrique Martínez. Aunque Yrigoyen renunció y fue reemplazado por Martínez, no fue esa salida «institucional» la que se impuso sino un golpe de Estado que estableció un gobierno encabezado por el general José Félix Uriburu. El PS rechazó el procedimiento de fuerza empleado para librar al país de un «pésimo gobierno», cuestionó la composición «acentuadamente conservadora» del

gabinete de Uriburu e instó a reintegrar prontamente el país a las normas constitucionales.[1]

6.2 El PS ante la dictadura de Uriburu

Lejos de emprender el camino de normalización que reclamaba el PS, el gobierno de la «Revolución» declaró el Estado de Sitio, promulgó una ley Marcial e hizo pública su intención de avanzar en una reforma de la Constitución. Aunque históricamente favorables a una reforma constitucional, los socialistas, temerosos de una posible modificación de la ley Sáenz Peña y de la implantación de formas de representación corporativa, cuestionaron la oportunidad de la reforma. También denunciaron el impulso que desde el gobierno se daba a la conformación de una alianza que reuniera a conservadores, radicales antipersonalistas y socialistas independientes.

Alentado por los miembros de esa coalición, el gobierno convocó a elecciones de gobernador y legisladores en la Provincia de Buenos Aires para el 5 de abril (Halperin Donghi 2004, pág. 45). El PS decidió participar y, reclamando el fin de las detenciones por causas políticas –para fines de 1930 habían sido detenidos centenares de militantes socialistas, entre ellos dirigentes como Alfredo Palacios y Mario Bravo– y el levantamiento del Estado de sitio y la ley marcial, inició las tareas electorales con un gran acto en la ciudad de La Plata en el que Alfredo Palacios sintetizó la posición del PS: «ni oligarquía ni demagogia, menos aún dictadura».[2] Los socialistas enfrentaban nuevamente un escenario polarizado y, como en otras ocasiones, intentaban señalar que se trataba de una falsa configuración que enfrentaba a los conservadores «de fondo y de forma» con los radicales, conservadores de fondo aunque no de forma. Denunciaban que se trataba de «dos ramas del mismo tronco oligárquico» que debían ser repudiadas por igual por el pueblo trabajador.[3]

Días antes de la elección, Uriburu hizo público un manifiesto en el que, dejando ver cierta preocupación por un posible triunfo radical, lamentaba que el pueblo pudiera caer en el olvido de los descalabros del gobierno depuesto. Los socialistas rechazaron tal interpretación argumentando que lo que el presidente tenía por olvido era la aversión incontenible que sentía el pueblo por una oligarquía reaccionaria que pretendía resurgir con sus viejos vicios y la expresión del temor de que las grandes conquistas democráticas pudieran ser suprimidas.[4] Esa valoración positiva del sentido del voto radical sería reiterada luego de que la fórmula de la UCR obtuviera el triunfo: este se explicaba por la protesta ante la política desacertada del gobierno, la

1.– *La Vanguardia*, 07/09/1930.
2.– *La Vanguardia*, 05/03/1931.
3.– *La Vanguardia*, 21/03/1931.
4.– *La Vanguardia*, 01/04/1931.

restricción de las libertades, el desprecio por el sufragio universal.[5] Aunque con ciertas reticencias, el discurso del PS delineaba un escenario político que oponía oficialismo a oposición, lo que los acercaba a los radicales.

Ante la derrota, el gobierno provisional decidió «fugar hacia delante» dictando dos decretos: el primero desconocía los comicios bonaerenses; el segundo convocaba a elecciones generales para el 8 de noviembre. Días después el Comité Ejecutivo del PS emitía una declaración reclamando la «constitución inmediata de los poderes en la Provincia de Buenos Aires», el levantamiento del Estado de sitio y la abrogación de la ley marcial.[6] Alzando esas banderas, el PS comenzó a organizar una gran «demostración cívica» e invitó a otras fuerzas opositoras a participar de la misma.[7] Cuando el Ministerio del Interior denegó el permiso para la realización del acto, el PS manifestó su «profunda pena patriótica» e hizo constar su rechazo, pero acató. A pesar de que sectores de la militancia socialista propusieron insistir con la realización del acto y desconocer la prohibición gubernamental, el PS no adoptó ninguna actitud confrontativa que fuera más allá de reunir firmas avalando una carta que pedía al gobierno avanzar en la «normalidad institucional».[8] Aunque el PS sostenía que el país clamaba por «un cambio radical» parecía seguir confiando, aun en unas condiciones de restricción política que no deja de denunciar, en que este cambio podría realizarse «en forma inteligente, progresiva, sin situaciones de caos y destrucción».[9] Como señala Iñigo Carrera (2005, págs. 253-254), para mantener su imagen de «fuerza constructiva», el PS dejaba de lado a quienes consideraban necesario apropiarse de la calle. Aún más clara era la toma de distancia respecto de la resistencia armada que emprendieron algunos radicales. Cuando en julio de 1931 se produjo un alzamiento en la provincia de Corrientes el PS negó las acusaciones de haberle dado su apoyo.

Con las elecciones en el horizonte el PS convocó a un Congreso Extraordinario cuyo tema excluyente sería la actitud a adoptar ante los comicios. A los pasos habituales, como la aprobación de la plataforma electoral, se agregaba en esta ocasión la posibilidad de establecer una alianza con el PDP. Se trataba de un hecho inédito ya que, a pesar de que desde el II Congreso realizado en 1898 el estatuto del PS autorizaba la realización de alianzas, estas nunca habían tenido lugar. Actuando *ad referéndum* del Congreso, la dirección socialista dio importantes pasos hacia el acuerdo, lo que generó fuertes críticas en las filas partidarias. La expresión más clara de rechazo la dio la Federación Provincial Santafecina, que afirmó que se trataba de una fuerza que compartía las prácticas de la «política criolla» y levantaba

5.– *La Vanguardia*, 14/04/1931.
6.– *La Vanguardia*, 13/05/1931.
7.– *La Vanguardia*, 09/06/1931.
8.– *La Vanguardia*, 09/07/1931.
9.– *La Vanguardia*, 16/07/1931.

banderas reaccionarias.[10] Desde la dirección se respondió que era necesario ser flexibles, rechazando lo que se consideraba eran rasgos de intransigencia.[11] En el Congreso se enfrentaron quienes proponían constituir una Alianza encabezada por una fórmula presidencial mixta entre PDP y PS; y quienes, retomando los planteos del movimiento estudiantil (Giménez y Mazzola 2013), proponían avanzar en «una acción conjunta de todas las fuerzas, políticas, gremiales y universitarias en pro de la más breve vuelta a la normalidad».[12] Finalmente la alianza fue aprobada por amplio margen. También se aprobó la fórmula presidencial Lisandro de la Torre-Nicolás Repetto. Días después el PS inició su campaña llamando «a todas las fuerzas democráticas y liberales», a los trabajadores y los universitarios.[13] La seña distintiva de la alianza pasaba por la defensa de la democracia representativa y de la vigencia de la ley Sáenz Peña. El resultado, resistido desde sectores de la militancia socialista, fue la acentuación del perfil legalista y liberal del PS y el debilitamiento de su apelación a la clase obrera.

Ese perfil liberal democrático sería el que, a pesar de que la Plataforma de la Alianza incluía una detallada enumeración de reformas sociales, marcaría el tono de la campaña electoral. A lo largo de la misma, y quizás con el fin de recibir el apoyo de un radicalismo al que a diferencia de otras ocasiones no se hostilizaba, las intervenciones socialistas construyeron una oposición binaria entre la coalición demócrata socialista y las fuerzas conservadoras, apoyadas por el gobierno provisional.[14] La constitución de la alianza fue incluso integrada a la narrativa socialista acerca del progreso político, señalando que con ella se clarificaba el panorama político argentino, que marchaba, por fin, hacia la contraposición entre «izquierdas» y «derechas».[15]

Finalmente, la esperada confrontación se produjo, favorecida por la decisión radical de abstenerse en los comicios del 8 de noviembre, debido a que sus principales dirigentes estaban vetados. La Alianza declaró que el veto quebrantaba «principios esenciales de nuestra organización democrática y constitucional» pero, para indignación del radicalismo, reafirmó su decisión de concurrir a las elecciones «para contribuir a la más pronta normalización de la república y defender las instituciones democráticas amenazadas».[16] Esa decisión se mantuvo incluso frente a lo que se preveía como un escandaloso fraude. Los miembros de la Alianza denunciaron repetidamente el robo de libretas y el uso de la fuerza por las autoridades y solicitaron la anulación de los comicios en dos distritos en los que los abusos

10.– *La Vanguardia*, 18/05/1931.
11.– *La Vanguardia*, 22/08/1931.
12.– *La Vanguardia*, 30/08/1931.
13.– *La Vanguardia*, 01/09/1931.
14.– *La Vanguardia*, 16/09/1931.
15.– *La Vanguardia*, 04/09/1931.
16.– *La Vanguardia*, 08/10/1931.

se auguraban especialmente escandalosos, Mendoza y Provincia de Buenos Aires. Su voz no encontró eco en el gobierno y el proceso electoral siguió adelante. El resultado fue un claro triunfo de las fuerzas de la Concordancia que se impusieron en todo el país salvo Capital Federal y Santa Fe (cfr. López en este volumen).

Aun sin alcanzar el triunfo, las expectativas socialistas no fueron totalmente defraudadas: el PS obtuvo 43 diputados[17] y 2 senadores, la mayor representación parlamentaria de su historia. Ello se explicaba en gran parte por la abstención radical pero también por el crecimiento de un PS que había aumentado el número de centros, de 252 a 393 y de afiliados, de 9.061 a 19.223. En base a la importante inserción institucional obtenida el PS se propuso tener una voz activa en el escenario político. Pero la primera iniciativa en esa dirección, un proyecto de intervención a la Provincia de Buenos Aires, fue rechazada por el voto conjunto de las fuerzas oficialistas. La derrota en un proyecto capaz de afectar los dispositivos del poder, llevó al PS a recostarse sobre la agenda reformista impulsando, y en ocasiones logrando aprobar con el apoyo de ciertos sectores del oficialismo, algunos proyectos en defensa de los trabajadores: reducción de la jornada laboral y establecimiento del sábado inglés, mejoras en condiciones de trabajo y, tal vez lo más significativo, establecimiento de la indemnización por despido (Matsushita 1986, pág. 102).

Pero los logros se alcanzaban al costo de difuminar la oposición con el gobierno. Aunque lograba obtener la sanción de leyes que implicaban avances en la agenda reformista, y usaba su voz para intervenir en los debates como el de la «ley de Carnes», el PS se mostraba impotente, y aun poco dispuesto, para emplear su peso institucional para combatir al régimen autoritario y fraudulento. La incomodidad con que muchos militantes observaron las vacilaciones del PS frente a los gobiernos de Uriburu y Justo sería, junto a la recepción de las posiciones de sectores del movimiento socialista internacional que cuestionaban la línea reformista, decisiva en el fortalecimiento de una oposición de izquierda que en la primera mitad de los años treinta cuestionaría fuertemente la línea partidaria.

6.3 La búsqueda de una alternativa revolucionaria y el surgimiento del Partido Socialista Obrero

El sector reformista encabezado por Justo, que muy temprano adquirió el predominio en el PS, siempre convivió con sectores de «izquierda» que proponían la adopción de un curso revolucionario. Más allá de las diferencias que podrían trazarse entre los sindicalistas, los internacionalistas y los

17.– A los 22 correspondientes a la mayoría de ciudad de Buenos Aires, se agregaban 14 por la minoría de provincia de Buenos Aires, 5 por la de Córdoba, 2 por la de Mendoza y 1 por la de San Luis.

terceristas, todos ellos compartían tanto el rechazo de la línea legalista y parlamentarista emprendida por el PS como la crítica a la débil inserción del PS en el movimiento obrero (Herrera 2006, pág. 128). Pero, así como no es posible filiar una continuidad entre las citadas disidencias, tampoco puede trazarse una entre ellas y la «corriente de izquierda» que surge a comienzos de los años treinta. Esta se diferencia de aquellas, fundamentalmente metropolitanas, por el rol que cumplen las federaciones del interior del país y también por el papel que en su desarrollo adquieren corrientes exteriores al PS, los comunistas, pero también grupos trotskistas recientemente expulsados del PC (Martínez 2012, págs. 23-24).

Aunque un primer embrión de la «corriente de izquierda» puede situarse en 1929, con la aparición de la revista *Bandera Roja* que promovía la orientación del PS en una línea revolucionaria fundada en el marxismo, y las voces críticas de los «revolucionarios» se habían hecho oír durante el VI Congreso Extraordinario para cuestionar la política de «colaboración» con el PDP, el hito decisivo para su consolidación se da en 1932 con la publicación de *La conquista del poder* de Benito Marianetti. A lo largo del libro, el máximo dirigente de la Federación Socialista Mendocina (FSM), adoptaba una perspectiva leninista para proponer una mirada muy alejada de las posiciones del PS sobre la democracia y el Estado. Marianetti veía a la primera como un simple medio para el acceso al poder, cuando no como una ficción, y rechazaba que el Estado pudiera ser neutro o aun expresar un equilibrio de clases. Aun más disruptivos eran sus proyectos de militarización de la estructura del PS y sus planes insurreccionales (Herrera 2006, págs. 129-130). En octubre de 1932 la FSM hizo suyas las posiciones de su secretario general y solicitó a la dirección del PS la convocatoria a un Congreso Extraordinario para discutir el cambio de la táctica partidaria. Haciéndose eco del debate, la revista *Claridad*, que aun sin manifestar un alineamiento partidario mostraba visible simpatía por las posiciones de la izquierda socialista, convocó a una encuesta titulada «¿Debe cambiar de táctica el Socialismo?».[18] Abriendo la encuesta *Claridad* publicó una carta en la que la FSM proponía la organización de una «fuerza militar de defensa» del PS, la obligatoriedad de inscripción sindical para todos los afiliados, la orientación de la práctica de todos los legisladores socialistas hacia la realización del «Programa Máximo». La respuesta de la dirección se centró en el primer punto para subrayar que la adopción de una estructura militar suponía cambiar la educación del pueblo por su formación militar.

Las posiciones de la FSM encontraron apoyo en la juventud socialista y en núcleos de militantes que provenían del movimiento de la Reforma Universitaria. Considerando que las condiciones de autonomía en las que se había basado la militancia estudiantil reformista habían concluido con

18.– *Claridad*, n.º 261, enero de 1933.

la represión implantada por el gobierno de Uriburu, figuras como Julio V. González, Deodoro Roca, Arturo Orgaz, Gregorio Bermann y Alejandro Korn habían ingresado a las filas del PS (Graciano 2008, pág. 156). Pero, aunque la voluntad de resistencia había pospuesto las suspicacias ante la política tradicional, no las había borrado del todo; los reclutas provenientes del reformismo no adhirieron a las posiciones del núcleo dirigente sino que, casi unánimemente, apoyaron las posiciones de la izquierda del PS. Entre los nuevos reclutas se hallaba el presidente de la FUBA y secretario general de la Federación Juvenil Socialista, Ernesto Giudici, quien hacia 1933 comenzó a publicar la revista *Cauce. Órgano de la izquierda socialista*. Combinando la retórica del marxismo revolucionario con apelaciones al heroísmo juvenil que remitían a la tradición del reformismo universitario, *Cauce* apostrofó duramente la línea electoral y reformista del PS, cuestionó el peso que en sus filas adquirían la pequeña y gran burguesía y llamó a transformar la estructura organizativa.

Las posiciones de la izquierda fueron batidas en el XXII Congreso del PS realizado en mayo de 1934 en Santa Fe. Luego de duros debates, en los que la dirección partidaria denunció la «acción disolvente de la propaganda comunista», la vieja organización territorial y la táctica gradualista fueron ratificadas (Luzzi 2002, págs. 248-249). Una parte de la «corriente de izquierda», en la que se destacaba la figura de Giudici, denunció que el PS no luchaba por la emancipación de los trabajadores sino por la consolidación del dominio de la burguesía, y que solo desde el Partido Comunista (PC) era posible trabajar por la revolución proletaria. El grupo mayoritario, liderado por Marianetti, permaneció en el PS y continuó predicando en favor de su transformación. El principal portavoz de esa prédica fue *Izquierda*, un periódico que aunaba la afirmación de las convicciones marxistas y revolucionarias con la defensa del papel renovador de la juventud. En esta condición el periódico denunciaba la disolución de la Confederación Juvenil Socialista (CJS), ordenada por el CE del PS, a la vez que abría sus páginas para que su conducción denunciara que, con ese acto, el PS perdía el contacto con los hombres nuevos, que eran justamente quienes podían imponer un nuevo ritmo al socialismo.[19]

Si en los primeros números de *Izquierda* las cuestiones de la juventud y el movimiento estudiantil ocupaban un lugar importante, a partir de comienzos de 1935 su prédica adoptó un tono más estrictamente clasista y antiimperialista, a la vez que insistió en la necesidad de convocar a un Congreso Extraordinario que reformara la organización del PS. Se proponía la adopción de una estructura centralizada y celular, lo que era justificado tanto por el contexto represivo como por la finalidad de poner las decisiones del partido en manos de los militantes y no de los simples afiliados, tal y

19.– *Izquierda*, n.º 1, octubre de 1934.

como sucedía con la organización territorial coronada por el voto general. El Congreso Extraordinario solicitado por la izquierda tuvo lugar, pero en él las propuestas de reorganización planteadas por la izquierda, a las que la dirección presentaba como propias de la organización comunista, fueron derrotadas. Contra ellas se alinearon no solo los sectores del partido que apoyaban a la dirección sino también la mayoría de la militancia gremial socialista que, como veremos más adelante, aunque compartía con la izquierda la propuesta de una mayor vinculación entre PS y movimiento obrero, rechazaba un modelo centralizado que subordinaba la definición de política gremial al CE del partido.

El rechazo de estas propuestas no motivó, de todos modos, la ruptura del PS. Los miembros de la corriente de izquierda permanecieron en sus filas y centraron el eje de su argumentación en la conformación de un frente popular que ligara al PS con la UCR y el PC. La prédica pareció mostrarse fructífera; en junio de 1936 el XXIII Congreso del PS aprobó la formación de un frente popular democrático. Sin embargo, pronto se hicieron oír las críticas de una izquierda que acusaba al CE de desatender las resoluciones del Congreso. Desde la dirección se respondió haciendo referencia a la fría recibida que la propuesta hallaba en las filas radicales, a la vez que subrayando que un frente democrático solo podía reunir a fuerzas que rechazaran toda dictadura, ya fuera de derecha o de izquierda, lo que descartaba al PC. Ante lo que percibían como dilaciones de la dirección nacional del PS los socialistas mendocinos establecieron un embrión de frente popular a nivel provincial. La medida fue tomada como un acto de indisciplina por parte del CE que, en respuesta, disolvió la FSM. A comienzos de 1937 los disidentes encabezados por Marianetti fundaron el Partido Socialista Obrero (PSO).

Finalmente, y a pesar del acuerdo de muchos sectores en la necesidad de transformar al PS, la disputa con las corrientes de izquierda se cerró con el fortalecimiento del núcleo dirigente encabezado por Repetto. Ello, al menos en parte, se explica por la distancia que, respecto de la izquierda, mantuvieron los cuadros gremiales del PS (Tortti 1989, pág. 27).

6.4 La cuestión gremial. Viejos problemas, nuevos dilemas

La relación entre partidos y organizaciones gremiales, un tema espinoso en la historia del movimiento socialista internacional, fue también conflictiva en la Argentina. Las tensiones, que antecedieron a la propia fundación del PS, alcanzaron un punto máximo con la expulsión, en 1906, de quienes proponían a los sindicatos como los espacios privilegiados de organización de los trabajadores. Sin embargo, la partida de los sindicalistas no terminó con las tensiones entre quienes postulaban la autonomía entre organizaciones gremiales y partidos socialistas y quienes planteaban la

necesidad de construir un movimiento obrero socialista (Martínez Mazzola 2011b). En apariencia la disputa fue zanjada por el decimocuarto Congreso del PS, reunido en Avellaneda de julio de 1918, al aprobar una Declaración que afirmaba que para que existiera armonía y unidad de miras entre el Partido y las organizaciones gremiales, dichas organizaciones no debían «hostilizarse ni tampoco confundirse, siendo conveniente que permanezcan independientes unas de otras para la mejor actuación dentro de cada una de sus esferas» (Oddone 1975, pág. 392).

Sin embargo, como señala Matsushita (1986, pág. 65), no todos los socialistas interpretaban del mismo modo una declaración que reunía dos imperativos contradictorios: la unidad de miras entre movimiento obrero y partido, y su independencia. Ello dio lugar a la tensión entre gremialistas socialistas «partidistas» y gremialistas socialistas «prescindentes». En los años veinte la Comisión Socialista de Información Gremial (CSIG), único espacio de articulación de la acción gremial socialista, había estado en manos de los últimos, lo que hizo más fácil la convivencia con la corriente sindicalista que predominaba en el movimiento obrero. Esto cambió cuando, a comienzos de los treinta, ganaron importancia dirigentes socialistas que, como el dirigente de los municipales Francisco Pérez Leirós, planteaban la necesidad de establecer un vínculo más estrecho entre partido y organizaciones gremiales. El fortalecimiento del sector «partidista» del gremialismo socialista puede estar relacionado con la crisis económica que, con su secuela de desocupación, debilitaba la potencia de las huelgas haciendo más tentador recibir el apoyo de un partido que había más que recuperado su fuerza parlamentaria; con el hecho de que la represión llevada adelante por el gobierno militar hacía más difícil sostener la separación entre cuestiones económicas y cuestiones políticas; y también con el peso que dentro del PS tenían las corrientes de izquierda que proclamaban la necesidad de que el PS adquiera un rol más activo en el movimiento obrero. Los sectores «partidistas» del gremialismo socialista hicieron oír su voz en el XXI Congreso del PS, realizado en mayo de 1932, en el que criticaron la poca importancia que la dirección partidaria había dado al movimiento gremial.[20] Las críticas encontraron eco en lo organizativo – se amplió el número de delegados del CE a la CSIG y se creó un Comité de Defensa Obrera, destinado a prestar apoyo jurídico a trabajadores detenidos – y en lo doctrinario se reinterpretó la Declaración de Avellaneda rechazando las lecturas en clave de neutralidad política y subrayando que sin los principios socialistas el movimiento obrero era débil y caótico.

El cambio creó tensiones con la corriente sindicalista, predominante en la Confederación General del Trabajo (CGT). Estas se vieron potenciadas por el diferente modo de posicionarse frente al fascismo: mientras la CGT recha-

20.– *La Vanguardia*, 26/05/1932.

zaba que la amenaza fascista fuera de tal gravedad que hiciera necesario ingresar al campo político para combatirla, a la vez que señalaba que el de Justo era un gobierno democrático que casi no había obstruido las actividades del movimiento obrero, los gremialistas socialistas emparentaban a este con el fascismo y proclamaban que la gravedad de la amenaza hacía necesario abandonar toda consideración de prescindencia política. Las posiciones de los socialistas fueron derrotadas en una CGT que acentuó sus posiciones sindicalistas. Sin embargo, esto empezó a cambiar luego de que la dirección de la Unión Ferroviaria (UF), en manos de Antonio Tramonti, secretario general de la CGT, fue duramente cuestionada por su débil respuesta a las bajas salariales impuestas por las empresas ferrocarrileras. El reemplazo de Tramonti por José Domenech, apoyado por los socialistas, enfrentó a la UF, por lejos la más importante de las organizaciones que componían la CGT, a la dirección de la Confederación. El conflicto derivó en la ruptura de la central obrera, conformándose la CGT Independencia, bajo la dirección de Domenech, y la CGT Catamarca, de predominio sindicalista y que luego adoptó el nombre de Unión Sindical Argentina.

Los socialistas tenían un gran peso en la CGT Independencia; sin embargo no se trataba de una central embanderada con el PS. Así lo impedían el Estatuto de la CGT y la Declaración de Avellaneda. Asimismo, se oponía un sector de la dirigencia de la Confederación, entre ellos el propio Domenech, que sostenía que la misma debía limitarse a los problemas económicos. Otro foco de tensión estaba dado por las fuertes críticas que los comunistas, de creciente peso dentro de la CGT Independencia, hacían a una dirección que consideraban excesivamente conciliadora con el gobierno. Paradójicamente el fortalecimiento del PC, y la posibilidad de enfrentamientos con el PS, reforzó las posiciones de quienes consideraban necesario reafirmar una política de neutralidad que aventara el riesgo de división de la organización. Política que también se vio favorecida por la prohibición, establecida por el gobierno, de toda participación de los gremios en «cuestiones políticas o religiosas». A este retorno a ciertas políticas de prescindencia – que, como subraya Matsushita (1986, pág. 179) no se trababa de la misma que en los 20 ya que no rechazaba el apoyo de los partidos pero lo limitaba a cuestiones económicas – se opondrían tanto los comunistas como sectores del PS, encabezados por Pérez Leirós y por el dirigente de los empleados de Comercio, Ángel Borlenghi, que mantenían la necesidad de que el movimiento obrero interviniera en la escena política.

Hacia 1939, el combate antifascista, que aun con diferencias había brindado banderas compartidas, pasó a ser un terreno de disputa. La firma del pacto germano soviético en 1939 y la consiguiente caracterización de la Guerra Mundial como inter-imperialista fue seguida del cuestionamiento de los comunistas a la dirección de la UF, a la que estimaba excesivamente contemplativa con los capitalistas británicos. La tensión se trasladaría al

seno de la CGT cuando esta, con el aval de los socialistas, adoptó una postura pro-aliada. Sin embargo, la invasión alemana a la URSS y el consiguiente giro del PC (cfr. Pasolini en este volumen), hicieron posible reestablecer el vínculo entre los comunistas y aquellos gremialistas socialistas que, oponiéndose a Domenech, bregaban por un más activo involucramiento de la CGT en el combate antifascista y la oposición a un gobierno, el de Castillo, que acentuaba su carácter represivo. El enfrentamiento entre «prescindentes» y «partidistas» alcanzó su punto máximo en marzo de 1943 cuando el Segundo Congreso de la CGT concluyó en la fractura de la central obrera. Nacían así la CGT n.º 1 y la CGT n.º 2. En la primera, encabezada por Domenech, quien había vuelto a afiliarse al PS en 1942, revistaban los partidarios de la prescindencia, ya fueran socialistas o sindicalistas; en la segunda, liderada por Borlenghi, quienes proponían fortalecer el vínculo entre organizaciones gremiales y partidos, socialistas y comunistas. Consecuentemente con esa voluntad de vinculación, la CGT n.º 2 invitó al PS a participar del acto del 1º de Mayo. Sin embargo, el PS desestimó la invitación. Siguiendo a Matsushita (1986, págs. 246-247) podemos encontrar razones para ese paradójico gesto: la presencia de afiliados socialistas en la CGT n.º 1, a los que la dirección no desearía desairar; el temor a la influencia de sectores vinculados al PC, de creciente peso en la CGT n.º 2; y, lo más decisivo, el temor al excesivo peso que la dirigencia gremial socialista podía ejercer sobre el partido. A comienzos de 1943, y con el fin de preservar su predominio y su influencia, la dirección socialista rechazaba el brazo que le tendía el movimiento obrero; poco tiempo después, sería ese movimiento obrero desairado el que le daría la espalda al PS.

6.5 ¿Reformismo radical, revolución constructiva? La apuesta de los «planistas»

Pero 1930 no solo implicó un cambio en el escenario político y gremial, sino también, y mucho más inmediatamente, la transformaciones de un mundo económico duramente afectado por la crisis iniciada en octubre de 1929. Al comienzo, los socialistas interpretaron que se trataba de una situación transitoria de la que se saldría en base a las políticas de librecomercio y ortodoxia monetaria. Sin embargo, con el correr de la década comenzaron a oírse las voces de quienes sostenían que se enfrentaban a la transformación de un sistema capitalista que, abandonando su fase individualista, avanzaba hacia formas de capitalismo monopolista y concentrado. Estas posiciones, consolidadas en el seno de la Internacional Obrera y Socialista, encontraron eco en las filas del PS argentino dando nacimiento a una corriente «planista» que, aunque compartía con la «corriente de izquierda» la necesidad de afrontar el problema del poder, cuestión descuidada por el viejo PS, proponía hacerlo en clave democrática y evolutiva (Portantiero 2002, pág. 235).

El sector renovador, que tenía como principales referentes a los diputados nacionales Rómulo Bogliolo y José Luis Pena, ocupó posiciones relevantes en un partido que buscaba salir de su crisis a partir de las tareas de formación de la militancia. Desde la *Revista Socialista*, creada en 1930 bajo la dirección de Bogliolo y que rápidamente se tornó en el principal órgano de discusión teórica del PS y la Escuela de Estudios Sociales Juan B. Justo, un espacio destinado a la formación de los militantes, los renovadores difundieron las posiciones de un heterogéneo conjunto de pensadores que postulaban la necesidad de abandonar la ortodoxia socialista para avanzar en la formulación de un serie de reformas que delinearan una salida a la crisis en dirección socialista. Del conjunto destacaba la figura de Henri de Man y los planistas belgas que, cuestionando la centralidad que el viejo socialismo había dado a las reformas distributivas, proponían la adopción de un programa de reformas orientadas a hacerse de la dirección del proceso productivo (Portantiero 2005, pág. 314). Los «neosocialistas» daban gran importancia a la acción política y advertían que la forma «organizada» del capitalismo hacía posible la moderación de sus crisis, lo que los llevaba a descartar que bastara esperar su derrumbe para que el socialismo lo reemplazara. Por el contrario, afirmaban, sería solo la acción consciente de las clases trabajadoras – término que englobaba a la clase obrera pero también a una clase media que era valorada por su papel decisivo en el proceso de dirección de la producción – la que podía conducir el proceso de racionalización capitalista en la dirección de una socialización progresiva (Tortti 1995, págs. 212-213).

En contraste con el fuerte societalismo que había caracterizado a la vieja dirigencia del PS, y en particular a Juan B. Justo, los planteos «planistas» implicaban una fuerte confianza en un Estado capaz de coordinar el funcionamiento de una economía mixta a partir del diseño de un plan general. Esa confianza se dejaba ver en el proyecto, presentado por Bogliolo al Parlamento en 1932, de creación de un Concejo Económico Nacional que definiría los lineamientos generales para los distintos sectores de la economía. El planteo mantenía la centralidad del sector agrario, pero proponía transformarlo radicalmente a partir de la liquidación de los latifundios y la redistribución de la tierra, así como procuraba impulsar las industrias ligadas al consumo interno. Formulaba también la nacionalización de servicios públicos, recursos mineros y la creación de instituciones reguladoras del comercio exterior y el crédito (Tortti 1995, pág. 215).

El proyecto de creación del Concejo Económico Nacional no encontró eco en el Parlamento. A ello contribuyó la mayoría conservadora, que se mostraría sólo un poco menos reacia cuando las propuestas de planificación salieran desde el gobierno que apoyaba, pero también un PS en el que el centro del debate pasaba por el conflicto entre la vieja dirigencia y la «corriente de izquierda». Apelando a las «reformas de estructura» y a una

«revolución constructiva», los renovadores buscaron tomar distancia tanto del viejo reformismo del PS, que pensaba el avance hacia el socialismo a través de la acumulación de pequeñas reformas, como del «catastrofismo» de los revolucionarios. Sin embargo, no ocuparon una posición equidistante sino que, en las votaciones decisivas, apoyaron a la dirección en el enfrentamiento con la corriente de izquierda. Tal vez fue la vigencia de ese alineamiento la que permitió que en 1938 el XXIV Congreso del PS, el primero después de la expulsión de esa corriente, aprobara un ambicioso «Plan de defensa nacional» basado en las propuestas de los «planistas». Partiendo del reconocimiento de las nuevas funciones del Estado y el señalamiento de los riesgos asociados al capital extranjero, el programa proponía la nacionalización del petróleo, la electricidad, el gas, los teléfonos y los transportes. Estos serían suministrados por organismos nacionales del estilo de YPF, aunque, en línea con la tradición socialista, el programa señalaba que las prestaciones también podían recaer en autoridades locales o cooperativas. Portantiero (2002, pág. 241) considera al «Plan de Defensa Nacional» como el punto más alto del proceso de adaptación del PS a los cambios suscitados por la crisis argentina y la discusión nacional e internacional. La herencia de Justo, argumenta, parecía por fin «encontrar una reinterpretación acorde con el fin del marco ideológico y del liberalismo político».

Sin embargo la transformación se vería ralentizada y aun detenida por la consolidación del eje fascismo-democracia como una cuestión excluyente, capaz de relegar toda otra preocupación de la agenda de debate. Absortos en la prédica antifascista, lamenta Portantiero (2003, pág. 14), capaz de movilizar a las clases medias pero no tanto a los obreros, los socialistas se mostrarían incapaces de profundizar la perspectiva social y nacional que hacia fines de los años treinta se expresaba en la consigna «Para una grande Argentina, económicamente próspera, políticamente libre y ampliamente democrática» (citado en Tortti 1995, pág. 220).

6.6 Una salida trunca. Socialismo, antifascismo y frente popular

Aunque solo alcanzaría centralidad absoluta con posterioridad, el combate al fascismo constituía un tópico del discurso socialista desde los años veinte. Ya en los treinta, el PS apeló a él para reforzar su denuncia de los gobiernos de la Concordancia: el horizonte europeo no solo brindaba una caracterización del mal sino también una del instrumento político con el que enfrentarlo, un frente popular que abarcara no solo a la izquierda sino a todas las fuerzas democráticas y progresistas. Durante 1935 se sucedieron dos transformaciones que permitían pensar que la constitución de una alianza que reuniera a todas las fuerzas democráticas y opuestas a los gobiernos conservadores era factible: por un lado, la dirección del radicalismo encabezada por Alvear decidió, cediendo a la presión de sectores concurrencistas en sus

filas, abandonar la política de abstención; por otro, el Partido Comunista argentino hizo suyas las definiciones aprobadas por el VII Congreso de la Internacional Comunista y abandonó la política de «clase contra clase» en pos de una de frente popular (cfr. Giménez y Pasolini en este volumen). El 1º de Mayo de 1936, y por primera vez en la historia, la CGT realizó un acto conjunto con los partidos políticos opositores; en el palco y junto a Domenech, secretario general de la CGT, destacaban las figuras de Alvear, Repetto y de la Torre. *La Vanguardia* subrayaba que era la primera vez en que «todas las fuerzas obreras y democráticas» se reunían en la convocatoria y lo explicaba por el desafío de los regímenes dictatoriales, que había hecho imperioso que «los trabajadores y hombres libres» se unieran tras de las banderas de la democracia y la justicia social.[21]

Semanas después el XXIII Congreso del PS aprobó impulsar la formación de «un frente popular democrático» al que serían invitadas «todas las fuerzas democráticas y obreras, sindicales y políticas».[22] El curso unitario pareció imponerse en una Cámara de diputados en la que la conjunción de radicales, socialistas y demócratas progresistas alcanzó una mayoría que permitió impugnar los diplomas de los legisladores electos en comicios fraudulentos. Pero mientras en el Parlamento Nacional las fuerzas opositoras adoptaban un común curso de acción, en el Concejo Deliberante porteño los socialistas denunciaban duramente el apoyo de los radicales a la renegociación con la Compañía Hispano Argentina de Electricidad (CHADE). El escándalo que salpicó a la UCR no hizo más que acentuar la fuerte desconfianza que los socialistas mantenían por una fuerza a la que reprochaban haber llevado al fracaso el experimento democrático abierto con la ley Sáenz Peña. Luego de meses en que había predominado el discurso frentista, a fines de 1936 la prensa y las tribunas socialistas se vieron colmadas de intervenciones que asociaban a radicales y conservadores como «facciones tradicionales» frente a las cuales el PS debía continuar su tarea de educación política popular. No debe sorprender entonces que en mayo de 1937, y luego de la expulsión de los sectores de izquierda que bregaban por la concreción del frente popular, el VIII Congreso Extraordinario resolviera que el PS concurriría a las elecciones presidenciales del mes de septiembre con candidatos propios.[23] En los comicios, escandalosamente fraudulentos, la UCR, que presentó la fórmula Marcelo T. de Alvear, Enrique Mosca, apoyada por el PC y el PSO, obtuvo 814.750 votos frente al 1.094.685 que obtuvieron Roberto Ortiz y Ramón S. Castillo, candidatos de la «Concordancia». En una elección casi plebiscitaria el PS logró sólo 50.000 votos.

La dura derrota reactivó los esfuerzos socialistas por alcanzar un entendimiento con otras fuerzas opositoras, en particular el radicalismo. En

21.– *La Vanguardia*, 01/05/1936.
22.– *La Vanguardia*, 01/07/1936.
23.– *La Vanguardia*, 30/05/1937.

noviembre el Consejo Nacional del PS propuso avanzar en un «entendimiento respetuoso y leal entre organizaciones políticas y obreras de tendencia democrática».[24] La iniciativa obtuvo la adhesión del PDP pero no la de una UCR que apostaba a que las promesas democráticas de Ortiz abrieran una salida política a los fracasos sucesivos de las estrategias concurrencistas y abstencionistas (De Privitellio 2001, pág. 130; Giménez en este volumen). El PS no compartía esas expectativas y denunciaba que el nuevo gobierno no hacía nada por desterrar «el escándalo, el fraude y la violencia».[25]

Esa evaluación comenzó a cambiar cuando, a comienzos de 1940, el gobierno de Ortiz decidió la intervención a la Provincia Buenos Aires (cfr. López en este volumen). Los socialistas celebraron la medida, afirmando que no había otra forma de salir de la situación reinante en la provincia y que todo el país debía aplaudir el desplazamiento del gobierno fraudulento y autoritario de Manuel Fresco.[26] Pero aclararon que «en la nueva era que, al parecer, se inicia», tan importante era resolver el problema del fraude como el de la corrupción.[27] La acusación se dirigía al gobierno pero también, y quizás particularmente, a un radicalismo al que el PS estaba por enfrentar en elecciones legislativas. Durante la campaña electoral, los llamados a votar por la decencia y contra la deshonestidad se antepusieron a las intervenciones programáticas. La prédica rindió frutos relativos: la UCR obtuvo el triunfo pero el PS recuperó muchos de los votos perdidos dos años antes.

Enarbolando la bandera de la honestidad los socialistas acompañaron activamente las denuncias de corrupción en la compra de terrenos en el Palomar. Halperin Donghi (2004, pág. 242) ha explicado la insistencia socialista en una campaña que, al debilitar al gobierno de Ortiz, podía desactivar sus apuestas aperturistas, por la desconfianza respecto de un proceso de normalización política que daría el gobierno al radicalismo. Es posible también que los socialistas privilegiaran su tradicional papel de fiscales de la república y portavoces de una conciencia moral superior. Las denuncias llevaron a Ortiz, quien ya se encontraba de licencia por motivos médicos, a presentar su renuncia el 22 de agosto. Los legisladores socialistas, lo mismo que casi todo el Congreso, la rechazaron y llamaron a Ortiz a reasumir el mando y consolidar su ministerio (24-8-1940). Pero la salida política no sería la propuesta por el PS: el 27 de agosto el gabinete de Ortiz renunciaba y Castillo formaba el propio.

24.– *La Vanguardia*, 02/11/1937.
25.– Tal evaluación se halla en el «Informe del Comité Ejecutivo a la cuarta reunión ordinaria del Consejo Nacional del Partido Socialista», recogido en el folleto *Vademécum 1939. Problemas argentinos, planes socialistas para su solución*, Partido Socialista, Buenos Aires, 1939.
26.– *La Vanguardia*, 08/03/1940.
27.– *La Vanguardia*, 09/03/1940.

La apuesta aperturista de Ortiz no sobrevivió a su renuncia. Castillo invirtió las alianzas recostándose sobre los conservadores y los militares nacionalistas (cfr. López en este volumen). En un escenario que se polarizaba por el horizonte de la Guerra Mundial, las fuerzas opositoras plantearon una prédica que asociaba al gobierno con los totalitarismos europeos. Pero, aunque radicales y socialistas impulsaron juntos en el Congreso la creación de una comisión de investigación de actividades «antiargentinas», seguían lejos de converger en una fuerza opositora. A comienzos de 1942 los socialistas parafraseaban a Talleyrand para afirmar que, en los doce años transcurridos desde 1930, el radicalismo no había olvidado nada ni aprendido nada: seguía siendo una fuerza inorgánica y erizada de disputas entre caudillos.[28] Esa caracterización hizo posible que el PS iniciara la marcha hacia los comicios de marzo de 1942 bajo la fórmula «Ni fraudulencia conservadora, ni caudillismo radical. ¡Socialistas!».[29] Se trataba, se argumentaba citando el voto común respecto a las concesiones a la CHADE, de dos fuerzas que aparecían enfrentadas el día de la elección para luego mostrarse unidas en las Cámaras.[30] Centrando su prédica en la denuncia de la corrupción el PS instaba a los «independientes» e incluso a muchos radicales a castigar dos veces con el voto: «a los empresarios del fraude» pero también «a los caudillos entregadores de la masa ciudadana».[31]

La prédica que colocaba al PS como único actor rescatable frente a un escenario político corrupto no era novedosa. Sin embargo sí lo fue el éxito alcanzado en las elecciones legislativas porteñas de 1942 en las que el PS derrotó a la UCR por primera vez desde 1924. Es probable que, como lo señalara *La Vanguardia*, el «escándalo eléctrico» tuviera influencia.[32] También que la transformación de la elección en un plebiscito sobre la posición ante la guerra, a la que la prensa y los oradores socialistas se refirieron incansablemente, permitiera que el PS se erigiera en principal portavoz de la causa antifascista y aliadófila, lo que contrastaba con un radicalismo en el que chocaban rupturistas y partidarios de la neutralidad (Halperin Donghi 2004, págs. 272-273). Como ha señalado Bisso (2005, pág. 332), la apelación antifascista abría al PS la posibilidad de obtener el voto de un electorado que, sin adherir a los postulados socialistas, lo apoyaba en defensa de la democracia. Pero el éxito en alcanzar el respaldo de sectores «independientes» identificados con la tradición liberal, tendría un alto costo: el de terminar de difuminar la, ya débil, identificación del PS como partido obrero.

28.– *La Vanguardia*, 31/01/1942.
29.– *La Vanguardia*, 04/02/1942.
30.– *La Vanguardia*, 12/02/1942.
31.– *La Vanguardia*, 12/02/1942.
32.– *La Vanguardia*, 13/03/1942.

Capítulo 7

Rivalidades persistentes, reconfiguraciones frustradas. La negociación Alvear-Pinedo y la política argentina a inicios de la década de 1940

Leandro Losada

.....

En el verano de 1940-1941 un episodio sacudió a la política argentina: Federico Pinedo, ministro de Economía del gobierno a cargo del vicepresidente Ramón Castillo, se entrevistó en Mar del Plata con el presidente del principal partido de la oposición, la Unión Cívica Radical, Marcelo Torcuato de Alvear.

El impacto del acontecimiento estaba justificado, por tres razones: el contexto político internacional, el escenario político local, y los protagonistas. Con relación al primer punto, en junio de 1940 los nazis habían tomado París. Con ello, el equilibrio de la guerra a favor del Eje, e incluso la posibilidad de un rápido triunfo del nazi fascismo, adquirieron verosimilitud. En el plano local, el presidente Roberto Ortiz había entrado en licencia de sus funciones, por razones de salud. El jefe de Estado daba un paso al costado en momentos en que su compromiso con el retorno a la normalidad institucional parecía afianzarse, despejando dudas de opositores y sembrando interrogantes en el oficialismo. Una vez conformado el gabinete del vicepresidente Castillo, en septiembre, Federico Pinedo ocupó la cartera de Hacienda, en reemplazo de Pedro Groppo, y como en tiempos de Agustín Justo. Y hacia fin de año, presentó en el Congreso su plan de reactivación económica, alentado por las dificultades deparadas por la guerra europea. Este hecho se combinó con los fraudes denunciados en Santa Fe y Mendoza en diciembre de 1940 y enero de 1941, que tensaron las relaciones entre el gobierno y la oposición,

en especial con el radicalismo. Fue en esas circunstancias que Pinedo voló a Mar del Plata para entrevistarse con Alvear. Las relaciones entre ambos personajes dieron motivos adicionales para la sorpresa. Pinedo, procedente del Partido Socialista Independiente, y Alvear, jefe del radicalismo desde 1932, habían cursado toda la década previa en veredas enfrentadas, e incluso, con polémicas y enfrentamientos personales.

Curiosamente, este acontecimiento no atrajo demasiada atención de los historiadores, con excepción de los trabajos que se concentraron en el plan económico (Llach 1984), o en otros que lo aludieron pero no lo abordaron en profundidad debido a su interés por trazar miradas globales del período (Halperin Donghi 2004). En cambio, aquí se lo analizará en detalle. El argumento es que la iniciativa misma de negociación, las marchas y contramarchas que la signaron, y su fallido final informan sobre un punto relevante: la persistencia de rivalidades ancladas en las coordenadas locales, que frustraron posibles realineamientos influenciados o motivados por la coyuntura internacional, cuando las alertas sobre sus posibles repercusiones en la política argentina, al compás de la dirección que parecía estar siguiendo, habían aumentado en comparación con años anteriores. El acontecimiento permite poner en perspectiva la configuración de la escena política nacional entre 1932 y 1941, y evaluar los rumbos que la definieron bajo el doble juego de la coyuntura local y el escenario internacional. Más aún: las expectativas que despertó la negociación entre Alvear y Pinedo habilitan a conjeturar que el realineamiento que procuró era una de las pocas opciones disponibles para superar la crisis política e institucional arrastrada desde la década anterior, una vez frustrada, con la licencia de Ortiz, una solución a través de la acción presidencial.

7.1 Los prolegómenos. Oficialismo y oposición durante la presidencia de Ortiz

La licencia de Ortiz en julio de 1940 tuvo una honda repercusión en el mundo político argentino, y en especial, en el presidente del radicalismo. Para calibrar su impacto hay que tener en cuenta que su apreciación sobre el primer mandatario había cambiado notablemente hacia mediados de 1940 en relación con las opiniones que había dado sobre él desde su consagración electoral en septiembre de 1937.

A lo largo de 1938 y 1939, la crítica, la desacreditación, o cuanto menos, la desconfianza y la cautela, habían sido las notas más reiteradas por Alvear al juzgar la labor presidencial. No le faltaban motivos. Ortiz lo había derrotado en los comicios, a través de un fraude escandaloso, y esa derrota había activado a la oposición interna de la UCR: había quedado claro, con penosa nitidez, el error, al menos la ingenuidad, que había supuesto la concurrencia electoral decidida en 1935 (cfr. Giménez en este volumen). De todos modos,

ya con Ortiz presidente, el radicalismo ganó dos gobernaciones provinciales. Tucumán en octubre de 1938 y Entre Ríos en marzo de 1939, con un Alvear activamente implicado en ambas campañas electorales. Poco después, en abril de 1939, Ortiz anuló las elecciones en San Juan por las denuncias de fraude (De Privitellio 2001; López 2013 y en este volumen).

Aun así, para Alvear, los triunfos no ocultaban que: «La libertad y el comicio limpio, no está en nuestras manos acordarlos, ni parece que estuviera en nuestras manos el conquistarlos» (Alvear 1940, pág. 183).[1] Las victorias de 1938-1939 parecían no haber sido suficientes para revertir el impacto de la derrota de 1937. La UCR tenía un margen limitado de presión sobre el gobierno, y en consecuencia, el sustento de su liderazgo partidario también era cada vez más frágil. Las posibilidades se limitaban a seguir declamando la necesidad de la normalización institucional, a denunciar los vicios del oficialismo, y a esperar un gesto de buena voluntad del presidente que, por entonces, aún era motivo de duda.

El verano de 1939-1940 fue el momento en el que las suspicacias sobre Ortiz se despejaron definitivamente, promoviendo un respaldo cada vez más decidido de Alvear a la gestión presidencial. Los jalones que marcaron ese giro fueron las intervenciones a Catamarca y Buenos Aires, en febrero y marzo de 1940. Debe subrayarse el alto impacto político de ambas decisiones: el vicepresidente Castillo provenía de Catamarca, mientras que en Buenos Aires, el gobernador Manuel Fresco había buscado imponer como sucesor a Alberto Barceló, ambos, dos de las figuras más polémicas del conservadurismo bonaerense (De Privitellio 2001, págs. 128-129; Béjar 2005b).

En ocasión de la intervención catamarqueña, Alvear dijo: «Debo confesar con franqueza, que he mirado muchas veces con recelo las actitudes y declaraciones que partían de la Casa Rosada. Pero hoy (…) tengo la satisfacción de declarar sin reservas que ese acto político del Poder Ejecutivo Nacional ha ganado el aplauso decidido de los argentinos, y llevará a los espíritus inspirados en el deseo de ver restablecida la dignidad cívica del país y el leal funcionamiento de sus instituciones, la fundada esperanza de que llegan mejores tiempos para la vida nacional». Días después, el Comité Nacional de la UCR definió la iniciativa de Ortiz como el «gran acontecimiento político nacional» (Alvear 1940, págs. 217-221).

El paso de la amargura y la tristeza al optimismo parecía justificado. A diferencia de lo ocurrido en marzo de 1938, las elecciones de marzo de 1940 fueron exitosas para la UCR. Obtuvo la mayoría en Capital Federal, Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Entre Ríos, minoría en Santiago y Mendoza y se abstuvo en Corrientes. A pesar de la intransigencia afirmada por la convención, hubo acuerdos con desprendimientos radicales en provincias

1.– *La Nación*, 30/05/1939.

como Jujuy y Santiago del Estero. Además, en Jujuy y Córdoba se ganaron las gobernaciones, y por los resultados obtenidos, la UCR pasó a tener *quórum* propio en la Cámara de Diputados (Persello 2007, pág. 119; Luna 1999, pág. 288). Incluso parecía volver la unidad al partido. Así lo sugiere la amplia convocatoria reunida en el banquete realizado en mayo de 1940 al reciente gobernador electo de Córdoba, Santiago del Castillo (Alvear 1940, págs. 243-246).

Teniendo en cuenta estos antecedentes, es entendible que la licencia de Ortiz en julio de 1940 haya sido una mala noticia para Alvear. El presidente dejaba la escena cuando el rumbo emprendido no volvía infundado augurar un retorno del radicalismo al poder, luego de la frustración de 1937. Vale recordar, además, que al mismo tiempo de la licencia se abría la investigación promovida en el senado por Benjamín Villafañe por la compra de terrenos en El Palomar, adyacentes al destacamento de Campo de Mayo. La misma implicó a legisladores radicales y condujo a que el presidente presentara la renuncia, rechazada en el Congreso por la mayoría radical en la Asamblea legislativa (Halperin Donghi 2004, págs. 239-246). A principios de septiembre, entonces, el vicepresidente Castillo formó su propio gabinete.

Frente al nuevo escenario, la posición inicial de Alvear fue expectante, pero despojada de optimismo. En declaraciones a *La Nación* al día siguiente de la asunción del nuevo elenco de ministros, se limitó a subrayar que el país afrontaba una de las épocas más difíciles de los tiempos recientes.[2] La Convención Nacional del partido, en sintonía con su presidente, sesionó a fines de ese mes de septiembre, apuntando que la UCR era «extraña» al nuevo gabinete, pero no «a los grandes intereses del país, por lo cual si aquel cumple con sus promesas no le escatimará su beneplácito».[3]

Por su parte, Federico Pinedo dejó un testimonio sobre su desembarco en el gabinete de Castillo, comprensible en sus intenciones justificatorias, pero también sugerente. A su modo de ver, el cambio entre Ortiz y Castillo era tenue, por dos razones: las iniciativas del presidente habían consistido en intenciones más que en hechos reales (por ejemplo en Buenos Aires), mientras que, en segundo lugar, la gravitación de grupos filofascistas no había aumentado sensiblemente entre un gabinete y otro. El peligro creciente de estos sectores no era un producto del gobierno de Castillo, sino una tendencia con antecedentes en el mismo gabinete de Ortiz. Si en este había revistado en la Cancillería un aliadófilo como José Cantilo, Julio Roca (h), primer canciller de Castillo, tenía la misma posición. En sentido inverso, el ministro de Marina de Castillo, filofascista (Fincati), había tenido como antecesor en el cargo a una figura de similares simpatías (Scasso). Es cierto, de todos modos, que en el gabinete de Castillo se sumaban figuras a las que

2.– *La Nación*, 03/09/1940.
3.– *La Nación*, 24/09/1940.

se les atribuían simpatías con el Eje, como el ministro de Justicia (Rothe), o menos nítidamente, el de Obras Públicas (Oría). Pero estos, destacaba Pinedo, se veían compensados por los titulares de las carteras de Interior (Culaciati), Guerra (Tonazzi) y Agricultura (Videla), además del propio Pinedo y el mencionado Roca, adherentes a los Aliados (Pinedo 1948, vol. 1, págs. 185-186). En suma, Pinedo se preocupó por desmentir que se hubiera sumado a una gestión menos comprometida, al menos en sus inicios, con la normalización institucional, y a la vez, con simpatía marcada por las potencias del Eje. Su propuesta a Alvear, de todos modos, indica que en pocos meses, de septiembre a diciembre, advirtió que ese estado de cosas no tenía cimientos demasiado sólidos.

7.2 La negociación Alvear-Pinedo

En diciembre de 1940 las sospechas de que Castillo no seguiría la senda de Ortiz comenzaron a adquirir entidad. Para entonces, estallaron las denuncias de fraude en las elecciones para gobernador en Santa Fe. Paralelamente, se trataba en el Congreso el plan de reactivación económica de Pinedo. El mismo ya venía recibiendo resistencia en los representantes radicales por sus mismas orientaciones económicas, la cual se endureció a raíz del fraude en Santa Fe (Persello 2007, págs. 225-231).[4] En semejantes circunstancias, entonces, a inicios de enero de 1941 el mundo político recibió con sorpresa la decisión del ministro de iniciar negociaciones para alcanzar una «tregua política», volando a Mar del Plata para entrevistarse con Alvear en su residencia de la ciudad balnearia, Villa Regina, en simultáneo, además, con un nuevo escándalo electoral, las elecciones en Mendoza.[5]

De acuerdo a la prensa, el artífice del acercamiento fue el radical Mario Guido, cercano a Alvear. Pero la sorpresa era justificada. No sólo por el cambio de rumbo entre Ortiz y Castillo, sino por los antecedentes entre Alvear y Pinedo. En los años treinta, Alvear había fustigado en reiteradas oportunidades la política económica del entonces ministro de Justo con variados argumentos. Desde su definición como «delirante» hasta el subrayado en la presión fiscal que las reformas implementadas provocaban sobre las clases productoras, incluyendo apuntes premonitorios que veían en la «economía dirigida» un anticipo de la «dictadura política» (Alvear 1936, págs. 132-137, 1937, págs. 342-352). Semejantes juicios, desplegados desde 1935, llegaron a su punto culminante en el acto de cierre de la campaña presidencial de 1937 (Alvear 1937, págs. 419-438). Los dichos de Alvear en esa oportunidad motivaron una respuesta de Pinedo dos días después, en la que, en cierta medida, replicó el tono que había desplegado en sus debates con Lisandro de la Torre en el Congreso en 1935, y que por cierto habían

4.– *La Nación*, 12/12/1940 y 16/12/1940.
5.– *La Nación*, 10/01/1941.

culminado en un duelo entre ambos: cierta arrogancia en la que se conjugaban una autopercepción de solidez técnica ausente en su rival y una actitud de provocación anclada en las diferencias generacionales (Halperin Donghi 2004, págs. 152-164). Pinedo enumeró las «simplezas pueriles», «los errores groseros», los «equívocos sospechosos» y las «inexactitudes imperdonables» que no requerían más que «pocos minutos» para ser puestos en evidencia, augurando que «del discurso del Dr. Alvear no va a quedar, a poco que se lo examine, sino la vergüenza de que haya sido pronunciado por un ex presidente» (Pinedo 1948, vol. 5, págs. 233-240).[6] Pinedo, además, había adherido en 1936 a la posibilidad de conformar un frente nacional contra el frente popular que se había proyectado ese mismo año y al que el radicalismo había sido convocado.

Las especulaciones acerca del viaje de Pinedo a Mar del Plata a comienzos de 1941, en consecuencia, se multiplicaron. El hermetismo de sus protagonistas, de por sí, alentó las conjeturas. La prensa aseguraba que la conversación había sido en «términos de comprensión y armonía». Los interrogantes giraban alrededor de si el ministro había decidido la negociación por sí mismo o en representación de Castillo (este rápidamente declaró que no actuaba en nombre del Poder Ejecutivo y que se había enterado extraoficialmente de la iniciativa), y a los alcances y el significado de la propuesta. Si se limitaba a lograr tratamiento legislativo al plan de reactivación, o si suponía «convenios políticos de más vasto alcance».[7]

La reacción inmediata, tanto en filas de la Concordancia como en el radicalismo, fue negativa. En este último, un mitin ocurrido en esos días para repudiar las elecciones en Santa Fe y Mendoza sirvió para expresar el rechazo a todo tipo de acercamiento. Honorio Pueyrredón, titular de la Convención Nacional, declaró a *La Nación* que: «si el país no recibe plena satisfacción por tales atentados [los fraudes en Santa Fe y Mendoza] la protesta del radicalismo habrá de hacerse sentir en su actitud definida y en su conducta irreductible, ya que ningún interés podrá invocarse para llevarnos a ser encubridores o cómplices de tales delitos».[8] Dos días después enfatizó que «el ministro de Hacienda había equivocado el camino, pues no era al radicalismo al que debía dirigirse para negociar la extirpación del fraude, sino al Poder Ejecutivo» y que su plan «para el restablecimiento de la normalidad institucional era "tan vago y obscuro como su programa de reactivación económica", el cual en ningún caso (...) deberá ser votado por los legisladores radicales».[9]

6.– Vale apuntar que Pinedo ya había dejado de ser ministro de Economía de Justo para septiembre de 1937. Lo habían sucedido Roberto Ortiz y Carlos Acevedo.
7.– *La Nación*, 11/01/1941.
8.– 11/01/1941.
9.– *La Nación*, 13/01/1941.

Otros fueron incluso más lejos. Se comparó a Pinedo con Arthur Neville Chamberlain, pues «en un viaje de avión ha querido repetir el trágico episodio de Munich, presentándose como un pacificador», según palabras de Raúl Damonte Taborda. El diputado Eduardo Araujo llegó a afirmar que Agustín Justo era el verdadero artífice del acuerdo. Era un argumento idóneo para movilizar a la opinión radical, pero curioso.

Justo, con aspiraciones a volver a la presidencia, había encontrado en el escenario abierto con Castillo un panorama más promisorio que el que había prevalecido durante la gestión de Ortiz, pues la reparación institucional que este se comprometía a concluir implicaba un reconocimiento de la venalidad y del fraude que había signado a su gobierno. Además, el ministro de Guerra de Ortiz, el general Carlos Márquez, había confrontado la influencia de Justo en el Ejército. En cambio, el ministro de Guerra de Castillo, Juan Tonazzi, era un hombre de Justo. Por ello hubo versiones que lo sindicaron como responsable de los fraudes en Santa Fe y Mendoza (Potash 1986, págs. 212-213). Aun así, la sospecha de que Justo estaba detrás de las negociaciones de Pinedo tenía eventuales fundamentos. El giro de Castillo con relación a Ortiz, así como el propósito de aquél de despegarse de Justo, hacían en algún punto plausible la consideración de que Justo podía pretender acercarse al radicalismo en su objetivo de retornar al poder.

No se cuenta con evidencias para saber si Alvear conocía el aval de Justo a Pinedo, de haber existido. También cabe conjeturar, si de ser así, le habría resultado aceptable luego de lo ocurrido en 1936-1937. En ese entonces, Alvear había confiado en un posible acercamiento con Justo, sobre la base de que ambos expresaban el «justo medio» de sus respectivos espacios políticos, ante el crecimiento de la oposición interna en el radicalismo y el del nacionalismo antiliberal en la Concordancia, en especial a través del conservadurismo bonaerense de Manuel Fresco, cuyas abiertas simpatías por el fascismo eran conocidas. Las tratativas se ensayaron a través de José Luis Cantilo y Fernando Prat Gay, concurrencista tucumano, aunque finalmente naufragaron cuando Justo habilitó el triunfo del antipersonalismo en Santa Fe en febrero de 1937 (Losada 2016a). En definitiva, fuera cual fuese la veracidad de la denuncia de Justo como sostén de Pinedo, y de la viabilidad que la negociación habría tenido para el propio Alvear de haber sido este el caso, las versiones que circularon en la UCR alentaron una posición ejemplarmente sintetizada por Emir Mercader: toda posibilidad de acuerdo era una traición.[10]

El 12 de enero Pinedo y Alvear hicieron públicas sus opiniones e intenciones. El ministro ratificó que su iniciativa había sido personal, quizá apostando a obtener el rédito político en caso de éxito. En cualquier caso, era una evidencia de la fisura que recorría a la alianza oficialista. Y afirmó

10.– *La Nación*, 11/01/1941.

que sus propósitos iban más allá de una tregua y de asegurar tratamiento parlamentario al plan de reactivación. Era necesario conseguir una «paz» y consideraba fundamental llegar a consensos que incluyeran la posibilidad de acordar candidaturas. Para ello proponía que los partidos tuvieran candidatos propios en dos tercios de las listas y que el tercio restante (también podía ser, en el mejor de los casos, la mitad) fuera el producto de acuerdos interpartidarios. La insistencia en que no sería el producto de negociaciones entre cúpulas dirigentes, y la referencialidad de la propuesta en el modelo de la ley Sáenz Peña, eran los puntos subrayados por el ministro para desmentir sus eventuales inclinaciones elitistas, advertidas por el mismo diario *La Nación*. Puede afirmarse que esta tesitura de Pinedo no era contradictoria con la que retrospectivamente volcó en sus memorias (Pinedo 1948, vol. 1, págs. 186-193). Advertido en diciembre de un giro de Castillo con relación a Ortiz, procuró tender puentes con la oposición para impedir una profundización de la crisis política, amén, claro está, de su intención de conseguir aprobación parlamentaria para su proyecto de reactivación, resistido incluso en sectores afines al gobierno y con alineamientos internacionales coincidentes con Pinedo, como la Sociedad Rural, recelosa de la vinculación económica con los Estados Unidos que promovía el proyecto del ministro (Llach 1984).

Alvear, por su parte, procuró mantener el equilibrio en sus declaraciones. Por un lado, y posiblemente para contener críticas internas, como las que Pueyrredón había volcado a la prensa, afirmaba que la tregua sólo sería posible si se retomaba la política del presidente Ortiz de eliminar definitivamente el fraude. Este era una «vergüenza nacional», cuya más reciente manifestación eran los casos de Santa Fe y Mendoza. Por cierto, y quizá también para aplacar los ánimos intransigentes, subrayaba que el acuerdo no implicaría el desdibujamiento de identidades partidarias y de sus recíprocas confrontaciones, sino posibilitar diálogos hasta entonces trabados: «no se busca inmovilizar a los partidos, sino encauzarlos». Pero sus énfasis eran nítidos: «Quiero esperar que el patriotismo de los hombres que componen los partidos políticos, ha de sobreponerse a las situaciones personales en beneficio del interés superior del país».

Alvear planteaba que el peligro no provenía necesariamente de los eventuales imitadores locales de los totalitarismos europeos. La raíz del mal estaba en la dinámica de la vida política nacional. Las miserias de las disputas y el retorno sistemático del fraude conducirían definitivamente a una crisis terminal del sistema político, por el repudio y la apatía que provocarían en la ciudadanía: «el fraude electoral no puede seguir imperando en la República (…) porque esa maniobra, practicada como sistema, corrompe el alma nacional y enerva a la ciudadanía. El día que busquemos a ese pueblo, tan noble y abnegado, y lo queramos someter a cualquier esfuerzo, no lo

encontraremos: nosotros mismos lo habremos muerto con el fraude, la violencia y el crimen».

En sus declaraciones posteriores al encuentro con Pinedo, entonces, Alvear complementó, y de algún modo matizó, la férrea demanda de poner fin al fraude como condición necesaria para avanzar en todo acuerdo con el gobierno, al subrayar el carácter patriótico, por encima de banderías partidarias, de la acción que debía ponerse en marcha. La patria estaba en juego, así que los pruritos identitarios debían quedar, de momento al menos, a un lado. Esto era lo que él, Alvear, y Pinedo, precisamente representaban. Su historial de enfrentamientos había quedado en suspenso por una común preocupación patriótica: «¿cómo no he de recibir con los brazos abiertos cualquier propósito en tal sentido [lograr la "concordia de la familia argentina"], sobre todo viniendo de un hombre joven que, apartándose de las divergencias que con él se hayan podido tener, es evidente que su espíritu vibra ante los acontecimientos y percibe no sólo los peligros políticos internos y externos que se ciernen sobre el país, sino la repercusión económica y financiera de esos peligros?».[11]

El desarrollo de las negociaciones comenzó a demorarse, augurando un final errático. *La Nación* sumaba un punto interesante para comprender por qué el acuerdo podía empantanarse. La indignación ciudadana ante el fraude, que, siempre según el matutino, el radicalismo daba por descontada y entendía como punto fuerte para presionar al gobierno, no se percibía. De algún modo, el diario recuperaba un tópico que el propio Alvear había planteado antes de que se despejaran las dudas sobre el presidente Ortiz: la posibilidad de presión era mínima; el cambio, en última instancia, sólo podía desencadenarse desde arriba. Decía *La Nación*: «Los radicales están seguros de haber impuesto al país la convicción del fraude. Estiman que la masa independiente los acompaña en su protesta, pero no alcanzan a percibir, por falta de elementos de prueba, el grado de alcance de esa adhesión. Mantienen su intransigencia: Santa Fe y Mendoza son cuestiones previas, no todos las juzgan asuntos exclusivos».[12] Parecía estar cumpliéndose el vaticinio de Alvear: la expectativa de encontrar al pueblo cuando se pretendiera movilizarlo podía verse defraudada. La moderación en lugar de la intransigencia podía ser lo más recomendable. Para entonces, la disyuntiva entre las dos opciones atravesaba al bloque parlamentario radical. De un lado, quienes planteaban colaborar con el gobierno, votando el plan económico, si al menos se aprobaba la intervención a Santa Fe; del otro, quienes sostenían que las primeras señales debía darlas el Poder Ejecutivo y no el radicalismo.

11.– *La Nación*, 12/01/1941.
12.– *La Nación*, 20/01/1941.

A ello hay que sumar un segundo aspecto que talló en la propuesta de negociación, y en su destino: la situación internacional. En especial Alvear se preocupó por subrayar que urgía salvaguardar las instituciones republicanas en un momento en que se hallaban discutidas y amenazadas por las circunstancias internacionales. Estaban en juego la república y las «tradiciones argentinas». Ante semejante peligro debía prevalecer el patriotismo y subordinarse la mezquindad de la lucha política, una afirmación que bien podía estar dirigida contra sectores concordancistas, especialmente los conservadores, pero también a la propia intransigencia radical: «Una conmoción universal pone en peligro los ideales, los principios, las doctrinas que son esencia de nuestra nacionalidad, y nosotros, en tanto, estamos entretenidos en discutir posiciones». Conviene destacar que Ortiz ya había denunciado infiltraciones nazis en la Asamblea Legislativa de 1939.[13]

Este argumento continuaba una tesitura que venía planteando desde meses antes. Alvear comenzó a ubicar paulatinamente la situación local en correspondencia con el contexto internacional. La «reacción conservadora» a la que había aludido reiteradamente a lo largo de la década de 1930, empezó a incluir retrógrados que eran algo más que conservadores a destiempo. La lucha por la libertad cívica y electoral desplegada en el país era una expresión singular de una confrontación entre libertad y autoritarismo que recorría el mundo. Había una disputa entre «dos tendencias profundas. Una es la de la regresión, y otra la de la libertad y la democracia» (Alvear 1937, pág. 309, 1940, págs. 142-147 y 160-168).

Alvear, asimismo, había recibido con entusiasmo la aparición de periódicos como *Argentina Libre,* un semanario a favor de la causa francesa, y ya en 1940 se sumó a Acción Argentina, una entidad que englobó a distintos personajes públicos vinculados por su condena al nazifascismo (Halperin Donghi 2004, págs. 250-257; Bisso 2005). Era sabido, y Alvear no lo ocultaba, su carácter de «amigo de Francia» (*Serie Archivo Alvear*, vol. 4 – en adelante SAA – 2003, págs. 429-431). También, su admiración por los Estados Unidos y su presidente Franklin Roosevelt, e Inglaterra. Así, al momento de manifestar su posición personal ante la Segunda Guerra Mundial, declaró sin ambages su adhesión a los Aliados, y más precisamente, a esos tres países, a menudo invocados como las «tres grandes democracias» (Alvear 1940 págs. 195-196, 205-212 y 260-273).

Ahora bien, estas posiciones personales tuvieron fricciones con las que recorrían a su partido, debido a la tradición de neutralidad que lo había definido. La misma fue motivo de controversias y debates internos al estallar la guerra, sobre todo por las distintas apropiaciones que se pusieron en juego. Los énfasis anti imperialistas y nacionalistas, y por ello a menudo conjugados con acentos antibritánicos o antiestadounidenses, confrontaron

13.– *La Nación*, 12/01/1941.

con los que plantearon que la neutralidad no excluía un compromiso y una identificación con las democracias o una crítica al totalitarismo. Así lo formuló finalmente la Convención Nacional ya en mayo de 1941. La declaración, con todo, no se tradujo en una abierta posición aliadófila (Losada 2016a; Persello 2007, págs. 120-121).

Precisamente, una de las razones esgrimidas por figuras del radicalismo para repudiar la negociación con Pinedo eran los posicionamientos internacionales. De manera sintomática, detrás del acercamiento de Alvear con Ortiz, primero, o con Pinedo, después, se vio la mano oculta del imperialismo, británico o estadounidense, según los casos. Por ejemplo, Raúl Damonte Taborda expresó estas suspicacias al sostener que Pinedo apuraba gestiones con el radicalismo debido a que los banqueros estadounidenses habían exigido que el plan tuviera aprobación parlamentaria (Luna 1999, págs. 277-279).[14] Después de todo, como ya se dijo, era cierto que el plan de reactivación económica promovía un reposicionamiento internacional de la Argentina orientado a fortalecer, entre otras cosas, los vínculos con los Estados Unidos. Pinedo, al igual que Alvear, integraba *Acción Argentina*, y era un aliadófilo y un «atlantista».

Las versiones que afirmaban que Justo estaba detrás de las negociaciones obtenían algo de plausibilidad, también, por los reacomodamientos alentados por la situación internacional. Dentro del ejército aparecía cada vez más como una contención al crecimiento de los sectores neutralistas o simpatizantes del Eje. Se ha dicho que no hay evidencias para saber si Alvear sabía si Justo estaba detrás de Pinedo, en caso de que hubiera sido efectivamente así, y que es válido preguntarse si el rencor abierto por las frustradas negociaciones en 1936-1937 habría permitido un nuevo acercamiento. Pero el antecedente, en sí mismo, que ya había sido polémico en aquel momento, no permite descartar completamente que Alvear y Justo pudieran haber vuelto a encontrarse cuando las circunstancias parecían aproximarlos nuevamente (Torre 2012, págs. 135-145; Devoto 2014, págs. 171-186). Como fuere, la gestión de Pinedo era inaceptable para la intransigencia radical y distintos sectores internos, tanto por la desconfianza acerca de los cambios que promovería en la política local, como por los contrapuntos y sospechas derivados de los posicionamientos de los protagonistas ante la coyuntura internacional.[15]

Lo cierto es que la negociación, finalmente, fracasó. La «reunión de notables» congregada en el domicilio de Alvear, encargada de estudiar la propuesta de Pinedo, debido a que no estaban constituidos por entonces

14.– *La Nación*, 11/01/1941.

15.– El acercamiento entre Justo y el Comité Nacional de la UCR cobró fuerza a fines de 1942, cuando Alvear ya había fallecido. Fue una posibilidad frustrada por la muerte del propio Justo, en enero de 1943 (De Privitellio 1997, págs. 70-71, 2001, pág. 138).

el comité ni la Convención Nacional, emitió una declaración con carácter resolutivo que se inclinó por la posición más inflexible: no había posibilidad de diálogo si antes no se resolvían las cuestiones de Santa Fe y Mendoza. Se avalaba la decisión del sector más intransigente del bloque parlamentario. Según los medios de prensa, el criterio fue compartido por unanimidad por todos los integrantes de la mesa de notables.[16]

Sin embargo, días después, trascendió que aquella unanimidad parecía no haber sido tal. Si bien no se mencionaba el nombre de Alvear, el tenor de las declaraciones no parece extraño a sus posicionamientos. Se apuntaba que «de ningún modo se debió dejar la última palabra a los adversarios» y que al Poder Ejecutivo «debió dársele toda clase de facilidades, aunque no fuese más que la de un silencio (...) hasta reconocer la sinceridad de sus intenciones y sobre todo, la calidad y la cantidad de lo que los elementos concordancistas estaban dispuestos a ofrecer. Sólo entonces, en caso de advertirse una intención de burla o de tenerse la certeza de que desde el otro campo se cerraba el camino, cabría adoptar la actitud abiertamente intransigente».[17]

El argumento aludía al desenlace de todo el asunto. La declaración radical motivó que el oficialismo la considerara inaceptable, conduciendo a la renuncia de Pinedo. Días después dimitieron también el canciller Julio Roca (h) y el interventor de la provincia de Buenos Aires, Octavio Amadeo. En verdad, la posición de la UCR dio una excusa a los concordancistas, y fundamentalmente a los demócratas nacionales, para evitar una propuesta que tampoco les resultaba convincente, como lo reconoció el propio Pinedo, con una conjugación de rencor y amargura (Pinedo 1948, vol. 1, págs. 191-192).

Para ambos protagonistas, el fracaso del acercamiento tuvo frustrantes consecuencias personales (más allá de las eventualmente sinceras preocupaciones por el futuro político del país). El plan económico de Pinedo no tuvo tratamiento parlamentario y, como recién se dijo, abandonó el gobierno. Para Alvear, el acuerdo fallido clausuró un curso de acción que podría haber permitido un robustecimiento de su liderazgo. Esto es, un retorno a la normalidad institucional, como la que había comenzado a desplegar Ortiz, que probara que la concurrencia electoral no había sido un error ni una claudicación, sino un medio idóneo para que la UCR retornara al poder. En mayo de 1941, en ocasión de la reunión de la Convención Nacional,

16.– Eran: Alvear, José Luis Cantilo, presidente de la Cámara de Diputados; los senadores José Tamborini y Eduardo Laurencena; los diputados Mario Guido, Ernesto Boatti, Emilio Ravignani, Juan I. Cooke, Ismael López Merino, Leopoldo Zara, Aníbal Arbeletche y Raúl Damonte Taborda; el ex candidato a gobernador de Santa Fe, Enrique Mosca; Honorio Pueyrredón, presidente de la Convención Nacional; Julio Aramburu, Alberto Paz, Félix Solanas y J. N. Costa; el diputado Julio Sancerni Giménez, también invitado, no concurrió por razones de salud.
17.– *La Nación*, 16/01/1941.

la desacreditación a la conducción de Alvear tuvo explícitas manifestaciones, que llegaron incluso a la agresión física.[18] Fue su última aparición pública partidaria, pues desde agosto pidió licencia por razones de salud, y falleció en marzo de 1942.

7.3 Conclusiones

Las negociaciones entre Alvear y Pinedo muestran, por un lado, los eventuales realineamientos que se estaban abriendo en la política local a inicios de los años 40 al compás de los acontecimientos internacionales. Pero también reflejan el condicionamiento, finalmente decisivo, que la herencia de la trama política local iniciada en la década de 1930 impuso a esas reubicaciones.

La fallida negociación de 1940-1941 puede ponerse, en este sentido, en una historia más larga. Al menos desde 1936, la coyuntura internacional había comenzado a tallar en la política local, alentando posibles acercamientos. Ese año se planteó la iniciativa de un frente popular, primero en el acto por el 1º de Mayo, luego con motivo de la inauguración del monumento a Roque Sáenz Peña en agosto. Fue un préstamo de la política internacional aplicado a un diagnóstico local. La convocatoria original, comunista, fue reorientada por el socialismo para aunar a los «tres partidos populares y legalitarios» para combatir el gobierno fraudulento de Agustín Justo y lograr la libertad electoral, en momentos en que se había lanzado la iniciativa de un frente nacional desde sectores conservadores (Halperin Donghi 2004, págs. 212-213; Camarero y Herrera 2005, págs. 25-31; Pasolini y Martínez Mazzola en este volumen).

Meses después, se alentó la formación de un frente común para las elecciones de 1937. De acuerdo al dirigente socialista Nicolás Repetto, se reconocía que debía estar presidido por «una gran fórmula presidencial escogida por el radicalismo». Sin embargo, esta «fue descartada inmediatamente por el doctor Alvear, quien invocó la idiosincrasia propia de su partido y la tradición de intransigencia que mantiene en materia de unión o colaboración con otros partidos». Alvear también rechazó las invitaciones a iniciar una campaña conjunta de agitación electoral y un comité parlamentario que coordinara la acción de socialistas, demócrata-progresistas y radicales (Repetto 1957, págs. 198-202).

Poco después de las elecciones presidenciales de septiembre del 37, el socialismo había vuelto a proponer un acercamiento al radicalismo. Para ese fin, Repetto y Alvear mantuvieron una entrevista en diciembre de ese año. Aquí aparecieron más explícitamente las eventuales repercusiones locales del contexto internacional. El móvil era generar «un gran movimiento de opinión para restablecer en el país el imperio de la legalidad», pero también

18.– *La Prensa*, 11/05/1941.

defenderlo del peligro de infiltraciones nazis. Alvear se limitó a escuchar «deferentemente». La impaciencia de Repetto se plasmó en un artículo de *La Vanguardia*, en el que mostró su sorpresa y desconcierto ante «la indiferencia que muestran no pocos políticos argentinos ante ciertos hechos, que mirados con sereno criterio democrático deberían inquietarlos en sumo grado (...) [estaban] subyugados por la obsesión electoral o el asalto a las posiciones de gobierno» (Repetto 1957, págs. 126-130).

Finalmente, al producirse la delegación del gobierno de Ortiz en Castillo, y la conformación por parte de este de su propio gabinete en septiembre de 1940, se habría manejado la posibilidad de un golpe de Estado que llevara a la conformación de un triunvirato, integrado por Alvear, Mario Bravo y el general Márquez, para que se hiciera cargo del gobierno y convocara a elecciones. Más allá del grado de verosimilitud de esta versión, atribuida a allegados de Bravo y de la cual no hay indicios en el archivo disponible de Alvear, el plan no se concretó, según las mismas versiones, por el rechazo de Ortiz así como por los «escrúpulos legalistas» del presidente de la UCR (Ciria 1985 pág. 94, 107, nota 25; De Privitellio 1997, pág. 68; Halperin Donghi 2004, pág. 246).[19]

Pueden trazarse varias conjeturas para explicar el rechazo del radicalismo, y del propio Alvear, al frente popular así como a los acercamientos con el socialismo. La desestimación del frente popular parece haberse derivado de varias consideraciones: el anticomunismo, personal y partidario; una búsqueda de sintonía con las preferencias atribuidas a los votantes radicales; la tradición intransigente contraria a todo acuerdo; y un aspecto ya aludido que no hay que olvidar, la intención de mostrar gestos de moderación y de buena voluntad hacia el gobierno de Justo en un momento, la segunda mitad de 1936, en que se creyó posible negociar con él, expectativa que recién se desvaneció con las elecciones de Santa Fe en febrero de 1937 (SAA 2003, vol. 4; Losada 2016a). A todo ello habría que sumar, además, que el frentismo era una consigna a la que adherían distintas agrupaciones juveniles internas enfrentadas a la conducción alvearista (Giménez 2012 y en este volumen).

En segundo lugar, es plausible que la urgencia de un frente popular o de un acercamiento al socialismo no haya resultado perentoria para algunos actores políticos, Alvear y el radicalismo entre ellos, antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial (De Privitellio 2001, pág. 135). Merece precisarse que la comisión parlamentaria de socialistas y radicales que se abocó a la investigación de la infiltración nazi, planteada por primera vez en 1938, se sustanció recién en 1941 (Repetto 1957, págs. 212-216). Y como apuntó el propio Pinedo, la neutralidad como política de Estado pudo parecer

19.– Según consignó *Crítica* en su momento, el propio Alvear habría alertado a Ortiz de esta iniciativa, presentándose espontáneamente en su casa de la calle Suipacha: «Una actitud histórica», *Crítica*, 24/3/1942.

razonable hasta que los Estados Unidos se incorporaron al conflicto en diciembre de 1941 (e incluso entonces, el enemigo continental fue Japón más que Alemania) (Pinedo 1948, vol. 1, pág. 185).

A todo ello hay que sumar un punto adicional: el diagnóstico según el cual la UCR era la condensación de la democracia argentina, y que el problema político nacional era la restauración de viejos vicios criollos (oligárquicos), que tergiversaban las instituciones, más que la versión local de los nazi fascismos europeos. Para Alvear, los dilemas argentinos siguieron teniendo hasta último momento, y a pesar de reconocidos cambios de coyuntura, una especificidad local de fondo (Losada 2016b). A su vez, si el peligro fascista se reconoció más perentorio en los primeros años cuarenta, el comunista siguió ocupando un lugar de equivalencia a él. Como dijo en la convención de mayo de 1941, el fascismo era un peligro urgente, pero el comunismo, quizá menos inminente, era igualmente acuciante: la «derecha» era «el peligro inmediato»; la izquierda «quiere envenenar el alma nacional con ideas exóticas».[20]

De todos modos, y por último, quizás el punto clave que obturó los realineamientos fue la configuración de la política local. Se ha dicho, por un lado, que el acercamiento con el socialismo en 1936-1937 posiblemente se vio desalentado porque Alvear contempló una apuesta diferente hasta inicios de ese último año, el acercamiento con Justo, finalmente fallido. Al margen de lo anterior, la relación de la UCR y del propio Alvear con el socialismo estaba signada por la tensión y el recelo más que por la armonía. La historia tenía largas raíces, pero se acentuó desde la incorporación del socialismo al sistema implementado en 1932 (cfr. Martínez Mazzola en este volumen). Ya por entonces, Alvear había recibido sugerencias de tantear un frente con socialistas (y demócrata-progresistas), a partir de la premisa de que una torsión abstencionista de la UCR (el rumbo finalmente decidido en 1931) tendría una solidaridad limitada en ambos partidos (SAA vol. 2, 1998, págs. 18-21, 25-32 y 43-45).

Decidida la ausencia de las urnas, la captación de votos radicales por los socialistas fue una razón reiterada para insistir en la necesidad de abandonar la abstención. Una vez asumido el concurrencismo en 1935, el rechazo a toda posibilidad aliancista probablemente fue una de las maneras con las que Alvear procuró marcar su correspondencia con la línea intransigente del partido cuando la participación electoral, justamente, autorizaba a ponerla en duda.[21]

A ello, finalmente, hay que sumar diferencias no sólo políticas o ideológicas, sino personales. Alvear tuvo cruces importantes con dirigentes

20.– *La Prensa*, 11/05/1941.

21.– Un argumento similar, sin olvidar el intento de acordar con Justo, podría esgrimirse para la desestimación de otra oferta aliancista: la que propusieron los demócrata-progresistas para las elecciones santafesinas de febrero de 1937.

socialistas, entre ellos Mario Bravo, que había intervenido en las tratativas para la entrevista entre Repetto y Alvear de diciembre de 1937, y habría sido su eventual compañero en el triunvirato pergeñado ante la asunción del poder por Castillo (SAA vol. 3, 2000, págs. 192-193). La contrariedad de Repetto con la UCR, por su parte, se advierte en sus memorias. Allí reprodujo una intervención parlamentaria de 1938 que muestra cómo las rivalidades deparadas por la política nacional afloraron apenas se diluyeron las posibilidades de acercamiento. Definió al radicalismo como «simplemente un movimiento de opinión», subrayó las coincidencias entre diputados radicales y conservadores, en especial en temas fiscales, financieros y sociales, e ironizó sobre «el sonoro título» que ostentaba el radicalismo, marcando lo infundada que estaba su pretensión de aparecer como una versión local de su homónimo francés, un objetivo que Alvear parece haber anhelado (Repetto 1957, págs. 130-136).

Hacia 1940-1941, el escenario parecía ser otro, más promisorio para los acercamientos. Comenzaba a adquirir consistencia un desplazamiento en el diagnóstico de coyuntura, más atento al crecimiento de las tendencias autoritarias de corte antiliberal. Más aún cuando la situación europea, ya en medio de la Segunda Guerra Mundial y al parecer inclinándose a favor del Eje, se conjugó con la delegación del poder por parte de Ortiz. Como se dijo, en esos años surgieron entidades como *Acción Argentina*, definidas por un notorio pluralismo político. Impulsada por un elenco preponderante de socialistas y demócrata-progresistas, la integraron también los dos protagonistas del episodio aquí analizado, Alvear y Pinedo, así como otros importantes personajes públicos, ajenos al mundo político, como Victoria Ocampo – por cierto, amiga de Alvear – (Nállim 2014, págs. 154-172).

Ahora bien, es sugestivo que este espacio pudo congregar a todas estas figuras, entre otras razones, porque priorizó los pronunciamientos frente a la situación internacional, evitando intervenciones decididas sobre la coyuntura local y la política partidaria. Por ello, incluso, en el radicalismo hubo cautela cuando no disconformidad con la organización, sumándose así un motivo de tensión entre las bases partidarias y su presidente (Halperin Donghi 2004, págs. 254-255).

Mirando las cosas en perspectiva, por lo tanto, el fracaso de la negociación Alvear-Pinedo puede pensarse desde la conjugación de varios factores. Por un lado, sus protagonistas, quizás más Alvear que el ministro de Economía, arrastraban un importante desgaste en sus propios espacios políticos a inicios de los años cuarenta, y posiblemente también ante la opinión pública en un sentido más general. La apatía promovida por el funcionamiento efectivo de la política fue registrada por la prensa y advertida por el propio Alvear, como se vio más arriba, al apuntar que muy probablemente ya no se

podía contar con un «pueblo noble y abnegado», pues había «muerto con el fraude, la violencia y el crimen».[22]

A ello se sumaban las desconfianzas e inquinas entre esos protagonistas, heredadas de las disputas ocurridas, por lo menos, desde 1930. Piénsese en los recelos de Alvear para con los socialistas, y de estos para con él, así como los que, probablemente, perduraron entre Alvear y Pinedo o Justo, a pesar del acercamiento que pudieron alentar las necesidades y las circunstancias.

El enfrentamiento entre la UCR y los participantes del escenario afirmado en 1932, incluyendo en él a ese elástico oficialismo que fue la Concordancia pero también a la oposición constituida por socialistas y demócrata-progresistas, fue un clivaje perdurable, que parece haber obturado, ya a inicios de la década de 1940, posibles realineamientos derivados de la situación internacional, que quizás habrían permitido encontrar una salida a la crisis política e institucional del país. La confrontación radicalismo/ antirradicalismo (yuxtapuesta, pero no estrictamente coincidente con la división entre oficialismo y oposición) fue lo suficientemente persistente como para impedir una reconfiguración política inspirada en la dicotomía fascismo/ antifasicsmo hasta los mismos comienzos de la década de 1940. Para entonces, el descrédito y las variantes políticas antagónicas a la Constitución de 1853 habían ganado lugar en importantes actores políticos, como el Ejército, al tiempo que considerables sectores de la opinión pública parecían estar atravesados por una paulatina pero creciente indiferencia frente al mundo político. El golpe de Estado de junio de 1943, acelerado o incluso posibilitado por las muertes prácticamente contemporáneas de Alvear, Ortiz y Justo, emerge desde este ángulo de observación como la clausura de un ciclo que parecía agotado, o al menos incapacitado para recomponerse, antes de que llegara el episodio que finalmente puso su punto final.

22.– *La Nación*, 12/01/1941.

Los autores

Olga Echeverría. Profesora, Licenciada y Doctora en Historia, especializada en el estudio de los intelectuales de derechas, las subjetividades, las sensibilidades y las prácticas políticas sociales, culturales y represivas de las derechas argentinas y uruguayas del siglo XX. Es directora del Anuario IEHS e investigadora del CONICET (en el Instituto de Estudios Histórico Sociales/ Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales, Facultad de Ciencias Humanas, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, UNCPBA) y docente ordinaria de la Facultad de Ciencias Humanas de la UNCPBA. Desde 2010 coordina, junto al doctor Ernesto Bohoslavsky, los Talleres de Discusión sobre las Derechas en el Cono Sur, siglo XX (UNGS/UNCPBA).

Sebastián R. Giménez. Licenciado en Sociología por la Universidad Nacional de La Plata, Magíster en Ciencia Política por el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín, y Doctor en Ciencias Sociales por la Universidad de Buenos Aires. Actualmente, es investigador asistente del CONICET. Sus investigaciones abordan diferentes aspectos del radicalismo en la primera mitad del siglo XX, con particular énfasis en la década del treinta. Sobre este tema, ha publicado numerosos trabajos en revistas nacionales y del exterior.

Ignacio A. López. Doctor en Historia (Universidad Torcuato Di Tella) y politólogo (Universidad Católica Argentina). Actualmente se desempeña como becario interno del CONICET con lugar de trabajo en el Departamento de Historia de la Universidad Torcuato Di Tella. Es profesor adjunto de Historia Argentina Contemporánea en la Universidad Católica Argentina y en la Universidad del Salvador.

Leandro Losada. Doctor en Historia por la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Investigador adjunto del CONICET. Es profesor titular de Historia Argentina y Director del Centro de Estudios de Historia Política en la Escuela de Política y Gobierno de la Universidad Nacional de San Martín. Se desempeña también como profesor visitante en el Departamento de Historia y en el Posgrado en Historia de la Universidad Torcuato Di Tella. Especialista en historia política y social de las elites latinoamericanas e historia política y de las ideas políticas argentinas en las primeras décadas del siglo XX, es autor de: *La alta sociedad en la Buenos Aires de la Belle Époque. Sociabilidad, estilos de vida e identidades* (2008, Premio Especial Ricardo Rojas, Ministerio de Cultura, Gobierno de la ciudad de Buenos Aires); *Historia de las elites en la Argentina. Desde la conquista hasta el surgimiento del peronismo* (2009);

Esplendores del Centenario. Relatos de la elite argentina desde Europa y los Estados Unidos (2010); *Una familia de la elite argentina. Los Senillosa, 1810-1930* (2016, junto con Roy Hora); y *Marcelo T. Alvear. Revolucionario, presidente y líder republicano* (2016).

Ricardo Martínez Mazzola. Licenciado en Sociología, Magíster en Investigación en Ciencias Sociales y Doctor en Historia por la Universidad de Buenos Aires (UBA). Es investigador adjunto del CONICET con sede en el Instituto de Altos Estudios Sociales de la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM); y profesor adjunto de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Ha dictado cursos de grado y posgrado en la UBA, la UNSAM y la Universidad Nacional de La Plata. Cocoordina la Red de Estudios sobre el Socialismo Argentino (RESA). Sus líneas de investigación son la sociología política, la historia política y la historia intelectual, habiendo publicado numerosos trabajos que abordan la historia de la tradición socialista y del movimiento socialista en la Argentina.

Ricardo Pasolini. Magíster y Doctor en Historia; investigador titular del Instituto de Estudios Histórico Sociales «Prof. Juan Carlos Grosso» (IEHS, Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires, UNCPBA), e investigador de carrera del CONICET en la Unidad Ejecutora Instituto de Geografía, Historia y Ciencias Sociales (IGEHCS), UNCPBA/ CONICET. Fue director de la revista *Anuario IEHS*. Ha publicado artículos de su especialidad en revistas nacionales y extranjeras (de Alemania, España, Italia, Francia e Inglaterra). Es profesor adjunto en el Área de Historiografía y Metodología de la Investigación Histórica, y se especializa en estudios de historia cultural argentina del período de entreguerras, con especial atención a la relación entre el mundo intelectual y la cultura antifascista. Es autor de *La utopía de Prometeo, Juan Antonio Salceda: del antifascismo al comunismo* (2006), y de *Los marxistas liberales: antifascismo y cultura comunista en la Argentina del siglo XX* (2013), entre otros libros.

José Zanca. Profesor de Historia por la Universidad de Buenos Aires, Magíster en Investigación Histórica y Doctor en Historia por la Universidad de San Andrés. Es investigador adjunto del CONICET, profesor de la Universidad Nacional de La Pampa e invitado en el Departamento de Humanidades de la Universidad de San Andrés. Ha publicado *Los intelectuales católicos y el fin de la cristiandad (1955-1966)* (2006); *Cristianos antifascistas. Conflictos en la cultura católica argentina (1936-1959)* (2013) y (junto a Roberto Di Stefano) *Pasiones anticlericales. Un recorrido iberoamericano* (2014).

Referencias bibliográficas

Aboy Carlés, Gerardo y Gabriela Delamata (2001): «El Yrigoyenismo, inicio de una tradición». En: *Revista Sociedad*, n.º 17-18 (citado en página 87).

Acha, Omar (2010): «Tendencias de la afiliación en la Acción Católica Argentina (1931-1960)». En: *Travesía*, n.º 12, págs. 7-42 (citado en página 40).

Alvear, Marcelo Torcuato de (1936): *Democracia*. Buenos Aires: Gleizer (citado en página 107).

— (1937): *Acción democrática. Discursos pronunciados en la campaña de propaganda para la renovación presidencial*. Buenos Aires: Editorial Cultura (citado en páginas 107, 112).

— (1940): *¡Argentinos! Acción cívica*. Buenos Aires: Gleizer (citado en páginas 105, 106, 112).

Amadeo, Tomás (1939): *El falso dilema: fascismo o bolcheviquismo*. Buenos Aires: Librería del Colegio (citado en página 43).

Amaya, Adolfo (1993): *6 de septiembre de 1930*. Buenos Aires: Baudino (citado en página 59).

Ansaldi, Waldo (2000): *Nueva Historia Argentina*. Vol. 6: *La trunca transición del régimen oligárquico al régimen democrático*. Buenos Aires: Sudamericana (citado en página 48).

Aricó, José (1987): «Los comunistas argentinos y el movimiento obrero». En: *La Ciudad Futura*, n.º 4 (citado en página 71).

— (1999): *La hipótesis de Justo. Escritos sobre el socialismo en América Latina*. Buenos Aires: Sudamericana (citado en página 87).

Avner, Mara List (2006): *La Semana Trágica de Enero 1919 y los judíos: Mitos y realidades*. Faculty of Jewish History (citado en página 52).

Azaretto, Roberto (1983): *Historia de las fuerzas conservadoras*. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina (citado en páginas 20, 23).

Bazán, Armando, Gabriela De la Orden, Elsa Marchetti y Cristina Sierra (2000): *La Restauración Conservadora en Catamarca: 1930-1943*. Catamarca: Editorial Sarquis (citado en página 26).

Béjar, María Dolores (2004): «La construcción del fraude y los partidos políticos en la Argentina de los años treinta». En: *Cuadernos del CISH*, n.º 15-16, págs. 65-97 (citado en página 85).

— (2005a): «El régimen fraudulento desde la dinámica facciosa del conservadurismo bonaerense». En: *Revista de Historia*, n.º 1 (citado en página 20).

— (2005b): *El régimen fraudulento. La política en la provincia de Buenos Aires, 1930-1943*. Buenos Aires: Siglo XXI (citado en páginas 20, 25-27, 105).

Bianchi, Susana (1968): «Las contradicciones del radicalismo. Enfrentamientos con el peronismo». En: *El radicalismo*. Comp. por Luis Alberto Romero. Buenos Aires: Pérez Editor (citado en página 7).

— (2002): «La conformación de la iglesia católica como actor político-social. Los laicos en la institución eclesiástica; las organizaciones de élite (1930-1950)». En: *Anuario IEHS*, n.º 17, págs. 143-161 (citado en página 39).

Bisso, Andrés (2005): *Acción Argentina. Un antifascismo nacional en tiempos de Guerra Mundial*. Buenos Aires: Prometeo (citado en páginas 28, 102, 112).

Bobbio, Norberto (1996): *Derecha e Izquierda*. Madrid: Taurus (citado en página 56).

Bohoslavsky, Ernesto (2009): *El complot patagónico. Nación, conspiracionismo y violencia en el sur de Argentina y Chile (siglos XIX y XX)*. Buenos Aires: Prometeo (citado en página 52).

Bohoslavsky, Ernesto y Olga Echeverría (2012): «Las derechas: las palabras y las cosas». En: *Actas del segundo Taller de discusión. Las Derechas en el cono sur, siglo XX*. Buenos Aires: UNICEN (citado en página 56).

Botana, Natalio (1997): *La tradición republicana. Alberdi, Sarmiento y las ideas políticas de su tiempo*. Buenos Aires: Sudamericana (citado en páginas XV, 51, 63).

Botana, Natalio, Ezequiel Gallo y Eva Fernández, eds. (1997): *La crisis de 1930*. Buenos Aires: Instituto Torcuato Di Tella (citado en páginas 8, 12).

Brauner Rodgers, Susana (1990): «El nacionalismo yrigoyenista (1930-1943)». En: *Estudios interdisciplinarios de América Latina y el Caribe* vol. 1, n.º 2, págs. 79-98 (citado en página 7).

Buchrucker, Cristian (1987): *Nacionalismo y peronismo. La Argentina en la crisis mundial, 1927-1955*. Buenos Aires: Sudamericana (citado en páginas 53, 54, 57).

Caimari, Lila (1995): *Perón y la Iglesia Católica: religión, estado y sociedad en la Argentina, 1943-1955*. Buenos Aires: Ariel (citado en página 42).

Calviño, Marta (1968): «Las contradicciones del radicalismo durante la década infame». En: *El radicalismo*. Comp. por Luis Alberto Romero. Buenos Aires: Pérez Editor (citado en página 7).

Camarero, Hernán (2001): «Los comunistas argentinos en el mundo del trabajo, 1925-1943. Reflexiones historiográficas e hipótesis exploratorias». En: *Ciclos en la historia, la economía y la sociedad* vol. XI, n.º 2, págs. 137-155 (citado en página 71).

— (2009): «Apogeo y crisis de la militancia comunista en el movimiento obrero argentino de entreguerras. Un examen historiográficos y algunas líneas de interpretación». En: *Redes políticas y militancias. La historia política está de vuelta*. Ed. por Olga Ulianova. Santiago de Chile: Universidad de Santiago de Chile y Ariadna Ediciones, págs. 145-173 (citado en página 75).

Camarero, Hernán y Carlos Herrera, eds. (2005): *El Partido Socialista en la Argentina. Sociedad, política e ideas a través de un siglo*. Buenos Aires: Prometeo (citado en página 115).

Campione, Daniel (2007): «El Partido Comunista de la Argentina. Apuntes sobre su trayectoria». En: *El comunismo: otras miradas desde América Latina*. México, DF: Universidad Autónoma de México, págs. 167-215 (citado en página 78).

Cantón, Darío (1973): *Elecciones y partidos políticos en la Argentina. Historia, interpretación y balance: 1910-1966*. Buenos Aires: Siglo XXI (citado en páginas 24, 29).

Carulla, Juan (1958): «Entretelones de la revolución de 1930». En: *Revista de Historia Crítica*, n.º 3 (citado en página 58).

Casanova, José (1999): «Religiones públicas y privadas». En: *Caja de herramientas: el lugar de la cultura en la sociología norteamericana*. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes (citado en página 36).

Castro, Martín Omar (2008): *El ocaso de la república oligárquica: poder, política y reforma electoral, 1898-1912*. Buenos Aires: Edhasa (citado en página 37).

Caterina, Luis María (1995): *La liga Patriótica Argentina*. Buenos Aires: Corregidor (citado en página 52).

Cattaruzza, Manuel Alejandro (1997): *Marcelo T. de Alvear. El compromiso y la distancia*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica (citado en página 7).

— (2003): «El revisionismo: itinerario de cuatro décadas». En: *Políticas de la historia*. Buenos Aires: Alianza (citado en página 65).

— (2008): «Visiones del pasado y tradiciones nacionales en el Partido Comunista Argentino (ca. 1925-1950)». En: *A contracorriente. A journal on Social History and Literature in Latin American* vol. 5, n.º 2, págs. 165-195 (citado en página 82).

Cattaruzza, Manuel Alejandro y Alejandro Eujanian (2003): *Políticas de la historia: Argentina 1860-1960*. Buenos Aires: Alianza (citado en página 41).

Ciria, Alberto (1985): *Partidos y poder en la Argentina moderna (1930-1946)*. Buenos Aires: Hyspamérica (citado en página 116).

Compagnon, Olivier y Jean-Marie Mayeur (2003): *Jacques Maritain et l'Amérique du sud: le modèle malgré lui*. Villeneuve-d'Ascq: Presses universitaires du Septentrion (citado en página 45).

Copello, Santiago Luis (1959): *Cartas pastorales, decretos y documentos de eminencia reverendísima doctor Santiago Luis Copello, cardenal arzobispo de Buenos Aires, primado de la República Argentina*. Buenos Aires: Editorial Apostolado Catequístico (citado en página 39).

Corigliano, Francisco (2009): «La Argentina frente a la Segunda Guerra Mundial. La neutralidad acosada (1939-1945)». En: *Todo es Historia*, n.º 506, págs. 54-76 (citado en página 31).

Cucchetti, Humberto (2010): *Combatientes de Perón, herederos de Cristo: peronismo, religión secular y organizaciones de cuadros*. Buenos Aires: Prometeo (citado en página 50).

De Privitellio, Luciano (1997): *Agustín P. Justo. Los nombres del poder*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica (citado en páginas 22, 24, 27, 113, 116).

— (2001): «La política bajo el signo de la crisis». En: *Nueva Historia Argentina*. Vol. 7: *Crisis económica, avance del Estado e incertidumbre policía (1930-1943)*. Dir. por Manuel Alejandro Cattaruzza. Buenos Aires: Sudamericana (citado en páginas 22, 28, 31, 86, 101, 105, 113, 116).

— (2003): *Vecinos y Ciudadanos. Política y sociedad en la Buenos Aires de entreguerras*. Buenos Aires: Siglo XXI (citado en página 45).

De Privitellio, Luciano (2009): «El imperio de la voluntad popular: el fraude y el estudio de las elecciones en la primera mitad del siglo XX». En: *Ágora, Espacio de*

Historia y Ciencias Sociales, n.º 38. undación Cultural Santiago del Estero (citado en páginas 27, 85).

De Privitellio, Luciano e Ignacio López (2015): *Introducción*. url: `http://historiapolitica.com/dossiers/dossier-la-decada-del-treinta` (citado en página IX).

Del Mazo, Gabriel (1959): *El radicalismo. Ensayo sobre su historia y doctrina*. Buenos Aires: Ediciones Gure (citado en página 6).

Devoto, Fernando (2002): *Nacionalismo, fascismo, tradicionalismo en la Argentina moderna*. Buenos Aires: Siglo XXI (citado en páginas 52, 59, 63).

— (2014): «Para una reflexión en torno al golpe del 4 de junio de 1943». En: *Estudios Sociales*, n.º 46, págs. 171-186 (citado en páginas 33, 113).

Devoto, Fernando y María Inés Barbero (1983): *Los nacionalistas*. Buenos Aires: CEAL (citado en página 54).

Devoto, Fernando y Nora Pagano (2009): *Historia de la historiografía argentina*. Buenos Aires: Sudamericana (citado en página 65).

Di Stefano, Roberto (2011): «El pacto laico argentino (1880-1920)». En: *Boletín PolHis*, n.º 8 (citado en página 37).

Di Stefano, Roberto y José Zanca (2015): «Iglesia y catolicismo en Argentina. Medio siglo de historiografía». En: *Anuario de Historia de la Iglesia* vol. 24, págs. 15-45 (citado en página 36).

Di Tella, Guido, Alberto Petrecolla y Manuel Zymelman (1973): *Las etapas del desarrollo económico argentino*. Buenos Aires: Paidós (citado en página 64).

Díaz Araujo, Enrique (1998): *1930. Conspiración y Revolución*. Mendoza: UNCuyo (citado en página 58).

Dreyfus, Michel, Bernard Pudal, Claude Pennetier, Claudio Ingerflom, Bruno Groppo y Roland Lew (2000): *Le siècle des communismes*. París: Les Éditions de l'Atelier y Éditions Ouvrières (citado en página 69).

Echeverría, Olga (2001): «Los orígenes de las derechas autoritarias a principios del siglo XX. ¿Un movimiento antiliberal?» En: *Jornadas Culturas políticas y políticas culturales en la Argentina Contemporánea*. Buenos Aires: UNICEN (citado en página 63).

— (2005): «Los intelectuales antidemocráticos argentinos en las primeras décadas del siglo XX: la exclusión de género como una de los fundamentos de la definición autoritaria». En: *Revista Signos Históricos*, n.º 13. url: `https://maps.google.com/?q=Iztapalapa+13,+M%C3%A9xico&entry=gmail&source=g` (citado en página 52).

— (2009): *Las voces del miedo. Los intelectuales autoritarios argentinos en las primeras décadas del siglo XX*. Rosario: Prohistoria (citado en páginas 53, 55, 58).

— (2011): «Los intelectuales autoritarios argentinos y el golpe de estado de 1930: una historia de expectativas y frustraciones. Los casos de Leopoldo Lugones y Carlos Ibarguren». En: *Bicentenario. Revista de Historia de Chile y América* vol. 10, n.º 2 (citado en página 59).

— (2013): «Los intelectuales antidemocráticos frente a lo popular. Argentina, primera mitad del siglo XX». En: *Revista Historia y Espacio*, n.º 40 (citado en página 51).

Fernández, Eva, ed. (2012): *La presidencia de Ortiz*. Vol. 5. Buenos Aires: Instituto Torcuato Di Tella (citado en página 11).

Finchelstein, Federico (2002): *Fascismo, liturgia e imaginario. El mito del general Uriburu y la Argentina nacionalista*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica (citado en página 59).

— (2010): *Fascismo trasatlántico. Ideología, violencia y sacralidad en Argentina y en Italia, 1919-1945*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica (citado en página 54).

Fraga, Rosendo (1993): *El general Justo*. Buenos Aires: Emecé (citado en páginas 22, 27).

Franceschi, Gustavo (1940): *Totalitarismo, liberalismo, catolicismo*. Buenos Aires: Asociación de los Jóvenes de la Acción Católica Argentina (citado en página 49).

Frontera, Carlos Guillermo (2000): *La revolución del 6 de Septiembre de 1930*. Buenos Aires: UN del Sur (citado en página 58).

Furet, François (1995): *Le passé d'une illusion. Essai sur l'idée communiste au XXe. Siècle*. París: Robert Laffont y Calmann-Lévy (citado en página 69).

Gálvez, Manuel (1939): *Vida de Hipólito Yrigoyen*. Buenos Aires (citado en página 59).

Giménez, Sebastián (2012): «La juventud radical y la opción por los Frentes Populares (1935-1936)». En: VII Jornadas de Sociología de la UNLP (citado en páginas 12, 15, 116).

— (2013a): «FORJA revisitada. La Fuerza Orientadora Radical de la Joven Argentina y su programa político e intelectual (1935-1945)». En: *Sociohistórica. Cuadernos del CISH*, n.º 31, págs. 97-119 (citado en página 16).

— (2013b): «Radicalismo y reformismo: un análisis de su encuentro en los años 30 a través de tres estudios de caso». En: *Prohistoria*, n.º 20, págs. 67-87 (citado en página 10).

— (2014): «Un partido en crisis, una identidad en disputa. El radicalismo en la tormenta argentina (1930-1945)». Tesis doctoral. Universidad de Buenos Aires (citado en página 3).

— (2015): «El Comando del Litoral y la acción armada contra el régimen de la restauración conservadora en la primera mitad de los años treinta». En: *Folia Histórica del Nordeste*, n.º 24, págs. 15-41 (citado en página 3).

— (2016): «Del caos al orden, de la guerra a la paz. Marcelo Alvear y la difícil institucionalización del radicalismo en los años treinta». En: *Estudios Sociales. Revista Universitaria*, n.º 52 (citado en página 8).

Giménez, Sebastián y Ricardo Martínez Mazzola (2013): «Del claustro a la tribuna. Los universitarios reformistas y los partidos políticos en la década del 30». En: *Cuatrocientos años de la Universidad Nacional de Córdoba*. Vol. 2. Córdoba: Universidad Nacional de Córdoba, págs. 87-106 (citado en página 90).

Graciano, Osvaldo (2008): *Entre el compromiso político y la torre de marfil. Intelectuales de izquierda en la Argentina, 1918-1955*. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes (citado en página 93).

— (2010): «El Partido Socialista de Argentina: su trayectoria histórica y sus desafíos políticos en las primeras décadas del siglo XX». En: *A Contracorriente. Revista de historia social y literatura de América Latina* vol. 7, n.º 3 (citado en página 86).

Halperin Donghi, Tulio (2003): *La Argentina y la tormenta del mundo. Ideas e ideologías entre 1930 y 1945*. Buenos Aires: Siglo XXI (citado en página XIII).

— (2004): *La República Imposible (1930-1945)*. Buenos Aires: Ariel (citado en páginas X, XII, 4, 7, 13, 17, 25, 27, 28, 57, 60, 78, 85, 86, 88, 101, 102, 104, 106, 108, 112, 115, 116, 118).

Herf, Jeffrey (1993): *El modernismo reaccionario, Tecnología, cultura y política en Weimar y el Tercer Reich*. México, DF: FCE (citado en página 54).

Herrera, Carlos (2006): «Corrientes de izquierda en el socialismo argentino, 1932-1955». En: *Nuevo Topo. Revista de historia y pensamiento crítico*, n.º 2, págs. 127-153 (citado en página 92).

— (2007): *Las huellas del futuro. Breve historia del Partido Socialista de Argentina*. Buenos Aires: La Vanguardia (citado en página 86).

Herrero, Alejandro (2011): «La "república posible" y sus problemas en Argentina. Normalistas e industriales debaten el plan educativo alberdiano de las dos gestiones presidenciales de Julio Argentino Roca (1880-1886 y 1898-1901)». En: *Secuencia*, n.º 80 (citado en página 51).

Ibarguren, Carlos (1955): *La historia que he vivido*. Buenos Aires: Peuser (citado en página 57).

— (1975): «El significado y las proyecciones de la Revolución del 6 de septiembre». En: *La inquietud de esta hora y otros escritos*. Buenos Aires: Dictio (citado en páginas 62, 65).

Ibarguren, Federico (1969): *Orígenes del nacionalismo argentino*. Buenos Aires: Celcius (citado en páginas 53, 57, 58).

Iñigo Carrera, Nicolás (2005): «La clase obrera y la alternativa parlamentaria (1932-1936)». En: *El PS en Argentina: sociedad, política e ideas a través de un siglo*. Ed. por Hernán Camarero y Carlos Herrera. Buenos Aires: Prometeo, págs. 249-272 (citado en página 89).

Ivereigh, Austen (1994): «Escolastismo y secularismo. Una interpretación de la política argentina anterior al peronismo». En: *Sociedad y Religión*, n.º 12, págs. 22-48 (citado en página 43).

Jackisch, Carlota (1988): «El nacional socialismo en la Argentina». En: *Revista Libertas*, n.º 8 (citado en página 60).

Jauretche, Arturo (1962): *Forja y la década infame*. Buenos Aires: Peña Lillo Editor (citado en página 6).

Jenkins, Brian (2006): «The six fevrier 1934 and the "survival" of french republic». En: *French History* vol. 20, n.º 3, págs. 333-351 (citado en página 80).

Justo, Juan Bautista (1934): *La Iglesia y el Estado*. Buenos Aires: La Vanguardia (citado en página 41).

Korol, Juan Carlos (2001): «La economía». En: *Nueva Historia Argentina*. Vol. 7: *Crisis económica, avance del Estado e incertidumbre política (1930-1943)*. Buenos Aires: Sudamericana (citado en página 21).

Kozel, Andrés (2008): *La Argentina como desilusión*. México, DF: Nostromo (citado en página 53).

Lida, Miranda (2002): «Iglesia, sociedad y Estado en el pensamiento de monseñor Franceschi. De la "seditio" tomista a la "revolución cristiana" (1930-1943)». En: *Anuario IEHS*, n.º 17, págs. 109-123 (citado en página 43).

— (2015): *Historia del catolicismo en la Argentina entre el siglo XIX y el XX*. Buenos Aires: Siglo XXI (citado en páginas 38, 40, 44).

Lida, Miranda y Diego Mauro, eds. (2009): *Catolicismo y sociedad de masas en Argentina, 1900-1950*. Rosario: Prohistoria (citado en páginas 37, 38).

Llach, Juan (1984): «El Plan Pinedo de 1940, su significado histórico y los orígenes de la economía política del peronismo». En: *Desarrollo Económico*, n.º 92, págs. 515-558 (citado en páginas 104, 110).

López, Ignacio (2012): «La primacía de la política: nuevas visiones historiográficas sobre el sistema político argentino durante los años 30». En: IV Congreso Uruguayo de Ciencia Política. url: `http://www.aucip.org.uy/docs/cuarto_congreso/12111213%20-%20L%C3%B3pez,%20Ignacio.pdf` (citado en página 85).

— (2013): «Camino a la democratización: consideraciones sobre la política aperturista de Roberto M. Ortiz (1938-1940)». Tesis de Maestría. Universidad Torcuato Di Tella (citado en página 105).

Losada, Leandro (2015): «Las elites y los "males" de la Argentina. Juicios e interpretaciones en tres momentos del siglo XX». En: *Desarrollo económico* vol. 54, n.º 214, págs. 387-409 (citado en página XIII).

— (2016a): *Marcelo T. de Alvear. Revolucionario, presidente y líder republicano*. Buenos Aires: Edhasa (citado en páginas 7, 8, 109, 113, 116).

— (2016b): «República, democracia, libertad. Marcelo T. de Alvear y las ideas políticas en la Argentina de las décadas de 1920 y 1930». En: *Prismas. Revista de historia intelectual*, n.º 20 (citado en páginas 12, 117).

Löwy, Michael (2004): «Le concept d'affinité élective chez Max Weber». En: *Archives de sciences sociales des religions*, n.º 127, págs. 93-103 (citado en página 42).

Lugones, L (1917): *Mi beligerancia*. Buenos Aires: Otero y García (citado en página 54).

Lugones, Leopoldo (1979): «"La hora de la espada". Discurso pronunciado en Perú, en el centenario de la batalla de Ayacucho». En: *Leopoldo Lugones, Antología de poesía y prosa*. Caracas: Biblioteca Ayacucho (citado en página 54).

Luna, Félix (1958): *Alvear*. Buenos Aires: Libros Argentinos (citado en páginas 6, 7).

— (1978): *Ortiz. Reportaje a la Argentina Opulenta*. Buenos Aires: Sudamericana (citado en páginas 6, 27, 28).

— (1999): *Alvear*. Buenos Aires: Sudamericana (citado en páginas 106, 113).

Luzzi, Mariana (2002): «De la revisión de la táctica al Frente Popular. El socialismo argentino a través de Claridad, 1930-1936». En: *Prismas. Revista de historia intelectual*, n.º 6, págs. 243-256 (citado en página 93).

Lvovich, Daniel (2003): *Nacionalismo y antisemitismo en la Argentina*. Buenos Aires: Javier Vergara y Grupo Zeta (citado en páginas 39, 52).

Macor, Darío (1995): *Imágenes de los años treinta. La invención de la década del treinta en el debate político intelectual de la Argentina setentista*. url: `http://historiapolitica.com/datos/biblioteca/decadatreinta_macor.pdf` (citado en página 85).

— (1999): «Estado, democracia y ciudadanía». En: *Estado, democracia, ciudadanía*. Buenos Aires: REUN y Página/12 (citado en página 58).

— (2001): «Partidos, coaliciones y sistema de poder». En: *Nueva Historia Argentina*. Vol. 7: *Crisis económica, avance del Estado e incertidumbre policía (1930-1943)*. Ed. por Manuel Alejandro Cattaruzza. Buenos Aires: Sudamericana (citado en páginas 7, 19-22, 27, 86).

Macor, Darío y Susana Piazzesi (2005): «La cuestión de la legitimidad en la construcción del poder en la Argentina de los años treinta». En: *Cuadernos Sur Historia*, n.º 34 (citado en páginas 7, 27, 30, 85).

Malamud, Carlos (2000): «La evolución del Partido Demócrata Progresista y sus plataformas políticas (1915-1946)». En: *Anuario IEHS*, n.º 20, págs. 211-238 (citado en página X).

Mallimaci, Fortunato (2015): *El Mito de la Argentina laica*. Buenos Aires: Capital Intelectual (citado en página 48).

Mallimaci, Fortunato y Humberto Cucchetti, comps. (2011): *Nacionalistas y nacionalismos: debates y escenarios en América Latina y Europa*. Buenos Aires: Gorla (citado en página 42).

Mancini, M. (1985): «L'IOS e la questione del fronte unico negli anni Trenta». En: *L'Internazionale operaia e socialista tra le due guerre*. Ed. por Enzo Colloti. Milano: Fondazione Feltrinelli, págs. 177-198 (citado en página 76).

Maritain, Jacques (1933): *Tres Reformadores. Lutero, Descartes, Rousseau*. Buenos Aires: Editorial Santa Catalina (citado en página 43).

Martínez Mazzola, Ricardo (2011a): «Entre la autonomía y la voluntad de poder. El proyecto de intervención a la Provincia de Buenos Aires y la ruptura del PS en 1927». En: *Sociohistórica. Cuadernos del CISH*, n.º 28, págs. 77-107 (citado en página 87).

— (2011b): «La neutralidad como problema y como solución. La política gremial del Partido Socialista después de la ruptura sindicalista». En: *Identidades, Revista del Instituto de Estudios sociales y políticos de la Patagonia* vol. 1, n.º 1, págs. 1-20 (citado en página 95).

Martínez, Ilana (2012): «Por la vuelta a Marx. El ala izquierda del Partido Socialista Argentino, 1929-1935». Tesis de Licenciatura. Universidad Nacional de San Martín (citado en página 92).

Matsushita, Hiroshi (1986): *Movimiento obrero argentino, 1930-1945*. Buenos Aires: Hyspamérica (citado en páginas 91, 95-97).

Mauro, Diego (2010): *De los templos a las calles: catolicismo, sociedad y política: Santa Fe, 1900-1937*. Santa Fe: Universidad Nacional del Litoral (citado en páginas 41, 46).

— (2013): *Reformismo liberal y política de masas. Demócratas progresistas y radicales en Santa Fe (1921-1937)*. Rosario: Prohistoria (citado en página X).

McGee Deutsch, Sandra (1999): *Las Derechas: The Extreme Right in Argentina, Brazil, and Chile, 1890-1939*. Stanford: Stanford University Press (citado en página 38).

— (2003): *Contrarrevolución en la Argentina, 1900-1932: la Liga Patriótica Argentina*. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes (citado en página 52).

— (2013): «Mujeres, antifascismo y democracia: la Junta de la Victoria, 1941-1947». En: *Anuario IEHS*, n.º 28, págs. 157-175 (citado en páginas 77, 78).

McGee Deutsch, Sandra y Ronald Dolkart, eds. (1993): *The Argentine Right. Its History and Intellectual Origins: 1910 to the Present*. Wilmington, Delaware: Scholarly Resources Books (citado en página 57).

Meinvielle, Julio (1936): *Concepción católica de la economía*. Buenos Aires: Cursos de Cultura Católica (citado en página 43).

Melón Pirro, Julio César (1996): «Legislación y práctica electoral en la década de 1930. La "Ley trampa" y "el fraude patriótico"». En: *Los caminos de la democracia. Alternativas y Prácticas Políticas 1900-1943*. Ed. por Julio César Melón Pirro y Elisa Pastoriza. Buenos Aires: Biblos (citado en páginas 27, 85).

Meyer, Jean, ed. (2010): *Las naciones frente al conflicto religioso en México (1926-1929)*. México, DF: Tusquets (citado en página 38).

Mutsuki, Noriko (2004): *Julio Irazusta. Treinta años de nacionalismo argentino*. Buenos Aires: Biblos (citado en página 54).

Myers, Jorge (1995): *Orden y virtud. El discurso republicano en el régimen rosista*. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes (citado en página XV).

Nállim, Jorge (2014): *Transformación y crisis del liberalismo. Su desarrollo en la Argentina en el período 1930-1955*. Buenos Aires: Gedisa (citado en páginas XV, 118).

Navarro Gerassi, M. (1968): *Los nacionalistas*. Buenos Aires: Jorge Álvarez (citado en páginas 52, 57).

Newton, Ronald (1995): *El cuarto lado del triángulo. La amenaza nazi en la Argentina (1931-1947)*. Buenos Aires: Sudamericana (citado en página 28).

Oddone, Jacinto (1975): *Gremialismo proletario argentino*. Buenos Aires: Ediciones Líbera (citado en página 95).

Ospital, María Silvia (1994): *Inmigración y nacionalismo. La Liga Patriótica y la Asociación del Trabajo (1910-1930)*. Buenos Aires: CEAL (citado en página 52).

Palacio, Ernesto (1954): *Historia argentina 1515-1938*. Buenos Aires: ALPE (citado en página 57).

Parra, Graciana (2011): «Los demócratas tucumanos: entre el conservadurismo nacional y la Concordancia. La intervención a la provincia de Tucumán, 1933-1934». En: *Anuario del Centro de Estudios Históricos Prof. Carlos Segreti*, n.º 11, págs. 85-106 (citado en páginas 20, 26).

Pasolini, Ricardo (2005): «El nacimiento de una sensibilidad política. Cultura antifascista, comunismo y nación en la Argentina: de la AIAPE al Congreso Argentino de la Cultura, 1935-1955». En: *Desarrollo Económico* vol. 45, n.º 179, págs. 403-433 (citado en página 75).

— (2013): *Los marxistas liberales. Antifascismo y cultura comunista en la Argentina del siglo XX*. Buenos Aires: Sudamericana (citado en páginas 70, 82).

— (2015): «Historia e historiografía en Aníbal Ponce. La Revolución de Mayo y un pasado remoto para el comunismo argentino». En: *Episodios de la cultura histórica argentina. Celebraciones, imágenes y representaciones, siglos XIX y XX*. Buenos Aires: Biblos, págs. 120-138 (citado en página 69).

Persello, Ana Virginia (2004): *El partido radical. Gobierno y oposición, 1916-1943*. Buenos Aires: Siglo XXI (citado en páginas 7, 8, 21).

— (2007): *Historia del radicalismo*. Buenos Aires: Edhasa (citado en páginas 52, 106, 107, 113).

Piazzesi, Susana (2010): *Conservadores en provincia. El iriondismo santafesino. 1937-1943*. Santa Fe: Universidad Nacional del Litoral (citado en página 30).

Piemonte, Víctor (2016): «La compleja relación entre la dirección del Partido Comunista de la Argentina y la representación de la Comintern ante la ruptura de 1928». En: *Políticas de la memoria*, n.º 16, págs. 236-244 (citado en página 69).

Piepper Mooney, Jadwiga (2013): «El antifascismo como fuerza movilizadora: Fanny Edelman y la Federación Democrática Internacional de Mujeres (FDIM)». En: *Anuario IEHS*, n.º 28, págs. 207-226 (citado en página 77).

Piglia, Melina (2014): *Autos, rutas y turismo: el Automóvil Club Argentino y el estado*. Buenos Aires: Siglo XXI (citado en página 48).

Pinedo, Federico (1948): *En tiempos de la República*. 5 vols. Buenos Aires: Editorial Mundo Forense (citado en páginas 107, 108, 110, 114, 117).

Piñeiro, Elena (2007): «Los radicales antipersonalistas: Historia de una disidencia, 1916-1943». Tesis doctoral. Universidad Torcuato Di Tella (citado en páginas 21, 23, 24, 26).

— (2014): *Creyentes, herejes y arribistas. El radicalismo en la encrucijada, 1924-1943*. Rosario: Prohistoria Ediciones (citado en páginas 3, 21, 30).

Portantiero, Juan Carlos (1987): «Transformación social y crisis de la política». En: *La Ciudad Futura. Revista de Cultura Socialista*, págs. 15-15 (citado en página 28).

— (1999): *Juan B. Justo. Un fundador de la Argentina moderna*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica (citado en página 87).

— (2002): «Imágenes de la crisis: el socialismo argentino en la década de 1930». En: *Prismas. Revista de historia intelectual*, n.º 6, págs. 231-241 (citado en páginas 97, 99).

— (2003): *El Partido Socialista en los 30*. Mimeo (citado en página 99).

— (2005): «El debate en la socialdemocracia europea y el Partido Socialista en la década de 1930». En: *El PS en Argentina: sociedad, política e ideas a través de un siglo*. Ed. por Hernán Camarero y Carlos Herrera. Buenos Aires: Prometeo, págs. 299-320 (citado en página 98).

Potash, Robert (1986): *El Ejército y la política argentina*. Vol. 1: *1928-1945. De Yrigoyen a Perón*. Hyspamérica. Buenos Aires (citado en páginas 28, 30, 33, 109).

Prislei, Leticia (2008): *Los orígenes del fascismo argentino*. Buenos Aires: Edhasa (citado en página 60).

Rapalo, María Ester (2012): *Patrones y obreros: la ofensiva de la clase propietaria, 1918-1930*. Buenos Aires: Siglo XXI (citado en página 38).

Repetto, Nicolás (1957): *Mi paso por la política (De Uriburu a Perón)*. Buenos Aires: Santiago Rueda (citado en páginas 115, 116, 118).

Rock, David (1993): *La Argentina autoritaria. Los nacionalistas, su historia y su influencia en la vida pública*. Buenos Aires: Ariel (citado en página 53).

Roldán, Darío (2010): «La cuestión liberal en la Argentina en el siglo XIX. Política, sociedad, representación». En: *Un nuevo orden político. Provincias y estado nacional, 1852-1880*. Coord. por Beatriz Bragoni y Eduardo Míguez. Buenos Aires: Biblos (citado en página XV).

Rouquié, Alan (1981): *Poder militar y sociedad política en la Argentina*. Buenos Aires: Emecé (citado en página 33).

— (1994): *Autoritarismos y democracia. Estudios de Política Argentina*. Buenos Aires: Edicial (citado en página 57).

Rubinzal, Mariela (2011): «El nacionalismo frente a la cuestión social en Argentina (1930-1943). Discursos, representaciones y prácticas de las derechas sobre el mundo del trabajo». Tesis doctoral. Universidad Nacional de La Plata (citado en página 60).

Rubinzal, Mariela y José Zanca (2015): «Primeras Armas y sus pequeños lectores en la Argentina católica de entreguerras». En: *Iberoamericana*, n.º 60, págs. 117-132 (citado en página 40).

Sabato, Hilda (1999): *Nueva Historia Argentina*. Vol. 4: *La vida pública en Buenos Aires*. Dir. por Marta Bonaudo. Buenos Aires: Sudamericana (citado en página 50).

Saítta, Sylvia, comp. (2007): *Hacia la revolución. Viajeros argentinos de izquierda*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica (citado en página 69).

Sánchez Sorondo, M (1941): «Presencia del nacionalismo». En: *La revolución que anunciamos*. Buenos Aires: Nueva Política (citado en página 60).

Sanguinetti, Horacio (1984): *Los socialistas independientes*. Buenos Aires: Editorial de Belgrano (citado en página 21).

Santamaría, I. (1998): « Un prototype toutes missions: Le Comité de Lutte contre la Guerra dit "Amsterdam-Pleyel" ». En: *Communismes. Revue d'études pluridisciplinaires*, n.º 18-19, págs. 77-95 (citado en página 80).

Sarobe, José María (1957): *Memorias sobre la Revolución del 6 de septiembre de 1930*. Buenos Aires: Gure (citado en página 58).

Scarzanella, Eugenia (2007): «Cuando la patria llama: Italia en guerra y los inmigrantes italianos en Argentina». En: *Nuevo Mundo Mundos Nuevos*. doi: `10.4000/nuevomundo.3735`. url: `http://nuevomundo.revues.org/3735` (visitado 17 de abril de 2016) (citado en página 75).

Scenna, Miguel Ángel (1982): *FORJA. Una aventura argentina (de Yrigoyen a Perón)*. Buenos Aires: Editorial de Belgrano (citado en páginas 6, 16).

Schenkolewski-Kroll, Silvia (1999): «El Partido Comunista en la Argentina ante Moscú: deberes y realidades, 1930-1941». En: *Estudios Interdisciplinarios de América Latina y el Caribe* vol. 10, n.º 2, págs. 91-107 (citado en página 79).

Segovia, Juan (2006): «El modelo corporativista de estado en la Argentina, 1930-1945 entre el derecho, la política y la ideología». En: *Revista de Historia del Derecho*, n.º 34 (citado en página 58).

Solís Carnicer, María del Mar (2005): *Liderazgo y política en Corrientes: Juan Ramón Vidal, 1883-1940*. Corrientes: Moglia Ediciones (citado en página 20).

Tato, María Inés (2009): «Nacionalistas y conservadores, entre Yrigoyen y la década infame». En: *Conflictos en democracia. La vida política argentina entre dos siglos, 1852-1943*. Comp. por Lilia Ana Bertoni y Luciano De Privitellio. Buenos Aires: Siglo XXI, págs. 149-170 (citado en páginas 22, 56).

Tcach, César (1999): *Amadeo Sabattini. La nación y la isla*. Buenos Aires: Fondo de Cultura Económica (citado en página 13).

— (2007): «Un radicalismo exitoso en la Argentina de los treinta. El caso del sabattinismo cordobés». En: *Boletín Americanista* vol. LVII, n.º 57, págs. 133-156 (citado en páginas 7, 13).

Torre, Juan Carlos (2006): «La crisis argentina de principios de los años cuarenta y sus alternativas. El peronismo y los otros». En: *La Vieja Guardia Sindical y Perón*. Buenos Aires: EDUNTREF (citado en página 28).

Torre, Juan Carlos (2010): «Transformaciones de la sociedad argentina». En: *Argentina 1910-2010. Balance de un Siglo*. Buenos Aires: Taurus (citado en página 51).

— (2012): *Ensayos sobre movimiento obrero y peronismo*. Buenos Aires: Siglo XXI (citado en página 113).

Torres, José Luis (1940): *Algunas maneras de vender la patria*. Buenos Aires (citado en página 60).

— (1945): *La década Infame*. Buenos Aires (citado en página 61).

Tortti, María Cristina (1989): *Estrategia del PS. Reformismo político y reformismo sindical*. Buenos Aires: CEAL (citado en página 94).

— (1995): «Crisis, capitalismo organizado y socialismo». En: *Representaciones inconclusas. Las clases, los actores y los discursos de la memoria, 1912-1946*. Ed. por Waldo Ansaldi, Alfredo Pucciarelli y José Villarruel. Buenos Aires: Biblos (citado en páginas 98, 99).

Viñas, David (1971): *Literatura argentina y realidad política. De Sarmiento a Cortázar*. Buenos Aires: Siglo Veinte (citado en página 70).

Yeager, Gertrude Matyoka (1997): *Confronting Change, Challenging Tradition: Woman in Latin American History*. Lanham: Rowman & Littlefield Publishers (citado en página 40).

Zanatta, Loris (2005): *Del Estado liberal a la Nación católica. Iglesia y Ejército en los orígenes del peronismo, 1930-1943*. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes (citado en página 24).

— (2015): *La larga agonía de la nación católica: iglesia y dictadura en la Argentina*. Buenos Aires: Penguin Random House (citado en páginas 42, 48).

Zanca, José (2013): *Cristianos antifascistas: conflictos en la cultura católica argentina, 1936-1959*. Siglo XXI: Buenos Aires (citado en páginas 43, 45-47).

— (2014): «Intelectuales, curas y conversos. La sociabilidad de los Cursos de Cultura Católica en los años veinte». En: *Sociabilidades y vida cultural: Buenos Aires, 1860-1930*. Dir. por Paula Bruno. Buenos Aires: Universidad Nacional de Quilmes (citado en páginas 40, 47).

Zuleta Álvarez, E. (1975): *El nacionalismo argentino*. Buenos Aires: La Bastilla (citado en página 53).